





*Carrera judicial: Una propuesta de  
reforma verdaderamente estructural*



# Carrera judicial: Una propuesta de reforma verdaderamente estructural



**Instituto de Defensa Legal**

**Pontificia Universidad Católica del Perú**

Facultad y Departamento de Derecho

© Justicia Viva es el proyecto que viene ejecutando el consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal y la Facultad y el Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Manuel Villavicencio 1191, Lince  
Teléfono; (1) 422 0244 / Fax: (1) 422 1832  
Correo electrónico: justiciaviva@idl.org.pe  
web: www.justiciaviva.org.pe  
Lima, julio del 2005

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°: 2005-5016  
ISBN N° 9972-2625-3-7

Diagramación y diseño de carátula: Ali arte grafico Publicaciones SRL

Tirada: 1.000 ejemplares. Primera edición.

Impresión: Ali arte gráfico publicaciones srl  
Américo Vespucio 110 Covima, La Molina

☎ 349-6636 / aliarte@speedy.com.pe

Julio del 2005

“Esta publicación fue posible a través del apoyo provisto por la Oficina de Iniciativas Democráticas de la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo al Convenio suscrito N° 527-A-00-02-00221-11. Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos, USAID.”

## Contenido

Presentación	11
Exposición de Motivos	19
<i>1. Antecedentes</i>	19
<i>2. Los elementos fundamentales de la carrera judicial reconocidos por la Ceriajus</i>	21
2.1 Los principios rectores de la carrera judicial	21
2.2 Reforma del sistema de ingresos (selección y nombramiento)	22
2.3 Implementación de un sistema de evaluación y del cuadro de méritos	25
2.4 Reforma del régimen disciplinario	28
2.5 Los magistrados suplentes y provisionales	29
2.6 El régimen de derechos	30
<i>3. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional</i>	31
<i>4. Análisis costo beneficio</i>	31
Fórmula Legal	33
Título preliminar	33

Título I: Disposiciones generales	35
Título II: Ingreso a la carrera judicial	37
Capítulo I: Disposiciones generales	37
Capítulo II: Niveles diferenciados de ingreso a la carrera judicial	38
Sub-capítulo I: Ingreso de los jueces de paz letrado y de los jueces especializados y mixtos	38
Sub-capítulo II: Ingreso de los jueces de cortes superiores y de los jueces de la Corte Suprema	39
Capítulo III: Selección	40
Sub-capítulo I: Disposiciones generales	40
Sub-capítulo II: Selección de los jueces de paz letrados y de los jueces especializados y mixtos	43
Sub-capítulo III: Selección de los jueces de las cortes superiores y de los jueces de la Corte Suprema	44
Capítulo IV: Formación inicial	44
Capítulo V: Nombramiento	46
Capítulo VI: Cobertura de plazas	47
 Título III: Evaluación periódica del desempeño	 48
Capítulo I: Disposiciones generales	48
Capítulo II: Aspectos del desempeño judicial objeto de evaluación	49
Sub-capítulo I: Evaluación de la calidad de las resoluciones	50
Sub-capítulo II: Evaluación de la calidad en la gestión de los procesos	51
Sub-capítulo III: Evaluación de la eficiencia y rendimiento	52
Sub-capítulo IV: Evaluación de la organización del trabajo	55
Sub-capítulo V: Evaluación de las publicaciones	55
Sub-capítulo VI: Evaluación del desarrollo profesional	56
Capítulo III: Órganos competentes	56
Capítulo IV: Del procedimiento	60
Sub-capítulo I: Evaluación de la calidad de las resoluciones y gestión del proceso	60
Sub-capítulo II: Evaluación de la eficiencia y rendimiento	61
Sub-capítulo III: Evaluación de la organización del trabajo	61
Sub-capítulo IV: Evaluación de las publicaciones y desarrollo profesional	62



Capítulo V: Resultados y consecuencias de la evaluación	62
Capítulo VI: De los recursos	64
Capítulo VII: Regímenes especiales de evaluación	65
Capítulo VIII: Cuadro de méritos	65
Sub-capítulo I: Contenido y elaboración	65
Sub-capítulo II: Beneficios e incentivos	66
 Título IV: Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades	 67
Capítulo I: De los derechos	67
Sub-capítulo I: De los traslados, permutas y rotación	67
Sub-capítulo II: De los permisos y licencias	68
Sub-capítulo III: De la capacitación judicial	69
Sub-capítulo IV: Del mantenimiento de la especialización	70
Sub-capítulo V: De la remuneración	70
Capítulo II: De los deberes	71
Capítulo III: De las prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades	72
 Título V: Régimen de jueces de suplencia y provisionales	 73
 Título VI: Régimen disciplinario	 74
Capítulo I: Faltas disciplinarias	74
Capítulo II: Sanciones disciplinarias	78
Capítulo III: Investigación preliminar	79
Capítulo IV: Procedimiento disciplinario	80
Capítulo V: Plazos	80
Capítulo VI: Órganos competentes	80
 Título VI: Terminación de la carrera judicial	 81
 Disposiciones transitorias	 81
 Disposiciones finales	 83

## ANEXOS

- Anexo I. La propuesta del Congreso:** Proyecto de Ley N° 12419/2004-CR: Ley de carrera judicial. Elaborada por la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) del Congreso. 85
- Anexo II. La propuesta del Poder Judicial:** Proyecto de Ley N° 13230/2004-PJ: Ley orgánica de carrera judicial. Elaborada por la Comisión de Carrera Judicial del Poder Judicial y aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República 127

## ***Presentación***

*“Más vale un centímetro de juez que diez metros de ley”*

### **1. ¿Por qué una carrera judicial?**

¿Se puede imaginar una empresa donde no exista una política de selección, de evaluación o promoción del personal?; con mayor razón ¿es posible imaginar una institución del Estado con estas carencias?; peor aún ¿es posible impartir justicia, decidir controversias sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas sin tener un riguroso sistema de selección, evaluación y promoción que garantice que tengan esta potestad sólo aquellos que cuentan con los conocimientos y destrezas requeridos?.

Pues nosotros estamos cercanos de esa realidad, ya que la organización judicial que existe actualmente, y se arrastra casi desde siempre: no diferencia un magistrado eficiente de un mal magistrado y los expone a los mismos cuestionamientos; juzga sólo por la cantidad de sentencias que se emiten, sin tomar en cuenta la calidad de las mismas; le dice a un juez que más pesan los años que el buen desempeño, que hoy se desempeña en especialidad civil pero mañana puede hacerlo en penal, que para ascender le van a plantear exigencias irrazonables, que capacitarse es costoso porque no es una inversión en su carrera, que puede ser sancionado por eficiente, etc.

Una organización así sólo produce más de lo mismo: jueces que vencidos o libremente entregados a ella terminan por empaparse de su “cultura” y comienzan a reproducirla imponiéndosela a los nuevos miembros de la magistratura con el fin de perpetuarla. Por eso, nos urge un cambio. Y, si nos atacan dudas, podemos buscar un referente cercano en Colombia que desde la reforma constitucional de 1991 tiene una carrera judicial basada en el mérito, la cual ha mejorado el rendimiento de sus tribunales y la calidad del servicio que brindan, o en Guatemala

donde llevan casi un año debatiendo la implementación de su Ley de Carrera Judicial, o en Costa Rica y Nicaragua que van en el mismo camino.

## **2. Los Proyectos de Ley en carrera**

A comienzos del año pasado la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) aprobó por unanimidad las bases para la regulación de la carrera judicial que elaboró *Justicia Viva*, incluyéndolas en el Plan de Reforma que presentó al país. Sobre estas bases, la Comisión de Estudio del Congreso, presidida por el congresista Fausto Alvarado Doderó, preparó un Proyecto de Ley de Carrera Judicial que presentó el pasado 24 de febrero y que a la fecha se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

También a partir de las mismas bases aprobadas por la Ceriajus, *Justicia Viva* ha presentado a la Comisión de Justicia del Congreso un proyecto de articulado de la Ley de Carrera Judicial, el mismo que podría ser adoptado por algunos congresistas, caso en el cual correspondería conciliar ambos proyectos en un solo dictamen, para efectos de que el pleno decida sobre el tema.

Como la carrera judicial debe regularse por ley orgánica -ya sea porque le corresponde tal naturaleza por normar el funcionamiento de un poder del Estado, (artículo 106 de la Constitución), o porque modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial-, requiere una votación de mayoría calificada. Por eso, la aprobación de esta ley exige y pone a prueba el compromiso del Parlamento con la reforma del sistema de justicia, en tiempos electorales; compromiso que esperamos se honre, pues de no producirse un cambio del calado de éste, el Congreso no podrá luego excusarse de ser en parte responsable de que sigamos teniendo más de lo mismo.

## **3. Las principales instituciones de la carrera judicial que se propone**

La propuesta de bases para la regulación de la carrera judicial de Ceriajus y los proyectos Alvarado y de *Justicia Viva* coinciden en desarrollar como columna vertebral de sus propuestas los siguientes campos: (i) un nuevo sistema de ingreso a la magistratura; (ii) un sistema de evaluación del desempeño; (iii) la reformulación del cuadro de méritos y los derechos de los magistrados; (iv) la modificación del régimen disciplinario y (v) el nuevo régimen de jueces suplentes y provisionales.

El nuevo sistema de ingreso tiene por finalidad fortalecer los primeros niveles de la magistratura apostando porque ellos sean, quienes desde dentro, permitan además de un cambio en la carrera, dar la batalla por un cambio en la “cultura” judicial, irradiando este efecto en su natural desarrollo hacia los grados superiores.

Además, la estrategia paralela para fortalecer los niveles superiores de la magistratura consiste en captar abogados de prestigio cuya experiencia (cuestión que no se exige necesariamente para los primeros grados) y capacidad demostrada en una prueba de conocimientos sea suficiente aval de su idoneidad para el cargo.

De este modo, el sistema de ingreso se caracterizaría porque:

1. Permite que todos puedan postular a ocupar una plaza judicial en cualquier grado de la magistratura, salvo un tercio de las plazas de jueces especializados o mixtos que se reservan para ser ocupadas por ascenso directo, en orden de méritos, por los jueces de paz letrados.
2. Comprende dos regímenes de ingreso, uno para los dos primeros grados de la magistratura (jueces de paz letrado y jueces especializados y mixtos), y otro para los dos últimos (jueces superiores y supremos). Introduciendo la figura de la formación inicial como requisito posterior al proceso de selección y previo al nombramiento para el primer régimen, y en el segundo sólo, un curso breve de capacitación posterior al nombramiento, que pretende una rápida actualización en las labores propias del despacho.

Esta formación inicial tiene como fin complementar las deficiencias de la educación universitaria, y por ello se propone que no sea menor de un año, y esté dirigida principalmente a desarrollar las aptitudes, destrezas y conocimientos que se requieren para administrar justicia, entre los cuales destaquen la metodología de solución de casos y la incorporación de pasantías en diferentes entidades del sistema de justicia.

3. Aprovecha a los candidatos que superaron el proceso de selección pero no fueron nombrados porque no alcanzaron una plaza vacante, manteniéndolos en reserva por un año para ser nombrados cuando éstas se genere.
4. Permite acabar con el problema de los magistrados suplentes que vienen de la calle (abogados), al nombrar como jueces de suplencia a quienes han aprobado la formación inicial pero no han conseguido una plaza definitiva, por lo que se dedicarán a cubrir las ausencias temporales en ciertas plazas judiciales.
5. Lleva a nombrar en estricto respeto del cuadro de méritos, y sólo excepcionalmente, y con el voto no conforme y motivado de un tercio de sus miembros legales, el CNM podría apartarse de éste.

El sistema de evaluación del desempeño es una institución totalmente nueva

en nuestro ordenamiento, en el que el control de los jueces se reduce a una evaluación del respeto de sus deberes funcionales, lo cual resulta claramente insuficiente, pues no hay manera de identificar las graves falencias en el desempeño de la función jurisdiccional, y, en consecuencia, tampoco una estrategia adecuada para superarlas. Los elementos más importantes de este sistema, contemplados en la ley de carrera, además de los aspectos evaluados y la escala de rendimiento resumidos en el cuadro, son:

1. Los periodos cortos de evaluación, los criterios objetivos para evaluar cada uno de estos aspectos, así como el procedimiento correspondiente que incorpora el respeto al debido proceso, todo lo cual la diferencia de las ratificaciones.
2. El nivel insuficiente de rendimiento demuestra fehacientemente que el magistrado no tiene idoneidad para desempeñar el cargo, pues su desempeño produce tanto o más daño en los usuarios del servicio que un magistrado que incurre en faltas disciplinarias muy graves.
3. La relación de las medidas y beneficios a adoptarse como consecuencia del rendimiento que el magistrado haya demostrado en el proceso de evaluación.
4. El órgano competente para realizar la evaluación de los jueces es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero para el cabal cumplimiento de sus funciones deberá apoyarse en los órganos del Poder Judicial.
5. La separación es una consecuencia directa del rendimiento insuficiente de un juez, y es potestad exclusiva del CNM cuando se refiere a jueces supremos, y compartida con la Comisión de Carrera Judicial, cuando se refiere a jueces de otros grados.

La evaluación del desempeño y sus consecuencias debe entenderse compren-

Los aspectos del desempeño de los jueces que serán evaluados	Escala de rendimiento luego de la evaluación
(i) calidad de sus resoluciones, (ii) calidad en la gestión o dirección del proceso, (ii) organización de las labores en su despacho, (iv) eficiencia y rendimiento, (v) capacitación, y (vi) publicaciones.	(i) excelente, (ii) bueno, (iii) deficiente (que por ello requiere la implementación de urgentes medidas correctivas), e (iv) insuficiente (que establece un nivel inaceptable de rendimiento).

dida (por la teoría de los poderes implícitos desarrollada por el Tribunal Constitucional<sup>1</sup>) en el catálogo de poderes que debe detentar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque se trata del órgano que la Constitución ha previsto para administrar la carrera judicial, pues tiene a su cargo las facultades esenciales de su organización: ingreso, permanencia, ascenso y salida de la función judicial.

Además de ello, y teniendo en cuenta que hay facultades complementarias vinculadas a la carrera judicial que han sido atribuidas al Poder Judicial, el diseño orgánico propuesto para la separación de los jueces que incurren en los supuestos determinados en esta regulación, ha previsto que cuando no se trate de jueces supremos, esta decisión deba ser ratificada por la Comisión de Carrera del Poder Judicial. Así, esta Comisión podría dejar sin efecto la decisión de separación, sólo cuando así lo consideren dos tercios de sus integrantes por resolución motivada.

La reformulación del cuadro de méritos por grado, implica que será la ubicación que los jueces tengan en éste el principal criterio a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el desempeño y carrera de los mismos. Así, por ejemplo, determinará qué jueces deben ascender en calidad de provisionales o quiénes tienen preferencia para ser elegidos para una beca de estudios o para un cargo administrativo. Además, los componentes del cuadro de méritos se reducirían únicamente a dos: (i) los resultados de la evaluación del desempeño (en un 85%) y el récord disciplinario acumulado por el mismo periodo evaluado (en un 15%), dejando de lado el criterio de antigüedad.

En lo que se refiere a los derechos de los jueces las propuestas resaltan, en la línea de Ceriajus, el de capacitación y especialización, y se agrega también un desarrollo conciso del de remuneración. De la capacitación se insiste en su naturaleza de derecho a fin de que las instancias correspondientes permitan a los jueces acceder a diferentes medios formativos, ya sea por un sistema de licencias o de becas como reconocimiento a su rendimiento; pero también como obligación en caso que, según los resultados de la evaluación del desempeño, ello sea necesario. Lo que se pretende respecto del derecho de especialidad es asegurar que el juez no será cambiado o “rotado” arbitrariamente a una especialidad que no desea o en la que, aún contando con su consentimiento, no pueda desempeñarse adecuadamente.

En lo que se refiere al régimen disciplinario, el principal motivo de su modifica-

---

<sup>1</sup> Tema desarrollado ampliamente en el expediente de acción de inconstitucionalidad N° 013-2002-AI/TC.

ción consiste en adecuarlo a los principios de legalidad y tipicidad especificando un listado de faltas de manera más precisa a como se contemplan actualmente, haciendo así, más previsible cuándo se incurre en ellas. También se busca una adecuación al principio de proporcionalidad, estableciendo una relación entre la gravedad de las faltas y el tipo de sanción a imponerse. Por último, también se corrigen algunos aspectos procedimentales para mayor eficacia en la imposición de la sanción, reduciendo los márgenes de posible abuso o impunidad. Así, por ejemplo, ahora es posible determinar que “ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera del despacho judicial” es una falta grave que amerita destitución, en un procedimiento en el que la posibilidad de poner queja prescribe a los tres meses y no a los 30 días.

A resultas de lo dicho, consideramos que por fin se está discutiendo una reforma verdaderamente estructural y que se encuentra en la base de todo cambio orgánico del sistema de justicia. Es muy difícil imaginar un Poder Judicial que carezca de un sistema de evaluación periódica, y sin embargo en el Perú lo tenemos desde tiempos inmemoriales. Por tanto, ha llegado la hora de comenzar por el principio y en ello hay que poner los mejores esfuerzos. Afortunadamente, las propuestas presentadas en el Congreso parten de un excelente documento de bases que permite guardar fundadas esperanzas respecto de su desarrollo normativo.

*Consortio Justicia Viva*



Propuesta de Ley de carrera judicial  
elaborada por el Consorcio Justicia viva

Proyecto de Ley N° 12980/2004-CR



## *Exposición de motivos*

### **1. Antecedentes**

Si bien es difícil establecer la fecha en la que comenzó el proceso de reforma del sistema de justicia o reforma judicial en sede nacional, los años setenta son un buen referente<sup>1</sup>, por lo que, siendo así, estaría próximo a cumplir 30 años. Desde entonces hasta la fecha, diversas han sido las propuestas y los cambios normativos que han acompañado este proceso todavía inconcluso.

En lo que se refiere a iniciativas de reforma del Poder Judicial, las más importantes han sido las propuestas de Ley Orgánica elaboradas por la Comisión Alzamora, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y sus asesores, y, más recientemente, por la Comisión Estrada. La primera bajo el marco de la Constitución de 1979, y las dos últimas bajo la Constitución vigente. Sin embargo, y por diferentes motivos, ninguna de ellas logró plantear una regulación integral y sistemática de la carrera judicial. La Comisión de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), creada por Ley 28083, del 4 de octubre de 2003, es la primera comisión oficial en presentar un trabajo sistemático e integral para la regulación de la carrera judicial, elaborado a partir de algunos antecedentes nacionales, referencias de investigadores nacionales y extranjeros y, legislación comparada.

Sin embargo, pueden evidenciarse algunos puntos de preocupación e incluso de soluciones comunes entre aquellas propuestas y las aprobadas por la Ceriajus, tales como, por ejemplo, la preocupación por: (i) que la carrera judicial se organice

---

<sup>1</sup> Pues a estos años se remontan los antecedentes señalados por la Comisión Alzamora, encargada de proyectar en 1985 una nueva Ley Orgánica para el Poder Judicial, por disposición del entonces Ministro de Justicia, Dr. Luis Gonzáles Posada. (CATACORA, Manuel; DE BELAUNDE, Javier; LINARES, Octavio y MANCHEGO, Hugo, *Nueva estructura del Poder Judicial*, s/e: Lima, 1988, presentación.)

entorno al mérito de los magistrados; (ii) que se evalúe el desempeño de los magistrados y ello se refleje en un cuadro de méritos y; (iii) eliminar a los magistrados suplentes no profesionales al ser un elemento de distorsión de la magistratura.

En lo que se refiere al mérito, por ejemplo, resulta ilustrativo recoger una de las citas en base a las cuales la Comisión Alzamora organizó su trabajo: *“Todos estamos de acuerdo en que es necesario que la carrera judicial sea una verdadera carrera y que exista el estímulo del ascenso para el magistrado competente y honrado; todos estamos de acuerdo también, en que un ascenso mecánico consultará la antigüedad pero no consultará la competencia, la laboriosidad y la honradez. Y entonces, es necesario prescindir el ascenso mecánico y aplicar el principio de lo que podríamos llamar el ascenso calificado, comenzando por la Corte Suprema<sup>2</sup>.”*

Pero el mérito no debe regir sólo el ascenso, sino también el ingreso y la permanencia en la función judicial.

Sobre la evaluación del desempeño de los magistrados puede encontrarse un antecedente, aunque demasiado escueto, en el proyecto de Ley de Carrera Judicial elaborado por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que sólo se conformaba con citarla, sin diseñar o desarrollar ninguno de sus elementos esenciales; es decir, sin prever un sistema integral de evaluación.

Por último, en lo que atañe a los jueces de suplencia, el proyecto de la Comisión Alzamora se encarga expresamente de eliminarlos y sustituirlos por los que denominaba magistrados supernumerarios<sup>3</sup>, que son jueces nombrados a fin de cubrir las ausencias temporales de los jueces titulares en sus despachos.

Una segunda característica importante del proyecto de carrera judicial de la Ceriajus es que éste no presenta un articulado, sino las bases o lineamientos esenciales sobre los que debe estructurarse la Ley de Carrera Judicial. Por ello, su recepción legal exige el desarrollo de un articulado que sepa mantenerse fiel a las bases y que, al mismo tiempo, sepa avanzar sobre los planteamientos que así lo exigen.

En este sentido, ya se ha presentado en la Comisión de Justicia del Congreso un proyecto de Ley de Carrera Judicial que desarrolla la propuesta de bases de la Ceriajus; sin embargo, todavía es posible perfeccionar algunos problemas sistemáticos, vacíos y contradicciones, tanto internas como con el mismo proyecto de bases de la Ceriajus que mantiene este proyecto. Ésta es precisamente la finalidad de este proyecto.

---

<sup>2</sup> BELAUNDE, Víctor Andrés, *El debate constitucional*, Edic.: Lima, 1966 p. 176.

<sup>3</sup> CATACORA, Manuel ..., p. XXVIII.

## **2. Los elementos fundamentales de la carrera judicial reconocidos por la CERIAJUS**

### ***2.1. Los principios rectores de la carrera judicial***

La Ceriajus se preocupa por establecer los que considera como los principios rectores que deben guiar toda la regulación de la carrera judicial, y entre ellos, deben destacarse los de independencia, mérito y eticidad, como los más importantes.

La independencia es lo que da sentido a la carrera judicial, pues ésta se estructura con la finalidad de crear y mantener las condiciones que permitan a los jueces permanecer libres de cualquier interferencia o presión en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya sea que éstas tengan su fuente dentro o fuera de la organización judicial.

Directamente relacionados con este principio se encuentran el principio de mérito y el de eticidad, pues, precisamente, para garantizar la independencia, la carrera judicial debe organizarse en torno a la capacidad y rendimiento y a la probidad, procurando que las decisiones que los afectan, positiva o negativamente, se fundamenten únicamente en sus méritos y sobre su comportamiento ético en el desarrollo de sus funciones. Por tanto, estos son los criterios que deben guiar: (i) el proceso de selección y el nombramiento; (ii) los ascensos definitivos y en calidad de provisionales; (iii) el proceso de evaluación del desempeño de los magistrados; (iv) la elaboración del cuadro de méritos y sus consecuencias; y (v) el régimen disciplinario.

Coherente con esto último, la propuesta de la Ceriajus tiene el fin expreso de eliminar la antigüedad como criterio para guiar las decisiones a adoptarse sobre los magistrados, pues ella no garantiza idoneidad.

Por último, la inamovilidad y permanencia, también principios rectores de la carrera judicial, deben entenderse en los términos en que son recogidos en nuestra Constitución, según la cual, los magistrados tienen derecho a la permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función<sup>4</sup>. Es decir, una vez más se defiende la inamovilidad y permanencia, salvo que el mérito y la conducta ética del magistrado en el desempeño de sus funciones exijan su separación.

---

<sup>4</sup> Artículo 146º, inciso 3. "...El Estado garantiza a los magistrados judiciales: su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función."

## **2.2. Reforma del sistema de ingresos (selección y nombramiento)**

Es bien conocido que el sistema de ingresos a la magistratura o de ascensos en ella ha sufrido varios cambios tratando de acercarse, cada vez más, al modelo que garantice de mejor manera que los recursos humanos que se incorporan sean de calidad. Pero que al mismo tiempo, no sólo sean buenos, sino que deban su nombramiento sólo y únicamente a sus méritos y conducta ética y no a ningún otro factor que podría, desde un comienzo, mellar su independencia.

De esta manera se ha pasado de un sistema de nombramientos por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura, a un sistema en que el mismo Consejo es el encargado de seleccionar y nombrar<sup>5</sup>.

Ahora bien, lo que propone Ceriajus es mejorar el sistema de ingreso, principalmente, en las siguientes características:

- (i) hacer más idóneas y exigentes las evaluaciones de los candidatos a jueces;
- (ii) regular un sistema especial de evaluación para los candidatos que quieren ser magistrados supremos, por la importancia del cargo;
- (iii) diferenciar entre el ingreso a los dos primeros niveles de la magistratura y el ingreso a los dos últimos, en razón al perfil y exigencias también distintas de los candidatos a estos niveles;
- (iv) reforzar los dos primeros niveles con la formación inicial posterior a la selección pero previa al nombramiento y, reserva de una cantidad de vacantes para ser ocupadas por ascenso directo; y,
- (v) establecer un mecanismo legal mediante el cual se garantice que los candidatos sean nombrados según el orden que ocuparon en los resultados de las evaluaciones (orden de méritos), y no por la voluntad, subjetividad o arbitrariedad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Además de precisiones de detalle, respecto a las evaluaciones, la Ceriajus propone que cada una de las etapas del proceso de selección (examen escrito, evaluación curricular y entrevista personal) sean cancelatorias, pues sólo así se evitará que, tal como sucede actualmente, sean nombrados como magistrados aquellos postulantes que han demostrado su falta de conocimiento (por haber desaprobado el examen), pero que llegan hasta la entrevista y al nombramiento gracias a un *currículum vitae* inflado, cuya nota se promedia con la del examen.

---

<sup>5</sup> Ver cuadro de la evaluación constitucional del sistema de nombramiento de los magistrados en el Perú. En: EGUIGUREN PRAELI, SILES VALLEJOS, GONZALES MANTILLA, ESPINOSA-SALDAÑA, *Propuestas para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial*, PUCP: Lima, 2002, p. 259.

El sistema especial para los candidatos a magistrados supremos tendría su aterrizaje en un examen escrito estructurado de manera diferente, no como una prueba objetiva de opción múltiple, sino como una evaluación dirigida a descubrir no sólo su conocimiento e interpretación; sino su criterio y discernimiento para la interpretación de la norma en contextos sociales especialmente difíciles o para formarse opinión crítica sobre la problemática judicial y sus posibles soluciones<sup>6</sup>.

Siendo que, los modelos de ingreso a la carrera judicial, “cerrado”<sup>7</sup> (en los que sólo puede ingresarse a ella por el primer nivel) o “abierto” (en los que puede ingresarse en cualquiera de sus niveles) ya se encuentran en retirada, dejando paso a los modelos mixtos (que son los que mayoritariamente se presentan en la legislación comparada) debe advertirse que la elección del modelo debe partir de la necesidad de buscar un cambio estructural en nuestro sistema de justicia. En atención a ello, la Ceriajus opta por un sistema mixto en el cual para los niveles iniciales se exige pasar por la Academia de la Magistratura, en tanto que para jueces superiores o supremos se diseña un concurso público en el que participan sin cuotas prefijadas jueces, abogados y profesores universitarios.

En efecto, este modelo de ingreso busca fortalecer los dos primeros niveles de la carrera judicial para efectos de consolidar la base de la cual podrá esperarse en el futuro un rendimiento de mayor calidad y eficiencia de los magistrados. También con este fin, la estructura del proceso de selección para estos dos primeros niveles comprende dos etapas: (i) la selección realizada por concurso público organizado por el Consejo Nacional de la Magistratura y (ii) la formación inicial organizada por la Academia de la Magistratura<sup>8</sup>.

Una vez consolidada la base, los jueces podrán competir con los abogados externos por una vacante en los niveles superiores de la magistratura, sin necesidad de contar con cuotas reservadas que podrían mellar la legitimidad originariamente obtenida. Claro que para asegurar que esta competencia sea justa y objeti-

---

<sup>6</sup> Modificación cuya importancia ya estaba sustentada y propuesta en: PÁSARA, Luis, *Propuesta de Modificación del Reglamento de selección y nombramiento de jueces y fiscales*, Justicia Viva: Lima, 2003, publicado en: <http://www.justiciaviva.org.pe/otros/imaviso2.doc>

<sup>7</sup> Modelo que rigió en Chile hasta la última reforma, citando el documento de Bases para la regulación de la carrera judicial y fiscal aprobado por la Ceriajus, p. 20.

<sup>8</sup> Modelo que se corresponde con el recogido en Chile, España, y Colombia, donde la formación es posterior a la selección pero anterior al nombramiento, y es exigible sólo para acceder a los dos primeros niveles, salvo en este último país donde también se exige tal formación para ser magistrado superior, pero no para acceder al cargo de magistrado supremo. EGUIGUREN PRAELI ..., *Propuestas para la reforma de ...*, pp. 261- 262.

va, tal y como también propone Ceriajus, deben mantenerse criterios diferenciados para evaluar el desempeño de los postulantes en razón a su desarrollo profesional como jueces, abogados o docentes. Así, por ejemplo, la producción de libros no puede tener el mismo puntaje para un juez que para un abogado dedicado a la docencia, pues resulta que para éste tal producción es lo mínimo exigible mientras que para aquél, esa producción es excepcional.

Por último, si bien es cierto que el artículo 154, inciso 1, de la Constitución, diferencia entre la función de selección y de nombramiento que atribuye al Consejo Nacional de la Magistratura, la interpretación que se ha venido sosteniendo de la función de nombramiento ha terminado por anular el principio del mérito y afectar el de independencia en el sistema de ingreso, que es precisamente lo que la propuesta de Ceriajus busca evitar, optando por una interpretación menos lesiva de estos principios.

En efecto, actualmente se considera que una vez concluida la etapa de selección y elaborado el cuadro de méritos que refleja el rendimiento en las evaluaciones, el Consejo puede, en ejercicio de su función de nombramiento y ya no de selección, nombrar a cualquiera de ellos sin respetar el orden de méritos y, lo que es más grave aún, sin motivar por qué este orden no se respeta. Lo cual, sumado a la posibilidad de que lleguen a la entrevista personal (también subjetiva) quienes han desaprobado el examen de conocimientos, termina por abolir el principio de capacidad y el de independencia, según el cual sólo deben ser jueces los mejores y sólo deben serlo gracias a su mérito y no a otras causas.

Por ello, se propone que la interpretación correcta de la función de nombramiento del CNM no afecte estos principios, lo cual, sucedería sosteniendo que, en la etapa de nombramiento el Consejo debe respetar el cuadro de méritos y sólo puede no hacerlo (es decir, no nombrar al candidato que se encuentre primero en el cuadro), cuando los dos tercios de sus miembros consideran que existe una razón grave para ello, la misma que explicitarán en la resolución correspondiente. Situación que sólo podrá repetirse en cada plaza hasta con tres candidatos aptos sucesivos. De no considerar a ninguno de ellos para ocupar la plaza, ésta se declarará desierta, procediendo a nombrar para las siguientes.



### ***2.3. Implementación de un sistema de evaluación y del cuadro de deméritos***

La implementación de un sistema de evaluación integral de todos los aspectos del desempeño del juez es un paso trascendental y aún pendiente, pues constituye un hito en la regulación de la función judicial, en la que hasta la fecha no existe una institución que evalúe la calidad, eficiencia y eficacia del desempeño judicial. Ello no ha permitido, en consecuencia, contar con el instrumento adecuado para identificar sus problemas y aplicar medidas correctivas para mejorar la función. En efecto, lo único que se ha controlado hasta la fecha, y que responde a un supuesto muy diferente, es el cumplimiento de los deberes funcionales (la puntualidad, la asistencia, etc.).

En algún momento, tanto el cuadro de méritos como las ratificaciones judiciales, pudieron ser usados para evaluar el desempeño, y algo se adelantó en la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecía criterios para formar este cuadro, y en la Ley Orgánica del CNM cuando se establecieron algunos criterios relativos al desempeño del juez para evaluarlo –todos ellos por cierto insuficientes y algunos no idóneos. Sin embargo, la ratificación no era la mejor alternativa, tanto porque sólo podía realizarse cada 7 años, cuanto porque quedó desfigurada desde que el CNM entendió que no había necesidad de motivación.

Ahora bien, un sistema de evaluación adecuado, recogido expresamente en las disposiciones sobre la Carrera Judicial, debe, en opinión de Ceriajus, regular:

- (i) los diferentes aspectos o factores del desempeño judicial que serán objeto de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la evaluación final;
- (ii) cuáles serán los criterios de evaluación de cada aspecto o factor a evaluarse;
- (iii) cuál será la escala de rendimiento que decidirá los resultados de la evaluación;
- (iv) la identificación de las deficiencias en el desempeño y la implementación de medidas correctivas; la identificación de un rendimiento meritorio y de un rendimiento por debajo de los niveles aceptables, y las consecuencias en ambos casos;
- (v) el procedimiento de evaluación;
- (vi) el órgano encargado de la evaluación y la determinación de sus consecuencias, respetando para ello los lineamientos constitucionales;
- (vii) la posible separación por rendimiento deficiente; y,
- (viii) los elementos que conforman el cuadro de méritos.

Teniendo en cuenta que la evaluación compromete elementos esenciales del estatuto de los jueces, su desarrollo normativo no puede quedar librado a un reglamento, pues de ser así se estaría abriendo la posibilidad de una afectación directa a la independencia interna del juez, en caso el encargado de desarrollar este reglamento sea el propio Poder Judicial; o se estaría debilitando la garantía normativa de este estatuto al permitir, por la naturaleza de la norma, su constante variabilidad. Por ello, Ceriajus considera necesaria la regulación detallada de este tema en la Ley.

Los aspectos objeto de evaluación, así como los pesos asignados a cada uno de ellos, han sido ya fijados en la propuesta de Ceriajus, y son: (i) la calidad de las resoluciones judiciales (30%) y en la gestión o dirección del proceso (20%); (ii) la eficiencia o rendimiento, o en otras palabras, productividad del juez (30%); (iii) la organización del trabajo que el juez ha establecido en su despacho (10%); (iv) las publicaciones (5%) y (v) el desarrollo profesional (5%)<sup>9</sup>.

Lo que corresponde entonces al articulado es desarrollar cuáles serían los elementos evaluados dentro de cada uno de estos aspectos, así como, los criterios de evaluación, excluyendo siempre como tales, según Ceriajus, las apreciaciones u opiniones del superior (expresado, por ejemplo, en el número de resoluciones revocatorias de las resoluciones de instancia), pues ello implicaría presumir que el superior siempre tiene la razón, lo que no es necesariamente cierto; y además, causaría el efecto nocivo de sancionar la innovación o el criterio disidente de los jueces de grados menores, con el consecuente anquilosamiento de la creatividad judicial.

Si bien la propuesta de Ceriajus no establece una escala de rendimiento, sí señala su importancia, pues según ella se establecerá cuándo se aprueba o desaprueba la evaluación, y, por ello, también de ella dependerán las consecuencias que en cada caso correspondan.

De esta manera, se propone una escala de rendimiento con cuatro niveles, dos superiores que reflejan un rendimiento aceptable y óptimo (bueno y excelente), y dos inferiores, uno refleja un rendimiento insuficiente y en el límite de lo aceptable (por lo que requiere urgentes medidas correctivas), y uno segundo deficiente, que evidencia un rendimiento por debajo de los niveles aceptables.

---

<sup>9</sup> Debe advertirse que las sanciones disciplinarias no pueden ser objeto de evaluación, puesto que responden a una lógica totalmente diferente de evaluación del cumplimiento de los deberes funcionales, y no del desempeño de las funciones jurisdiccionales.

Por ello, si bien es cierto que la evaluación de desempeño no tiene como finalidad primordial la separación del juez —sino la identificación de las falencias para mejorarlas y del mérito del buen juez para reconocerlo e incentivarlo—, también se puede afirmar que, en caso se identifiquen rendimientos inaceptables en quien cumple tan elevada labor, se tenga que evitar que se perpetúen en el cargo, pues ello iría en contra de lo dispuesto por la misma Constitución cuando, en su artículo 146, inciso 3, señala que la permanencia en el cargo judicial depende de la idoneidad y conducta que demuestre el juez.

En esta misma línea, debemos tener presente que en el diseño constitucional, el órgano que tiene por finalidad encargarse de las facultades esenciales de la carrera judicial: ingreso, permanencia, ascenso y salida de la función judicial es el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto quiere decir que la Constitución ha previsto que la carrera judicial debe ser administrada por ese órgano constitucional, de modo que una materia tan significativa en este campo, como la evaluación permanente y sus consecuencias, debería encontrarse comprendida (teoría de los poderes implícitos desarrollada por el Tribunal Constitucional<sup>10</sup>) en el catálogo de poderes que debe detentar el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que quiere decir que, paralelamente a las funciones expresamente reconocidas por el artículo 154 de la Constitución, se puede deducir de la finalidad de Consejo Nacional de la Magistratura, que también le corresponde la titularidad de la evaluación periódica del desempeño de los integrantes de la judicatura.

Además de ello, y teniendo en cuenta que hay facultades complementarias vinculadas a la carrera judicial que han sido atribuidas al Poder Judicial, el diseño orgánico propuesto para la separación de los jueces que incurren en los supuestos determinados en esta regulación, ha previsto que esta decisión deba ser ratificada por la Comisión de Carrera del Poder Judicial. Esta Comisión podría dejar sin efecto dicha decisión sólo en el caso que así lo consideren dos tercios de sus integrantes y exista una justificación razonable que debe explicitarse como motivación al tomarse la decisión respectiva.

---

<sup>10</sup> Según la teoría de los poderes implícitos, reconocida por el Tribunal Constitucional. Expediente de acción de inconstitucionalidad N° 013-2002-AI/TC: “*no es exacto que, cuando la Constitución no lo haya previsto, el legislador ordinario se encuentre vedado de asignar una competencia a un órgano constitucional o de relevancia constitucional. Es el caso desde luego de atribuciones que no encontrándose expresamente previstas en la Constitución, sin embargo, son inmanentes a la función (poderes implícitos)*” (Fundamento N° 1 de la sentencia. El subrayado es nuestro).

Debemos tener presente, además, que la regulación del procedimiento de evaluación permanente es minuciosa y busca garantizar la máxima objetividad y eficiencia. Esto deviene en un componente esencial del ejercicio de esta potestad evaluadora, habida cuenta que los derechos de ascenso, capacitación y permanencia de los magistrados son requisitos centrales de su independencia, por lo que se hace imprescindible conocer tanto a los jueces que brindan un servicio de justicia que puede calificarse de excelente, cuanto a aquellos que lo hacen de manera insuficiente o deficiente, debiendo aplicar, a continuación los incentivos o correctivos correspondientes.

Por último, de conformidad con los principios de capacidad y probidad que rigen la carrera judicial, el cuadro de méritos debe ser confeccionado únicamente con los resultados de la evaluación de desempeño y el récord disciplinario del magistrado, sin que se tomen en cuenta otros criterios no relevantes que podrían terminar mediatizando la importancia de estos dos aspectos. Los resultados de la evaluación pasarán a conformar un 85% del total del cuadro de méritos, mientras el récord disciplinario ocupará el restante 15%.

#### ***2.4. Reforma del régimen disciplinario***

De la misma manera en que resulta necesario reformar el sistema de ingreso, la propuesta de la Ceriajus, recogida en este proyecto, también plantea la necesidad de reformar el actual régimen disciplinario en cuatro de sus principales aspectos:

- (i) la tipificación más clara y menos abstracta de las faltas disciplinarias, para que se respeten los principios de legalidad y tipicidad, y en concreto, el mandato de determinación que éstos contienen;
- (ii) la graduación de la gravedad de las faltas, a fin de que ello permita respetar el principio de proporcionalidad que debe existir entre las faltas y las sanciones a imponerse;
- (iii) la reforma de algunos elementos del procedimiento que permitan hacer de éste un instrumento más eficaz para la investigación y sanción de las faltas disciplinarias; y,
- (iv) la reforma de los órganos competentes para ejercer la función de control disciplinario sobre los jueces, a fin de evitar los trámites engorrosos y la intervención de órganos que podrían afectar la independencia interna de los magistrados.

Por lo primero, y con la finalidad de cumplir con el principio de legalidad y tipicidad, la propuesta de Ceriajus presenta un nuevo elenco mucho más detallado de faltas disciplinarias. Por lo segundo, se ha diferenciado las faltas en atención a la gravedad de las mismas en: a) faltas leves, b) faltas graves y c) faltas muy graves; a las que corresponde a su vez un determinado tipo de sanción. A las faltas leves corresponde el apercibimiento o multa, a las faltas graves corresponde la suspensión, y a las faltas muy graves la destitución, pudiendo el órgano titular de la potestad disciplinaria graduar la extensión de cada una de estas sanciones.

Para hacer más eficaz el procedimiento disciplinario, y siguiendo las indicaciones de las bases aprobadas por Ceriajus, se considera necesario ampliar, en un doble sentido, el plazo actual de caducidad para presentar quejas contra la infracción de deberes funcionales en los que incurrir los jueces. Primero, superando largamente el breve plazo de 30 días y, al mismo tiempo, contando este plazo desde que la conducta es conocida y no sólo ocurrida. También con este fin, se propone que la rehabilitación de las faltas sea cada 2 años.

### ***2.5. Los magistrados suplentes y provisionales***

Los cambios introducidos en los diferentes aspectos de la carrera judicial, reclaman por sí mismos para efectos de mantener la coherencia interna del modelo, la necesidad de mejorar el sistema actual de designación de jueces suplentes y provisionales.

Con este fin, la propuesta de Ceriajus considera necesario regresar a la categoría de jueces supernumerarios de la Comisión Alzamora, a quienes ahora denomina “jueces de suplencia”, y que se caracterizan por ser jueces de carrera nombrados como tales, que no están asignados a un despacho, porque tienen como fin cubrir las ausencias temporales de los magistrados titulares. Estos jueces pueden también optar por ocupar una plaza en forma definitiva como titular de la misma, en caso esta se abra luego de finalizado el concurso, habida cuenta que han pasado por la misma selección de quienes fueron nombrados como titulares, y tienen todos los derechos y deberes de éstos.

Con esta figura Ceriajus busca eliminar la perniciosa presencia temporal de abogados de la calle en la carrera judicial, que actualmente permite la regulación de los jueces suplentes.

Respecto de los provisionales, que ahora sólo serán designados en ausencia de los respectivos jueces de suplencia, resulta necesario cambiar el sistema de nom-

bramiento a fin de que se sustente únicamente en los resultados del cuadro de méritos. Con ello se pretende eliminar la presencia de cualquier otro criterio, como el de antigüedad, que mediatice el de capacidad y mérito.

## **2.6. *El régimen de derechos***

La propuesta presentada por Ceriajus prioriza el especial reconocimiento de los derechos de capacitación y especialización, lo que no quiere decir que no recoja otros, tales como la remuneración o las licencias, aunque sin un desarrollo detallado.

Sobre la capacitación, se advierte que resulta necesario diferenciar la que se brinda a los jueces a partir de dos criterios: (i) su finalidad y (ii) su carácter voluntario u obligatorio. En efecto, para el primer caso, se distingue entre formación inicial que debe brindarse a los aspirantes y formación a proporcionar a quienes ya son magistrados; mientras que para el segundo, consideran que debe ser obligatoria la formación en los temas en los que la evaluación ha demostrado que el magistrado es deficiente; y es voluntaria para los casos en que los jueces quieren mejorar su calidad.

Se pone especial preocupación en lo que debe ser el diseño de la formación inicial, pues como se ha mencionado en los puntos precedentes, este es uno de los instrumentos más importantes (junto con un sistema de ingresos diferenciado y de ascensos) para fortalecer la base de la carrera judicial.

Asimismo, a fin de contribuir a racionalizar los programas de capacitación regular que se prestan a los magistrados, se establece la necesidad de que estos tengan como un insumo importante los resultados que arroja la evaluación del desempeño y que, al mismo tiempo, se incorpore en esta evaluación los mecanismos que permitan medir el impacto, positivo o negativo, de los cursos dictados por la Academia.

Por último, si bien tanto la especialización como el derecho a mantenerla se encuentran reconocidos en la legislación actual, también es cierto que existen muchas otras disposiciones que parecerían vulnerarlos, como sucede, por ejemplo, con el caso de las rotaciones o designación de magistrados provisionales que no tienen en cuenta la especialidad de los jueces sobre los que recaen estas designaciones. Por eso, el proyecto considera, siguiendo lo acordado por Ceriajus, que hay que poner particular atención para eliminar las potestades que permiten tales decisiones, fortaleciendo los derechos vinculados con la permanencia, estabilidad y especialidad de los magistrados.

### **3. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional**

La regulación de la Carrera de los Jueces debe tener naturaleza de Ley Orgánica por mandato constitucional. Así tenemos, que el artículo 106 de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que “mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución (...)”. Es por esta norma que resulta imperativo, sobre todo tratándose un órgano como el Poder Judicial, que la carrera de los jueces sea regulada mediante ley orgánica, habida cuenta que los principales funcionarios del Poder Judicial son los jueces y que éstos serán los encargados de seguir el mandato de impartición de justicia señalado en el artículo 138 de nuestra Carta.

En esta misma línea, la doctrina nacional e internacional indican que una forma de dotar de mayores garantías de independencia e imparcialidad al Poder Judicial es que la ley que va a regir el estatuto de los jueces sea una ley orgánica, dada la votación calificada que se necesita para su aprobación y modificación. En este sentido, Montero Aroca en su obra *Introducción al Derecho Jurisdiccional Peruano* expresa que una de las garantías formales de la independencia de la judicatura es “la necesidad de ley orgánica”, la cual debe entenderse en el sentido de que “(...) también por ley orgánica (...) debe regularse el estatuto personal de los jueces y magistrados”<sup>11</sup>.

En tal sentido, la presente norma implicará la derogación de diversos dispositivos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, además de las respectivas leyes conexas.

### **4. Análisis costo beneficio**

En lo que respecta a los costos, la aprobación de esta iniciativa legislativa no implica una fuerte contribución del Erario Público. Su aprobación, más bien, lleva principalmente a invertir en la puesta en marcha de un sistema que tenga a su cargo la medición periódica del desempeño de cada juez, mejorando, a su vez, el sistema de estadísticas del Poder Judicial. Ambos puntos deben ser atendidos por el pliego Poder Judicial y deberían ser concretados haciendo uso de la intangibilidad del proyecto de presupuesto judicial.

---

<sup>11</sup> MONTERO AROCA, Juan, *Introducción al Derecho Jurisdiccional Peruano*, EMARCE: Lima, primera edición, 1999, p. 118.

De otro lado, la aprobación de esta iniciativa traería consigo importantes beneficios que, en general, tienen un impacto positivo sobre la independencia del Poder Judicial, la autonomía e imparcialidad del juez, el desempeño institucional, la confianza ciudadana, entre otros temas. Así, entre los beneficios encontramos:

- Mayor estabilidad jurídica, al contar con un jueces idóneos y probos;
- Predictibilidad en el campo de la solución de las controversias;
- Reducción de la duración de los procesos, al tener un conocimiento mayor de los instrumentos de gestión del despacho y de los elementos técnicos requeridos para la función judicial;
- Establecimiento de un sistema de ingreso y ascenso en la carrera judicial sobre la base de la capacidad y probidad;
- Dotar de una adecuada formación previa a los candidatos a jueces que ingresan la carrera en los primeros niveles de la magistratura, así como de un mecanismo de selección idóneo para jueces de las cortes superiores y suprema.
- Implantación de un sistema bianual de evaluación de los magistrados en sus funciones jurisdiccionales y de administración de despacho con el objetivo velar porque éste mantenga niveles óptimos de idoneidad, calidad y eficiencia.
- Elaboración de un cuadro de méritos de magistrados (inexistente a la fecha);
- Ordenamiento del régimen disciplinario para los magistrados en lo que respecta a la mayor determinación de las faltas, la proporcionalidad entre faltas y sanciones, y la mayor eficacia del proceso; y,
- Reconocimiento de los derechos de capacitación, especialización y traslados de los magistrados.



## ***Fórmula legal***

### **TÍTULO PRELIMINAR**

Todos los componentes de la carrera judicial deben estar estructurados en función a los siguientes principios.

#### **Primero.- Independencia e imparcialidad**

La carrera judicial garantiza que los jueces ejerzan sus funciones sujetos únicamente a la Constitución y a la ley, con independencia e imparcialidad.

#### **Segundo.- Idoneidad en el ejercicio de la función**

La carrera judicial asegura que los jueces cumplan sus funciones de manera eficiente, contribuyendo a una pronta y eficaz impartición de justicia, en la que se expresen los criterios de razonabilidad, predictibilidad e interdicción de la arbitrariedad.

#### **Tercero.- Eticidad**

Sólo podrán ingresar y mantenerse en la carrera judicial quienes respeten los más altos valores éticos que deben fundamentar la actuación de quien cumple la función judicial.

#### **Cuarto.- Organización funcional**

Los jueces desempeñan por igual la potestad jurisdiccional que la Constitución les confiere, aunque con competencia funcional distinta, quedando los superiores únicamente habilitados a revisar sus decisiones en caso de que se hayan interpuesto los medios impugnatorios o mecanismos previstos por ley.

#### **Quinto.- Participación ciudadana y transparencia**

La carrera judicial busca la legitimidad democrática de los jueces en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, estará abierta a la participación de la ciudadanía, salvo las restricciones señaladas por la ley.

#### **Sexto.- Sistema de méritos**

El ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial, y asimismo, cualquier decisión referida a ésta, salvo en el ámbito disciplinario, debe regirse por un sistema de méritos que reconozca y promueva a quienes demuestren ser los mejores candidatos o jueces.

#### **Sétimo.- Especialización**

La carrera judicial debe garantizar y preservar la especialización de los jueces, salvo cuando se presenten las excepciones señaladas por ley.

#### **Octavo.- Capacitación permanente**

La carrera judicial debe proveer la permanente y óptima capacitación de los jueces.

#### **Noveno.- Debido proceso, la tipicidad y legalidad de las sanciones**

La carrera judicial debe asegurar que las decisiones que afecten la permanencia de los jueces en sus cargos sean tomadas previo procedimiento, en el que se respeten las garantías del debido proceso y, en caso de que se trate de la imposición de una sanción, los principios constitucionales de tipicidad y legalidad.

#### **Décimo.- Estabilidad e inamovilidad**

La carrera judicial garantiza la estabilidad de los jueces en la función que ejercen. También les garantiza el derecho a no ser trasladados de su cargo sin su consentimiento y a mantener su especialidad, salvo que existan necesidades del servicio y en supuestos claramente especificados por ley.

#### **Décimo primero.- Responsabilidad**

El juez responde penal, civil y administrativamente por el inadecuado ejercicio de la función jurisdiccional, de acuerdo a las normas correspondientes. Por lo tanto, dicha función no puede ser desempeñada con arbitrariedad o irrazonabilidad.

## **TÍTULO I**

### **DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Artículo 1.- Objeto y fines de la carrera**

La Ley de Carrera Judicial tiene por objeto establecer el conjunto de normas y principios que regulan el ingreso, permanencia, ascenso y terminación del cargo de juez; asimismo, regula la responsabilidad disciplinaria en que incurran los jueces en el ejercicio de sus funciones y los demás derechos y obligaciones propios de la función judicial.

La carrera judicial tiene como fin principal garantizar la independencia, idoneidad y estabilidad de los jueces.

#### **Artículo 2.- Perfil del juez**

Está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales que aseguran que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces podrán responder de manera adecuada a las demandas de justicia requeridas por la sociedad. En tal sentido, las principales características de un juez serán su:

1. formación jurídica sólida;
2. capacidad para razonar el orden jurídico a partir de casos concretos;
3. capacidad para interpretar normas creativamente;
4. aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;
5. condiciones para ejercer la función con independencia propia de una institución democrática;
6. visión crítica del funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia;
- y,
7. trayectoria personal éticamente irreprochable.

#### **Artículo 3.- Componentes**

Los componentes de la carrera comprenden los siguientes aspectos:

1. ingreso: selección, formación, nombramiento;
2. permanencia: ascenso, evaluación periódica del desempeño y terminación; y,
3. control disciplinario.

#### **Artículo 4.- Estructura de la carrera**

Forman parte de la estructura de la carrera judicial los jueces que acceden a ella conforme a lo previsto en la Constitución, la presente ley y las normas relacio-

nadas. La carrera judicial comprende:

1. jueces de paz letrados;
2. jueces especializados y mixtos;
3. jueces de las Cortes Superiores; y,
4. jueces de la Corte Suprema.

Los jueces de paz se rigen por sus propias normas.

#### **Artículo 5.- Requisitos comunes para ser juez**

Son requisitos comunes para el ingreso y permanencia en la carrera judicial:

1. ser peruano de nacimiento;
2. ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;
3. tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley;
4. no haber sido condenado por delito doloso, ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva del fallo condenatorio, por delito doloso;
5. no encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta;
6. no poseer deficiencia física o mental debidamente acreditada que haga imposible el ejercicio de la función a su cargo;
7. no haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial, del Ministerio Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la Administración Pública o de empresas estatales o de la actividad privada por falta grave;
8. tener una trayectoria democrática y de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos; y,
9. no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por ley.

Los órganos competentes del Poder Judicial y Consejo Nacional de la Magistratura se desarrollarán las disposiciones previstas sobre el perfil del juez indicadas por la presente ley.

**TÍTULO II**  
**INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL**  
**CAPÍTULO I**  
**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 6.- Definición**

El ingreso a la carrera judicial es consecuencia de un proceso de selección y formación, que culmina con el nombramiento y la juramentación del cargo ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

**Artículo 7.- Convocatoria**

La convocatoria para el ingreso a la carrera judicial, deberá comprender todas las vacantes existentes y podrá prever un número adicional que permita cubrir las que se produzcan hasta la siguiente convocatoria.

**Artículo 8.- Tipos de cargos dentro de la judicatura**

Según corresponda, los postulantes que hayan superado el proceso de selección serán nombrados, en estricto orden de mérito y según su elección, en calidad de:

1. jueces titulares;
2. jueces de suplencia; y,
3. candidatos en reserva o en lista de elegibles.

Los jueces titulares son aquellos a los que se nombra de manera permanente para el ejercicio de la función judicial en el nivel que corresponda.

Los jueces de suplencia son nombrados para cubrir las plazas que los jueces titulares dejan temporalmente, en los casos que la ley señala.

Los candidatos en reserva o en lista de elegibles, son aquellos que no habiendo obtenido un cargo como juez titular o suplente opten por esperar la existencia de una plaza vacante. Esta condición podrá tenerse sólo por un año, en tanto cumpla con los requisitos para ser juez, determinados por la presente ley.

## **CAPÍTULO II**

### **NIVELES DIFERENCIADOS DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL**

#### **Artículo 9.- Ingreso diferenciado a la carrera judicial**

El ingreso de la carrera judicial es diferenciado y se realizará por alguna de las siguientes vías:

1. mediante un concurso de selección, llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura y, posterior aprobación de un curso de formación inicial para el caso de los jueces de los dos primeros niveles: jueces de paz letrados y jueces especializados y mixtos.
2. mediante la selección y nombramiento por el Consejo Nacional de la Magistratura para el caso de los jueces de los dos últimos niveles: jueces de las Cortes Superiores y jueces de la Corte Suprema.

#### **Sub-capítulo I**

#### **Ingreso de los jueces de paz letrado y de los jueces especializados y mixtos**

#### **Artículo 10.- Carrera semi-abierta**

El ingreso a los dos primeros niveles de la carrera judicial es directo por concurso público y se produce tras haber alcanzado la condición de apto luego de cursar la formación inicial. Sin embargo, una de cada tres vacantes de juez especializado o mixto será reservada para el ascenso.

#### **Artículo 11.- Etapas del ingreso a la carrera judicial en los dos primeros niveles**

El ingreso a la carrera judicial como juez de paz letrado y como juez especializado o mixto, se produce por concurso público que comprende las siguientes etapas:

1. convocatoria pública al concurso por parte del Consejo Nacional de la Magistratura;
2. proceso de selección de los postulantes para su ingreso a la Academia de la Magistratura;
3. aprobación del curso de formación inicial; y,

4. nombramiento en el cargo judicial o inscripción en el registro de candidatos en reserva.

#### **Artículo 12.- Requisitos para ser juez de paz letrado y juez especializado y mixto**

Los requisitos específicos para ser juez de paz letrado, juez especializado o mixto son:

1. ser mayor de 25 años;
2. tener título de abogado;
3. tener una experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía de tres años desde que se obtuvo el título de abogado, haber desempeñado el cargo de juez titular por más de tres años, o haber desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por el mismo periodo.  
Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria los periodos, en una y otra condición, son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea;
4. tener una trayectoria democrática y respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos;
5. haber superado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura; y,
6. haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación inicial a cargo de la Academia de la Magistratura.

### **Sub-capítulo II**

#### **Ingreso de los jueces de Cortes Superiores y de los jueces de la Corte Suprema**

#### **Artículo 13.- Etapas del ingreso a la carrera judicial en los dos últimos niveles**

El ingreso a los dos últimos niveles de la carrera judicial se produce directamente por concurso público, que comprende las siguientes etapas:

1. convocatoria pública al concurso;
2. proceso de selección de los postulantes;
3. nombramiento en el cargo y elaboración del registro de candidatos en reserva; y,

4. aprobación del curso de capacitación realizado por la Academia de la Magistratura.

#### **Artículo 14.- Requisitos para ser juez superior**

Los requisitos específicos para ser juez superior son:

1. ser mayor de 32 años;
2. tener título de abogado;
3. haber ejercido el cargo de juez especializado o mixto titular, por más de cinco años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en disciplina jurídica, por un período no menor de siete años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea;
4. tener una trayectoria democrática de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos;
5. haber superado las evaluaciones del proceso de selección previstas para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura.

#### **Artículo 15.- Requisitos para ser juez supremo**

Los requisitos específicos para ser juez supremo son:

1. ser mayor de 45 años;
2. tener título de abogado;
3. haber ejercido el cargo de juez superior titular cuando menos diez años; o alternativamente, haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en disciplina jurídica por quince años; y,
4. haber superado las evaluaciones del proceso de selección previsto por el Consejo Nacional de la Magistratura.

### **CAPÍTULO III**

#### **SELECCIÓN**

##### **Sub-capítulo I**

##### **Disposiciones generales**

#### **Artículo 16.- Fines del proceso de selección**

La finalidad del proceso de selección es elegir a los postulantes más compe-



tentes, entendiendo por tales a quienes hayan demostrado capacidad y probidad para el ejercicio del cargo, según el perfil del juez señalado en el artículo 2 de la presente ley.

#### **Artículo 17.- Convocatoria**

La convocatoria la realiza el Consejo Nacional de la Magistratura en coordinación con el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura.

El aviso de convocatoria especifica las plazas vacantes que se desean cubrir, los plazos de las fases del proceso de selección, la nota mínima aprobatoria, la valoración que se le da a los distintos componentes de la evaluación.

#### **Artículo 18.- Inscripción y verificación**

El proceso de selección se inicia con la inscripción de postulantes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, luego de lo cual se publicará la lista de inscritos.

A partir de la publicación de la lista de inscritos, se abrirá un período de quince días calendario para presentar tachas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26 de la presente ley. Una vez resueltas, el Consejo Nacional de la Magistratura elabora una lista de postulantes aptos, para continuar con el proceso de selección.

#### **Artículo 19.- Fases del proceso de selección**

Las fases del proceso de selección son las siguientes:

1. evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos, mediante la prueba escrita;
2. calificación rigurosa de los antecedentes y desarrollo profesional del postulante por medio de la evaluación del *curriculum vitae* u hoja de vida;
3. evaluación psicológica por medio de la aplicación de un test;
4. valoración de la trayectoria social y probidad por medio del control ciudadano; y,
5. evaluación personal en entrevista.

Durante el proceso de selección el Consejo Nacional de la Magistratura, estará obligado a ponderar en cada una de las fases del proceso de selección los requerimientos correspondientes a cada uno de los niveles.

#### **Artículo 20.- Transparencia del proceso de selección**

La selección de nuevos jueces se realizará bajo reglas de transparencia y participación ciudadana. Por ningún motivo este proceso se desarrollará sin la

debida difusión a la población en general.

Sólo la evaluación escrita y el test psicológico son privados. Sin embargo, los resultados de todas las pruebas realizadas, salvo los de esta última, serán públicos.

#### **Artículo 21.- Nota aprobatoria y carácter eliminatorio de las fases del proceso de selección**

La nota aprobatoria en cada etapa del proceso de selección y en el resultado final debe ser la correspondiente a dos tercios de la nota máxima.

El resultado de cada una de las tres evaluaciones iniciales previstas en el artículo 19 es de carácter eliminatorio.

#### **Artículo 22.- Examen escrito**

El examen escrito tiene por finalidad evaluar: habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para el ejercicio del cargo. Deberán considerarse componentes esenciales de esta prueba: (i) el razonamiento jurídico, (ii) la capacidad creativa y de interpretación, (iii) la apreciación crítica de las instituciones, y (iv) la capacidad de redacción.

#### **Artículo 23.- Curriculum vitae**

El *curriculum vitae* será calificado teniendo en cuenta los siguientes campos: (i) la formación académica; (ii) capacitación; (iii) publicaciones; (iv) experiencia profesional; e, (v) idiomas. La experiencia deberá evaluarse en función de la condición en que se postula, es decir, como juez del Poder Judicial, como abogado o docente universitario.

#### **Artículo 24.- Prueba psicológica**

La prueba psicológica sólo servirá para identificar casos patológicos que impidan a un candidato ser juez. La elaboración de esta prueba estará a cargo de un ente especializado elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El test psicológico se realizará en estricto acto privado. Sólo se conocerá la aprobación o no de esta prueba.

#### **Artículo 25.- Entrevista personal**

La entrevista tendrá prioritariamente las siguientes finalidades:

1. evaluar la vocación del postulante hacia la judicatura;
2. conocer sus criterios sobre los principios jurídicos, valores éticos y sociales;

3. analizar el grado de conocimiento de la realidad de la judicatura;
4. indagar sobre su conocimiento acerca de los problemas sociales que son objeto de su trabajo;
5. conocer sus opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial y la reforma del sistema de justicia; y,
6. saber si tienen una visión clara de qué se espera de su función.

La evaluación personal se realizará teniendo en cuenta el *curriculum vitae* del postulante, las tachas y denuncias presentadas, el récord de faltas y sanciones, los resultados del examen escrito y la declaración jurada de bienes.

#### **Artículo 26.- Tachas y denuncias**

La ciudadanía podrá hacer uso de tachas y denuncias contra los postulantes a la judicatura. El procedimiento estará debidamente normado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Las tachas declaradas fundadas eliminan a candidatos que no cumplan con los requisitos para postular. El plazo para presentarlas es de quince días calendario, después de haberse publicado la lista de postulantes inscritos. El proceso para resolver la tacha no podrá durar más de quince días, incluyendo la reconsideración.

A lo largo de todo el proceso de selección se pueden presentar denuncias sobre los postulantes, las cuales deben ser tenidas en cuenta por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al momento de la entrevista.

Sólo en casos excepcionales, cuando medie prueba nueva, la denuncia podrá tener la consecuencia de una tacha.

### **Sub-capítulo II**

#### **Selección de los jueces de paz letrados y de los jueces especializados y mixtos**

#### **Artículo 27.- Peso de las fases de evaluación**

El porcentaje designado en cada fase de la evaluación para los postulantes a jueces de paz letrados y jueces especializados y mixtos es:

1. la prueba escrita, 50% del total de la calificación;
2. *curriculum vitae* u hoja de vida de los postulantes, 35% del total de la calificación; y,
3. la entrevista, 15% del total de la calificación.

### **Sub-capítulo III**

#### **Selección de los jueces de las Cortes Superiores y de los jueces de la Corte Suprema**

##### **Artículo 28.- Peso de las fases de evaluación**

El porcentaje designado en cada fase de la evaluación para los jueces superiores y los jueces supremos será el siguiente:

1. la prueba escrita, 35% del total de la calificación;
2. el *curriculum vitae* u hoja de vida de los postulantes, 50% del total de la calificación; y,
3. la entrevista; 15% del total de la calificación.

##### **Artículo 29.- Prueba escrita**

La prueba escrita de los jueces de los últimos niveles buscará respetar la especialidad de los postulantes en relación a la plaza a la que postulen.

El contenido de los exámenes para candidatos a juez de la Corte Suprema será diferente del correspondiente a los demás cargos. Éste consiste en preparar, en el acto del examen, un trabajo sobre un aspecto de la temática judicial y su reforma, que se le plantee, y en emitir opinión sobre casos judiciales, reales o hipotéticos, que le sean sometidos.

### **CAPÍTULO IV**

#### **FORMACIÓN INICIAL**

##### **Artículo 30.- Finalidad, ámbito subjetivo y entidad responsable**

La formación inicial es requisito para el ingreso a la judicatura en los dos primeros niveles, y ofrece, a quien la haya superado, la capacitación necesaria para el ejercicio eficiente de sus funciones.

La formación inicial está a cargo de la Academia de la Magistratura.

##### **Artículo 31.- Dedicación del candidato y extensión de la formación inicial**

El candidato se dedicará a tiempo completo a la formación inicial. Para ello se implementará un sistema de becas cuyos montos no será menor a 2/3 de la Unidad Impositiva Tributaria.

### **Artículo 32.- Duración**

La formación inicial tendrá una duración de un año calendario, dividido en cuatro trimestres académicos. La semana académica será de 44 horas lectivas.

### **Artículo 33.- Áreas de formación**

La formación inicial contempla como mínimo tres áreas:

1. conocimientos sobre ramas generales del derecho y sobre la actividad judicial, impartidos por medio de resolución de casos y discusiones. Para ello, las materias a abordarse, serán, entre otras, las siguientes: derechos fundamentales, razonamiento jurídico, comprensión de hechos y solución de problemas jurídicos, teoría general de la prueba, dirección y gestión del proceso, construcción jurídica de resoluciones, organización del despacho judicial, eficiencia en la actividad jurisdiccional;
2. prácticas simuladas en las funciones propias del juez, por ejemplo, dirección de audiencias, redacción de sentencias, etc., y pasantías en los distintos órganos del sistema de justicia; y
3. elaboración de propuestas de solución de problemas que se presentan tanto a nivel legal como a nivel funcional, privilegiando aquellas que pueden ser implementadas por el propio Poder Judicial o por el mismo juez. Para ello se dictarán cursos de investigación donde el candidato elaborará una investigación sobre las necesidades concretas de reforma de la justicia ordinaria y comunal.

Dichas áreas se abordarán en cada uno de los cuatro trimestres. El área signada con el numeral 2, deberá ir ampliando el número de horas lectivas progresivamente conforme avanza la formación inicial.

### **Artículo 34.- Formación integral**

Los candidatos recibirán una formación común que les habilite para ejercer la magistratura en cualquier especialidad. Sólo las materias no jurídicas ni judiciales serán optativas.

### **Artículo 35.- Pasantías**

Cualquier institución pública del sistema de justicia, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Instituto Nacional Penitenciario, Procuraduría Pública, Policía Nacional, Defensa de Oficio, Tribunal Constitucional, entre otras, podrá tener la condición de entidad receptora.

La Academia de la Magistratura realizará una evaluación periódica y detallada de las instituciones receptoras, así como de los tutores que tendrán a su cargo la formación de los candidatos a jueces. Las entidades y tutores que superen favorablemente la evaluación serán inscritas en el registro que para estos fines elaborará la Academia de la Magistratura.

A fin de recibir una formación integral, las pasantías deberán realizarse en diferentes instituciones sin darle preferencia a un área del Derecho en particular.

#### **Artículo 36.- Evaluaciones trimestrales**

En cada materia los candidatos serán evaluados a lo largo del trimestre. Sólo accederán al siguiente trimestre aquellos que hayan aprobado todas las materias. El promedio ponderado de las notas obtenidas en cada trimestre servirá para la elaboración del cuadro de méritos final.

#### **Artículo 37.- Evaluación final**

Al culminar la formación inicial, el candidato rendirá una prueba final consistente en dar respuesta a casos a través de la redacción de sentencias o la resolución pertinente.

#### **Artículo 38.- Nota final, declaración de aptitud y cuadro de méritos**

Cada nota trimestral conformará el 20% de la nota final de la formación inicial. El 20% restante corresponderá a la nota obtenida en la evaluación final. A partir de la nota final, la Academia de la Magistratura elaborará el cuadro de méritos de los candidatos.

El candidato que aprueba la formación inicial será declarado apto para el desempeño de la función judicial sin que tenga que pasar por una evaluación posterior.

### **CAPÍTULO V**

#### **NOMBRAMIENTO**

#### **Artículo 39.- Elección de condiciones**

De acuerdo con su ubicación en el cuadro de méritos y en cualquiera de los niveles, el candidato apto podrá elegir cualquiera de las tres condiciones siguientes: juez titular; juez de suplencia o candidato en reserva, de conformidad con lo establecido en esta norma.

#### **Artículo 40.- Nombramiento**

Con el cuadro de méritos, los Consejeros reunidos en Pleno proceden a nombrar en los cargos al postulante o postulantes aptos en la condición que hubieran elegido, según el orden de mérito alcanzado y hasta cubrir las plazas vacantes en los grados y/o especialidades.

Para efectuar el nombramiento en cada cargo se requiere la mayoría prevista por el artículo 154 de la Constitución. En el caso de que la persona a quien correspondiese nombrar según el orden de méritos no obtuviese la mayoría establecida por la disposición constitucional, el Consejo podrá elegir entre las dos siguientes en el orden de mérito, con obligación de fundamentar claramente las razones por las que no se eligió a la primera. Si ninguno de los tres candidatos mejor situados en orden de mérito alcanzase mayoría para ser nombrado, el concurso de esa plaza será declarado desierto.

Para el nombramiento, los consejeros tendrán en consideración además las denuncias formuladas contra los candidatos.

### **CAPÍTULO VI**

#### **COBERTURA DE PLAZAS**

#### **Artículo 41.- Cobertura de plazas**

Generada una plaza vacante para ser juez titular, ésta será cubierta por el juez de suplencia o por el candidato apto en reserva que tenga la mejor ubicación en el cuadro de méritos correspondiente.

#### **Artículo 42.- Régimen de ascensos**

Mediante ascenso se cubren de manera definitiva un tercio del total de las plazas vacantes y de las que se generan hasta el próximo concurso de selección en el segundo nivel de la judicatura.

Las vacantes producidas en el curso de un año dado se cubrirán en dos tercios por los egresados de la Academia de la Magistratura que tiene condición de jueces de suplencia o candidatos en reserva del mismo nivel. El tercio restante se cubrirá mediante el mecanismo del ascenso.

Podrán postular a un ascenso los jueces de paz letrados que hayan ejercido ese cargo por lo menos tres años. Obtendrán las vacantes previstas para el ascenso aquellos jueces de paz letrado que se encuentren mejor ubicados en el cuadro de

méritos correspondiente. El ascenso es un derecho del juez y, en consecuencia, requiere de su postulación a una vacante; no es posible obligar a un juez a ascender.

Independientemente del grado que ocupe y siempre y cuando se cumpla con los requisitos correspondientes, los jueces podrán postular, en concurso abierto, al tercer o cuarto nivel de la carrera, compitiendo para ello con los demás postulantes.

### **TÍTULO III**

#### **EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO**

##### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Artículo 43.- Finalidad**

La evaluación del desempeño del juez, en sus funciones jurisdiccionales y de administración de despacho, tiene como objetivo velar porque éste mantenga niveles óptimos de idoneidad, calidad y eficiencia.

Asimismo, la evaluación del desempeño tiene como fin medir el impacto que producen los cursos impartidos por la Academia de la Magistratura, en el ejercicio posterior de la función de los jueces que aprobaron los mismos.

Para tales efectos, la evaluación debe identificar:

- a) el rendimiento y méritos del juez en diferentes aspectos de su desempeño; y,
- b) las deficiencias del sistema de justicia y las necesidades de capacitación de los jueces, para mejorar su rendimiento.

En ningún caso, la evaluación de desempeño de los jueces interferirá con la independencia de los mismos en el ejercicio de sus funciones.

#### **Artículo 44.- Principios que rigen la evaluación**

La evaluación del desempeño se sustentará en los siguientes principios:

- a) igualdad de condiciones: los jueces de cada nivel deben ser evaluados bajo los mismos criterios;
- b) transparencia: los jueces deben conocer oportunamente los períodos, aspectos y puntajes de las evaluaciones, así como los resultados de las mismas, que serán a la vez de acceso público;
- c) objetividad: las evaluaciones deben efectuarse con estricta sujeción a los



- criterios de evaluación previamente establecidos;
- d) medición: las evaluaciones deben ser posibles de medir a través de variables previamente definidas; y,
- e) motivación y verificabilidad: los resultados de las evaluaciones deben ser motivados y posibles de verificarse tanto por el funcionario evaluado como por terceros.

#### **Artículo 45.- Periodicidad**

La evaluación de los jueces de todos los niveles se efectuará cada dos años, excepto en el caso de los jueces supremos, la cual se realizará cada cuatro años.

El juez que estuviere en el cargo por un tiempo inferior al señalado, se evaluará en forma proporcional al lapso laborado.

En todo caso, el lapso mínimo de evaluación, dentro del respectivo período, será de seis meses contados a partir de vencido el tercer mes en que el juez es nombrado o inicia sus funciones en un nuevo despacho.

El período de evaluación se iniciará a comienzos de año y la consolidación de los correspondientes aspectos evaluados se hará dentro de los seis meses del año siguiente al vencimiento del primero.

Cuando la evaluación del desempeño no se produzca por omisión imputable al evaluador, se entenderá satisfactoria para el evaluado, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

## **CAPÍTULO II**

### **ASPECTOS DEL DESEMPEÑO JUDICIAL OBJETO DE EVALUACIÓN**

#### **Artículo 46.- Aspectos objeto de evaluación**

La evaluación comprenderá los siguientes aspectos:

- a) la calidad tanto de las decisiones como de la gestión del proceso, que equivaldrá al 30% y 20% de la nota final, respectivamente;
- b) la eficiencia y rendimiento, que equivaldrá al 30% de la nota final;
- c) la organización del trabajo, que equivaldrá al 10% de la nota final;
- d) las publicaciones, que equivaldrán al 5% de la nota final; y,
- e) el desarrollo profesional, que equivaldrá al 5% de la nota final.

#### **Artículo 47.- Escala de rendimiento**

La evaluación comprenderá todos los aspectos dentro de la siguiente escala:

- a) de 85 hasta 100% de la nota: Excelente;
- b) de 70 hasta 84% de la nota: Buena;
- c) de 60 hasta 69% de la nota: Insuficiente; y,
- d) de 0 hasta 59% de la nota: Deficiente.

Para todos los efectos, se tendrán como insatisfactorias las evaluaciones de servicios en que se obtenga un puntaje total inferior al 60%, o cuando el resultado del factor calidad o del factor rendimiento sea inferior al 20% del total de la nota.

### **Sub-capítulo I**

#### **Evaluación de la calidad de las resoluciones**

#### **Artículo 48.- Objeto de la evaluación**

Son objeto de evaluación las siguientes resoluciones:

- a) las sentencias;
- b) las resoluciones que sin ser de fondo ponen fin al proceso, excepto las regulaciones que declaran el abandono del proceso y otros similares;
- c) las providencias cautelares;
- d) los autos de apertura de instrucción para los jueces penales; y,
- e) las demás que se estimen convenientes.

En ningún caso la evaluación de la calidad de las resoluciones implicará la revisión o juzgamiento de la decisión de fondo.

#### **Artículo 49.- Criterios de evaluación**

Los aspectos evaluados en las resoluciones judiciales, y que deben tener igual puntaje, son:

- a) la comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición;
- b) la solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza;
- c) el adecuado análisis de todos los medios probatorios o la justificación de su omisión;
- d) la congruencia entre los fundamentos de hecho, de derecho y las conclusiones; y,
- e) manejo de jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de su posibilidades de acceso a la misma.

### **Artículo 50.- Muestra de resoluciones a evaluar**

La evaluación se realizará sólo sobre las resoluciones que hayan sido emitidas dentro del periodo evaluado.

El total de resoluciones a evaluar serán seleccionadas, en partes iguales, por el mismo juez que es evaluado, el órgano evaluador y la ciudadanía. En estos dos últimos casos las resoluciones serán escogidas mediante un método aleatorio dentro del total de resoluciones, en el primer caso, y de las propuestas por los ciudadanos, en el segundo caso. De no completarse el número de resoluciones que propone la ciudadanía, éstas serán completadas aleatoriamente por el órgano evaluador.

En ningún caso el total de la muestra puede comprender menos de quince resoluciones, las mismas que deben corresponder a providencias cautelares, autos de apertura de instrucción o que ponen fin al proceso, y sentencias, en los porcentajes que cada una de estas resoluciones corresponde al total de resoluciones emitidas en el periodo a ser evaluado.

Cuando el juez evaluado tenga varias especialidades, la muestra de las resoluciones que serán evaluadas debe conformarse de todas las materias que conoce en el porcentaje que cada una de ellas tiene en el total de causas que éste conoce.

## **Sub-capítulo II**

### **Evaluación de la calidad en la gestión de los procesos**

#### **Artículo 51.- Objeto de evaluación**

La calidad en la gestión de los procesos se evalúa revisando las decisiones tomadas en ejercicio del poder de dirección del proceso.

#### **Artículo 52.- Criterios de evaluación**

La evaluación de tales decisiones judiciales tendrá igual peso en la calificación de este apartado, y comprenden:

- a) la conducción de audiencias;
- b) la conducción del debate probatorio;
- c) la resolución de nulidades de oficio;
- d) las declaraciones de abandono;
- e) la conclusión anticipada del proceso;
- f) el cumplimiento de los términos procesales y el rechazo de las prácticas dilatorias; y,

- g) las medidas adoptadas para efectivizar el trámite y/o la ejecución de las resoluciones judiciales.

### **Artículo 53.- La muestra de los procesos a ser evaluados**

La gestión de los procesos será evaluada en virtud de las actuaciones judiciales que se desprendan de los respectivos expedientes judiciales. Estos expedientes serán fijados, en partes iguales, por el mismo juez evaluado, el ente evaluador y la ciudadanía. En los dos últimos casos, los expedientes serán escogidos por un método aleatorio, dentro de los correspondientes universos.

En total, el número de los procesos evaluados no debe ser menor de doce, de los cuales la mitad pertenecerán al primer año evaluado, y la otra mitad, al segundo.

Si agotado el procedimiento de determinación no es posible completar el mínimo de expedientes establecido, ésta se realizará con los que hubiere.

## **Sub-capítulo III**

### **Evaluación de la eficiencia y rendimiento**

#### **Artículo 54.- Objeto de evaluación**

Esta evaluación se efectuará sobre la productividad o rendimiento de los jueces durante el periodo a evaluar.

#### **Artículo 55.- Información requerida para la evaluación**

Para llevar adelante esta evaluación se requiere contar con la siguiente información:

- a) el número de procesos ingresados, ya sea porque se iniciaron o porque deben continuar el trámite que comenzó en otro despacho;
- b) el número de procesos no concluidos que no se encontraban en trámite desde el periodo anterior y que fueron reactivados;
- c) el número de procesos en trámite;
- d) el número de procesos concluidos con pronunciamiento sobre el fondo, por abandono, desistimiento, por formas alternativas de solución de conflictos, y por vicios de forma;
- e) el número de autos y sentencias definitivas emitidas en el periodo a evaluar;
- f) el número de procesos cuyo trámite se encuentre suspendido, por recurso interpuesto ante instancia superior, en los últimos 6 meses;

- g) el número de los procesos enviados a otros funcionarios para que ellos continúen el trámite;
- h) el número de los procesos devueltos a la instancia, por no haberse admitido el recurso correspondiente o porque se ha resuelto un incidente;
- i) el número de audiencias y diligencias realizadas;
- j) el número de veces que la expedición de una sentencia o una diligencia se difirió injustificadamente;
- k) el número de audiencias frustradas por decisión del juez; y,
- l) el número de procesos considerados de especial complejidad.

Esta información será consignada en el formulario que será recabado por el ente evaluador. En caso de que el juez se haya desempeñado en más de un despacho durante el periodo evaluado, corresponderá llenar un formulario por cada cargo desempeñado.

En caso se establezca la falsedad de la información otorgada al ente evaluador, ya sea por parte del juez o de algún ente institucional, sin perjuicio de las acciones a las que hubiere lugar, se le asignará la calificación de cero puntos en este factor, salvo que se demuestre la ausencia de culpa directa del juez evaluado.

#### **Artículo 56.- Criterios de evaluación**

- 56.1. La productividad será medida teniendo en cuenta la producción efectiva y los factores ajenos al juez evaluado que en ella incidan, los mismos que serán medidos en términos objetivos. Tales factores a tener en cuenta son la carga procesal y la complejidad de los casos, los mismos que serán determinados cuantitativamente mediante un sistema de información estadística con criterios adecuados.
- 56.2. Para determinar la productividad teniendo en cuenta la carga procesal, se considerarán los criterios de la carga procesal efectiva y la carga estándar.
- 56.3. La carga procesal efectiva es aquella que el juzgador tiene realmente como casos a resolver. Para efectos de determinarla, se tendrá en cuenta que:
  - a) la carga efectiva no considera a las causas que, de acuerdo a ley, no exigían, dentro del período a ser evaluado, el desarrollo de la función jurisdiccional por parte del juez; y que,
  - b) el egreso efectivo no considera aquellos procesos que, de acuerdo a ley, hayan dejado de formar parte de la carga del juzgado por causas diferentes al desarrollo de la función jurisdiccional del juez, o que no le correspondiesen en instancia.

- 56.4. La carga estándar es aquella máxima que cada juzgado puede tramitar de manera eficiente, de acuerdo a los recursos humanos y materiales con los que cuenta. El establecimiento de la misma es bianual y compete a la gerencia de planificación del Poder Judicial bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura.
- 56.5. Para la evaluación, los juzgados se diferenciarán en razón al índice que resulte de comparar la carga efectiva que tramitan en el periodo a evaluar con la carga estándar para el mismo periodo. De tal manera que los juzgados pueden ser de tres clases:
- a) primer nivel: juzgados que tengan una carga efectiva menor que la carga estándar;
  - b) segundo nivel: juzgados que tengan una carga efectiva igual a la carga estándar o mayor que ella hasta un 40%; y,
  - c) tercer nivel: juzgados que tengan una carga efectiva superior al 40% respecto de la carga estándar.
- 56.6. De acuerdo a la división anterior, los jueces evaluados de cada nivel, serán calificados en los mismos de acuerdo al criterio de expedientes dejados de tramitar. A mayor cantidad de expedientes no tramitados, el puntaje a otorgar será menor. La escala de puntajes a otorgar será indicada por el órgano competente de la evaluación. A cada tipo de carga se le deberá asignar un índice, donde el número cien indica una carga normalizada. A partir de estos índices se efectuará la evaluación, contrastando el índice de carga procesal con la producción del juez evaluado.
- 56.7. Para determinar la productividad se tendrá en cuenta el grado de complejidad y la cantidad de los mismos.
- 56.8. Para efectos de determinar el grado de complejidad de los procesos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: el número de encausados o partes, el número de delitos o petitorios, la naturaleza de los hechos y derechos controvertidos, así como la acumulación. Estos criterios definirán el carácter de complejo o del caso, de manera conjunta o independiente, según corresponda.
- 56.9. Para la evaluación sólo se considerarán los casos de excepcional complejidad, es decir, aquellos que por la concurrencia o presencia de alguno de los criterios anteriormente mencionados se tornan en objeto de una especial dedicación.
- 56.10. El órgano evaluador será quien defina el carácter de complejo de los ca-

sos. Los jueces evaluados deberán reportar los casos complejos al ente competente, a fin de que sean considerados en la evaluación; ello sin perjuicio de los casos que el mismo ente esté considerando como tales.

- 56.11. La evaluación del factor complejidad en la producción del juez será relacionada con el factor de la carga procesal mediante índices de reducción relacionados al rendimiento o productividad esperados.

#### **Sub-capítulo IV**

##### **Evaluación de la organización del trabajo**

###### **Artículo 57.- Objeto de la evaluación**

Esta evaluación se efectuará sobre la utilización que haga el juez de los recursos humanos y materiales de los que dispone su despacho para mejorar la calidad del servicio ofrecido a los litigantes, ordenar las causas y mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del trabajo. La información pertinente estará contenida en un informe que el juez presentará anualmente.

###### **Artículo 58.- Criterios de evaluación**

Los aspectos evaluados en la organización del trabajo, que deben tener igual puntaje, son:

- a) los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos;
- b) el registro y control de la información;
- c) el manejo de expedientes y archivo;
- d) la atención a los usuarios; y,
- e) la capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades, planes y programas.

#### **Sub-capítulo V**

##### **Evaluación de las publicaciones**

###### **Artículo 59.- Objeto de la evaluación**

Esta evaluación se efectuará sobre la producción de trabajos de investigación teóricos o de campo respecto de la administración de justicia, Derecho o ramas afines, que haya publicado el juez durante el periodo evaluado.

Las obras que serán objeto de evaluación son:

- a) libros; capítulos de libro;
- b) publicaciones realizadas en revistas especializadas en Derecho; y,
- c) ponencias.

#### **Artículo 60.- Criterios de evaluación**

La evaluación de cada obra tendrá en cuenta:

- a) la originalidad o la creación autónoma de la obra;
- b) la calidad científica, académica o pedagógica de la obra;
- c) la relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas en materia judicial; y,
- d) la contribución al desarrollo del Derecho.

No se tendrán en cuenta las reimpresiones de obras que no contengan un trabajo de corrección o actualización sustancial.

### **Sub-capítulo VI**

#### **Evaluación del desarrollo profesional**

#### **Artículo 61.- Objeto de la evaluación**

Esta evaluación se efectuará respecto de los cursos de capacitación o especialización que el juez haya superado satisfactoriamente, en la Academia de la Magistratura, universidad u otra entidad académica de reconocido prestigio, en el periodo a ser evaluado.

#### **Artículo 62.- Criterios de evaluación**

La evaluación debe realizarse en base a la nota obtenida en los cursos aprobados que se presentan para su evaluación.

### **CAPÍTULO III**

#### **ÓRGANOS COMPETENTES**

#### **Artículo 63.- Órgano encargado**

El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano competente para efectuar la evaluación de todos los jueces.



#### **Artículo 64.- Órganos auxiliares**

El Consejo Nacional de la Magistratura podrá contar con órganos de auxilio que permitan el correcto y oportuno desarrollo de la función de evaluación. Estos podrán ser órganos de alguna entidad perteneciente al sistema de justicia o una entidad académica de prestigio.

Los informes de los órganos auxiliares sobre la calificación de cada uno de los factores deben ir acompañados de los datos relevantes para la evaluación de cada factor, los mismos que serán recogidos en formularios especialmente diseñados y distribuidos por el Consejo Nacional de la Magistratura para estos fines.

Estos informes y formularios servirán de base para la evaluación integral de los jueces que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura.

#### **Artículo 65.- Órganos auxiliares para la evaluación de la calidad**

Para evaluar la calidad de las resoluciones y de la gestión de los procesos de los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura podrá contratar los servicios de las universidades públicas o privadas que cuenten con facultad de Derecho que tenga más de treinta años de antigüedad, para que realicen el recojo de la información en los formularios y elaboren los informes respectivos de cada parte de la evaluación.

Estas universidades deberán designar como responsables de este trabajo a profesionales que se dediquen de manera exclusiva a la docencia y que no ejerzan ningún cargo en el Poder Judicial. Sin embargo, estas entidades también podrán designar a ex jueces de reconocida trayectoria democrática.

#### **Artículo 66.- Órganos auxiliares para la evaluación de la eficiencia y rendimiento**

La Gerencia de Planificación del Poder Judicial deberá diseñar, bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema para recoger la información detallada en el artículo 55 de la presente ley.

Dentro de los tres primeros meses de cada año, la Gerencia de Planificación del Poder Judicial deberá proporcionar al Consejo Nacional de la Magistratura la referida información en los formularios elaborados para ello. En su defecto, deberán cumplir con igual mandato de colaboración las Cortes Superiores o el Centro de Investigaciones Judiciales, en ese orden.

Esta información deberá encontrarse, además, desagregada por juzgado, especialidad y materia.

### **Artículo 67.- Órganos auxiliares para la evaluación de la organización del trabajo**

Faltando medio año para concluir cada periodo de evaluación, los jueces deberán llenar los formularios enviados por el Consejo Nacional de la Magistratura en el que especifican cuál ha sido la organización del trabajo en su despacho, en los términos que allí se indican. Estos formularios se acompañarán del respectivo informe.

### **Artículo 68.- Órganos auxiliares para la evaluación de las publicaciones y desarrollo profesional**

La Gerencia de Personal y Escalafón Judicial del Poder Judicial deberá diseñar, bajo supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema para recoger la información a la que se refieren los artículos 59, 61 y 62.

Esta Gerencia deberá llevar un inventario de las obras producidas por cada juez, de conformidad con los formularios que para estos fines le entregará el Consejo Nacional de la Magistratura.

En defecto de ello, los mismos jueces deberán hacer llegar al Consejo Nacional de la Magistratura el formulario elaborado por éste para recoger la referida información, con los anexos que ahí se indiquen.

### **Artículo 69.- El juez como órgano auxiliar**

Sin perjuicio de la información que debe recoger la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 68 de la presente ley, cada juez deberá llevar:

- a) una relación de las causas a su cargo terminadas durante el periodo objeto de evaluación, en la cual indicará las clases de procesos y demás datos que las identifiquen; y,
- b) una relación de los periodos en cada despacho que les haya sido asignado, la duración de estos encargos y las causas de los mismos.

Estas relaciones deberán ser plasmarse en los formularios que para ello elabora y distribuya el Consejo Nacional de la Magistratura.

### **Artículo 70.- La Comisión de Carrera Judicial**

La Comisión de Carrera Judicial es un órgano auxiliar del Consejo Nacional de la Magistratura para efectos de la evaluación del desempeño, en los términos descritos en la presente ley.

70.1. Esta Comisión está integrada por:

- a) el Presidente del Poder Judicial o el juez de la Corte Suprema que lo represente, quien la presidirá;
- b) un juez de la Corte Suprema, que integre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
- c) un juez de Corte Superior designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial entre una terna de los representantes propuestos por cada Distrito Judicial;
- d) un juez especializado o mixto, designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial entre una terna de los representantes propuestos por cada Distrito Judicial;
- e) un representante de las Universidades Públicas que cuenten con una facultad de derecho con más de treinta años de antigüedad. El representante deberá ser profesor principal de dicho sector, con una labor no menor de 8 años en tal condición en las universidades públicas, y ostentar una significativa producción académica en temas relacionados a la impartición de justicia;
- f) un representante de las Universidades Privadas que cuenten con una facultad de derecho con más de treinta años de antigüedad. El representante deberá ser profesor principal de dicho sector, con una labor no menor de 8 años en tal condición en las universidades privadas, y ostentar una significativa producción académica en temas relacionados a la impartición de justicia; y,
- g) un representante de los abogados, designado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados, que ostente una significativa producción o actividad académica en temas relacionados a la impartición de justicia.

Conjuntamente con la elección de los miembros titulares se elegirán a los suplentes.

70.2. Los integrantes de la Comisión a que se refieren los literales c), d), e), f) y g) del presente artículo ejercerán su función a dedicación exclusiva.

70.3. El funcionamiento y organización de la Comisión de Carrera Judicial estará regulado por un reglamento interno que será aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión.

70.4. Los miembros de la Comisión de Carrera Judicial ejercerán los cargos por el plazo de tres años.

70.5. La elección de los integrantes de la Comisión será realizada mediante un

proceso público y transparente, en el que se aprecie la probidad e idoneidad de los postulantes al cargo.

## **CAPÍTULO IV**

### **DEL PROCEDIMIENTO**

#### **Artículo 71.- Elaboración de los formularios**

El Consejo Nacional de la Magistratura elabora y distribuye oportunamente los formularios para la evaluación de cada uno de los aspectos mencionados en el artículo 46, de conformidad con lo desarrollado en el capítulo II del presente título.

#### **Artículo 72.- Entrega de los resultados**

Una vez recibidos todos los informes y los formularios por parte de los órganos auxiliares, y realizadas todas las visitas acordadas, el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a completar las evaluaciones parciales que lo requiriesen y a elaborar la evaluación integral de cada juez que se reflejará en el informe final.

En todos los casos, el Consejo Nacional de la Magistratura conformará un expediente por cada juez evaluado, el mismo que contendrá el informe final y las evaluaciones parciales que sirvieron de insumo. Copia del expediente será entregado a los jueces evaluados.

### **Sub-capítulo I**

#### **Evaluación de la calidad de las resoluciones y gestión del proceso**

#### **Artículo 73.- Determinación de la muestra de procesos**

Vencido el periodo a ser evaluado, el Consejo Nacional de la Magistratura solicita a los jueces que le remitan la lista de los procesos a su cargo que hayan sentenciado o gestionado en un 80% durante tal periodo.

Asimismo, solicita a los jueces que le haga llegar la lista de los procesos cuyas sentencias y cuya gestión deben ser tomados en cuenta para la evaluación del factor de calidad.

En la misma fecha, el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá los procesos de determinación aleatoria que completan la muestra a evaluar.

Para efectos de tener acceso a los procesos que han sido identificados para su evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura los solicitará a las autoridades judiciales pertinentes, las que no podrán negarse a este pedido. En el caso de expedientes en trámite, se remitirá copia de los mismos.

#### **Artículo 74.- Encargo a las instituciones académicas**

Al final del periodo a evaluar, el Consejo Nacional de la Magistratura debe remitir a la universidad con la que se haya contratado los formularios y la identificación de los procesos correspondientes.

Concluido el trabajo de estas instituciones, ellas entregarán al Consejo Nacional de la Magistratura los formularios e informes por cada uno de los jueces evaluados, para que éste realice la evaluación integral de los mismos.

### **Sub-capítulo II**

#### **Evaluación de la eficiencia y rendimiento**

#### **Artículo 75.- Determinación de la carga y egreso efectivo y carga estándar**

Luego que el Consejo Nacional de la Magistratura reciba la información señalada en el artículo 55 de parte de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial, deberá elaborar, con ayuda de ésta, los totales de carga y egreso efectivo de cada juez, así como el de carga estándar.

### **Sub-capítulo III**

#### **Evaluación de la organización del trabajo**

#### **Artículo 76.- Visitas a los juzgados**

Desde la fecha en que el Consejo Nacional de la Magistratura recibe los formularios y los informes sobre la organización del trabajo, a los que se refiere el artículo 67, se encuentra habilitado para realizar las investigaciones en los despachos judiciales en los que lo considere necesario, sin previo aviso al juez encargado.

Estas visitas tendrán como finalidad corroborar si es que el informe presentado por el juez sobre la organización de su trabajo se condice con las condiciones reales de su despacho.

#### **Sub-capítulo IV**

##### **Evaluación de las publicaciones y desarrollo profesional**

###### **Artículo 77.- Determinación de las publicaciones y cursos**

Vencido el periodo a ser evaluado, el Consejo Nacional de la Magistratura solicita a la Gerencia de Escalafón y Personal Judicial del Poder Judicial, o, en su defecto, a los mismos jueces, los formularios que identifican las obras que serán evaluadas, así como copia física de las mismas.

#### **CAPÍTULO V**

##### **RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN**

###### **Artículo 78.- Resultados de la evaluación**

El resultado de la evaluación será notificado oportunamente al juez evaluado, y constará en su expediente personal y registros correspondientes. Asimismo, los resultados generales y parciales de la evaluación se pondrán a disposición de los ciudadanos.

###### **Artículo 79.- Finalidad de los resultados**

Los resultados de la evaluación servirán para definir:

- a) la elaboración del cuadro de méritos, toda vez que sus resultados definen el 85% del mismo;
- b) el inicio de las acciones necesarias a fin de reforzar los aspectos detectados y que generan deficiencia en el desempeño judicial;
- c) los criterios en base a los cuales la Academia de la Magistratura elaborará el plan de estudios de los cursos regulares, dirigidos a la capacitación de los jueces;
- d) la necesidad de indicar al juez los cursos (o actividades necesarias) que deberá llevar en la Academia de la Magistratura a fin de mejorar su desempeño. El Consejo Nacional de la Magistratura verificará que tales indicaciones sean cumplidas;
- e) la prohibición temporal del ascenso o de ocupar provisionalmente un cargo superior; y,
- f) la separación.

#### **Artículo 80.- Consecuencias de la calificación**

El resultado de la evaluación es el componente esencial sobre el que se estructura el acceso a los beneficios e incentivos, así como se determinan la necesidad de formación obligatoria y la separación de los jueces.

En el caso de obtener la calificación de insuficiente, el juez deberá participar en los cursos de reforzamiento en la Academia de la Magistratura, cuyo cumplimiento estará bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, estará impedido temporalmente de ascender u ocupar provisionalmente un cargo superior.

#### **Artículo 81.- Casos y resoluciones de separación**

La separación es consecuencia directa de haber obtenido resultados plenamente insatisfactorios en la evaluación del desempeño, ya sea por haber conseguido la calificación de deficiente o por haber obtenido la de insuficiente, en dos oportunidades consecutivas.

Las resoluciones que las dispongan deberán encontrarse debidamente motivadas y serán susceptibles de revisión, conforme lo previsto en la presente ley.

#### **Artículo 82.- Separación directa de jueces de la Corte Suprema**

Cuando de la evaluación de los jueces de la Corte Suprema se desprenda que se encuentran bajo algún supuesto de separación, el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a separarlos, a menos que los dos tercios de sus integrantes decidan mantenerlo en la carrera judicial, mediante resolución debidamente motivada.

#### **Artículo 83.- Separación de jueces previo informe de la comisión de carrera judicial**

En el caso de los jueces superiores, especializados o mixtos y de paz letrado, el Consejo Nacional de la Magistratura enviará a la Comisión de Carrera Judicial el informe en que recomienda la separación de los jueces, para efectos de que ella actúe en los términos establecidos en esta ley.

Estos informes enviados a la Comisión de Carrera Judicial son de carácter público.

La resolución de la Comisión de la Carrera Judicial que descarte la separación por bajo rendimiento deberá ser debidamente motivada y respaldada por al menos dos tercios de los integrantes de la Comisión de Carrera Judicial.

En caso la Comisión de Carrera Judicial no se oponga a la separación recomendada por el Consejo Nacional de la Magistratura, éste procederá a separarlos, a menos que los dos tercios de sus integrantes decidan mantenerlo en la carrera judicial, mediante resolución debidamente motivada.

## **CAPÍTULO VI**

### **DE LOS RECURSOS**

#### **Artículo 84.- Queja y audiencia del juez evaluado**

En caso que el juez evaluado advirtiera un defecto grave en los resultados de la evaluación de desempeño, podrá presentar una queja al Consejo Nacional de la Magistratura, quien resolverá previa audiencia.

#### **Artículo 85.- Recursos contra la separación en función del desempeño**

Contra las decisiones de separación de jueces de la Corte Suprema, basadas en el rendimiento, sólo cabe, en vía administrativa, recurso de reconsideración por prueba nueva.

Contra la solicitud de separación por rendimiento de jueces de paz letrados, especializados, mixtos o superiores presentada por la Comisión de Carrera Judicial sólo cabe, en vía administrativa, recurso de reconsideración por prueba nueva.

Cuando no corresponda recurso de reconsideración, el afectado con la separación por rendimiento insuficiente puede interponer amparo ante el Poder Judicial siendo competente la Corte Superior, con la posibilidad de recurrir en segunda instancia ante el Tribunal Constitucional. Todo ello siempre y cuando se haya afectado su debido proceso u otro derecho fundamental.

#### **Artículo 86.- Impedimento y recusación del ente competente o los órganos auxiliares**

No podrá participar en la evaluación el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, o de los órganos auxiliares, que incurra en las causales de impedimento o recusación a las que se refieren los artículos pertinentes del Código Procesal Civil. Tanto el impedimento como la recusación serán planteados en la primera oportunidad que se tuviera para ello.

La recusación será resuelta por el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en instancia única.



## **CAPÍTULO VII**

### **REGÍMENES ESPECIALES DE EVALUACIÓN**

#### **Artículo 87.- Jueces en régimen de evaluación especial**

El Consejo Nacional de la Magistratura, en coordinación con la Comisión de Carrera Judicial, establecerá un régimen especial para evaluar a los jueces que ocupan cargos administrativos y a los jueces que han sido destacados a un juzgado bajo un programa de descongestión.

## **CAPÍTULO VIII**

### **CUADRO DE MÉRITOS**

#### **Sub-capítulo I**

#### **Contenido y elaboración**

#### **Artículo 88.- Conformación y pesos**

El cuadro de méritos estará conformado por el resultado final de la evaluación periódica de desempeño y el récord de faltas y sanciones cometidas en los dos años correspondientes a tal evaluación. Al primero de los componentes le corresponde un peso de 85%, en tanto que al segundo, 15%.

En el componente referido al récord disciplinario, la calificación estará distribuida de la siguiente manera:

- a) de no registrar ningún antecedente de sanción disciplinaria en el período evaluado, el valor obtenido corresponde al 15%;
- b) de registrar sanción por falta leve, se obtendrá el 10%; y,
- c) de registrar sanción por falta grave, se obtiene 0%.

#### **Artículo 89.- Objetivos del cuadro de méritos**

El cuadro de méritos servirá para determinar el ascenso de los jueces, la designación de ocupar un cargo superior provisionalmente, así como el otorgamiento de beneficios de naturaleza académica.

#### **Artículo 90.- Órgano encargado de su elaboración**

La Comisión de Carrera Judicial es el órgano competente para elaborar el cuadro de méritos.

## **Sub-capítulo II**

### **Beneficios e incentivos**

#### **Artículo 91.- Tipos de beneficios e incentivos**

La Comisión de Carrera Judicial, en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura, debe establecer un programa flexible de beneficios e incentivos para recompensar el buen desempeño de los jueces que ocupan los primeros puestos del cuadro de méritos de un grado.

Los incentivos pueden ser principalmente de tres tipos:

- a) ascensos al grado inmediato superior;
- b) promociones; y,
- c) becas, cursos de especialización, participación en congresos, etc.

#### **Artículo 92.- De los ascensos**

A partir de su ubicación en el cuadro de méritos y en el porcentaje correspondiente, los jueces de paz letrado tienen preferencia para optar por ocupar una vacante definitiva abierta después de realizado el concurso público de nombramiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.

En caso que el juez que se encontraba en posibilidades de ascender decida no hacerlo, tendrá esa oportunidad el siguiente en el orden de méritos.

#### **Artículo 93.- De las promociones**

Los jueces, en estricto orden de méritos, tendrán derecho a:

- a) acceso provisional para ocupar una vacante de juez en el grado inmediato superior, siempre y cuando corresponda a su misma especialidad, o se cuente con certificación de variación aprobada;
- b) licencias para especialización o capacitación;
- c) traslados; y,
- d) cargos administrativos en caso lo soliciten.

#### **Artículo 94.- De los demás beneficios**

Los jueces tendrán acceso a becas, cursos gratuitos de especialización, participación en congresos, etc, con estricto apego al cuadro de méritos.

## **TÍTULO IV**

### **DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DE LOS DERECHOS**

#### **Artículo 95.- Derechos**

Los jueces titulares tienen, entre otros, los siguientes derechos:

1. independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;
2. estabilidad, inamovilidad en el cargo y permanencia en el servicio. Los jueces no pueden ser trasladados o rotados sin su consentimiento o sin que exista causa debidamente justificada;
3. determinación, mantenimiento y desarrollo de la especialidad,
4. evaluación periódica a fin identificar los méritos alcanzados, garantizar la permanencia en la carrera y obtener ventajas para el proceso de ascensos;
5. asignación de una carga procesal racional;
6. debida protección y seguridad de su integridad y la de su familia;
7. remuneración adecuada y demás derechos laborales correspondientes a la función pública;
8. capacitación y especialización permanentes;
9. asociación, dentro de límites de ley; y,
10. permisos y licencias, conforme a ley.

Las disposiciones reguladas en este capítulo son aplicables a los jueces de suplencia, provisionales y candidatos en reserva en cuanto les fuera compatible.

#### **Sub-capítulo I**

##### **De los traslados, permutas y rotación**

#### **Artículo 96.- Traslados**

- 96.1. Los jueces tienen el derecho a solicitar su traslado o a ser trasladados, solamente por razones del servicio, de salud o de seguridad personal con ocasión del ejercicio de su cargo. El traslado por razón de servicio sólo

puede encomendar a los jueces, procesos de materias afines a su especialidad, salvo que no se cuente con magistrados de la especialidad, ni especialidades afines.

- 96.2. El traslado puede ser temporal o permanente, funcional o geográfico. Se trata de un traslado funcional cuando se realiza a una especialidad diferente a la que venía ejerciendo; y es de carácter geográfico, cuando se realiza a otro distrito judicial.
- 96.3. En el caso que el traslado sea en el mismo Distrito Judicial, la decisión deberá tomarla el órgano de gobierno correspondiente. En tanto que si involucra a más de un Distrito Judicial, la decisión corresponde al órgano de gobierno del Poder Judicial.
- 96.4. En todos los casos, la resolución que ordena el traslado debe ser motivada y puede ser objeto de impugnación tanto en la vía administrativa, como judicial.

#### **Artículo 97.- Permuta y rotación**

Un juez puede solicitar la permuta de su cargo con otro de su mismo grado y especialidad, siempre que no se afecte el despacho y la celeridad procesal de ninguno de los dos.

En caso ambos jueces pertenezcan al mismo distrito, corresponde autorizar la permuta al presidente de la Corte Superior. En caso de jueces de diversos distritos, la autorización corre a cargo de ambos presidentes de Corte.

#### **Artículo 98.- Rotación**

Los jueces, respetando su grado y especialidad, sólo pueden ser rotados a un nuevo despacho, con su consentimiento y dentro del mismo distrito judicial en el que vienen ejerciendo sus funciones. La resolución que dispone la rotación debe ser motivada debidamente.

### **Sub-capítulo II**

#### **De los permisos y licencias**

#### **Artículo 99.- Alcances**

Los jueces tienen el derecho a solicitar y obtener un número limitado de permisos y licencias, con la autorización del órgano correspondiente.

En el caso de los jueces de la Corte Suprema y otros órganos con competencia nacional, corresponde otorgar tales beneficios al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En los demás casos, corresponde otorgarlos al Presidente de la Corte Superior correspondiente.

#### **Artículo 100.- Órgano competente**

En todos los casos, los órganos que los otorgan deben llevar un registro detallado y actualizado de los permisos y licencias que se conceden, así como del uso que de ellos hace cada juez.

#### **Artículo 101.- Permisos sin goce de haber**

Los permisos sin goce de haber proceden para atender asuntos estrictamente personales no sujetos a justificación, hasta por un plazo no mayor de diez días hábiles durante el año judicial, de forma continua o de manera interrumpida.

#### **Artículo 102.- Licencia con goce de haberes**

La licencia por causa justa y con goce de haberes procede solamente en los siguientes casos:

1. duelo en los casos de cónyuge o hijos, hasta por cinco días;
2. accidente y/o enfermedad comprobados, conforme a ley;
3. maternidad y lactancia, conforme a ley; y,
4. capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo a su ubicación en el cuadro de méritos.

#### **Artículo 103.- Órgano competente en materia de permisos y licencias**

Los permisos y licencias de los jueces supremos y de órganos jurisdiccionales con competencia nacional u otros que abarquen a más de un Distrito Judicial, son otorgados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Los correspondientes a los jueces de un Distrito Judicial específico, son competencia del órgano de gobierno distrital.

### **Sub-capítulo III**

#### **De la capacitación judicial**

#### **Artículo 104.- Objetivo**

- 104.1. Todos los jueces tienen el derecho a perfeccionarse y actualizarse continuamente, en igualdad de condiciones y oportunidades. La capacitación

se realiza con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional pleno del juez y eliminar cualquier deficiencia en el servicio de justicia.

- 104.2. La capacitación se puede realizar a través de los cursos que brinda la Academia Nacional de la Magistratura, las actividades académicas que se dictan periódicamente en cada distrito judicial, en las universidades y otros centros de estudios especializados.

#### **Sub-capítulo IV**

##### **Del mantenimiento de la especialización**

##### **Artículo 105.- Mantenimiento de la especialidad**

Los jueces tienen el derecho a mantener la especialidad en el cargo, salvo los casos previstos de traslados. Por decisión voluntaria, los jueces pueden solicitar y obtener un cambio de especialidad, o postular a una especialidad nueva.

##### **Artículo 106.- Determinación de la especialidad**

La especialidad se determina principalmente por los siguientes criterios:

1. ejercicio de la cátedra universitaria;
2. publicaciones sobre materia jurídica especializada;
3. grados académicos obtenidos en una misma especialidad del derecho;
4. trabajos desempeñados en ámbitos afines; y,
5. antigüedad.

#### **Sub-capítulo V**

##### **De la remuneración**

##### **Artículo 107.- Determinación y componentes**

- 107.1. La remuneración se determinará de acuerdo con las funciones y nivel de los jueces y deberá ser adecuada a la significativa importancia de aquéllas.
- 107.2. Los jueces percibirán catorce remuneraciones al año. La determinación de la forma y monto de la remuneración le corresponde al Poder Judicial de manera autónoma.

- 107.3. Son componentes de la remuneración el haber básico del juez y los complementos salariales que se establezcan. Dichos componentes son computables para todos los beneficios. Las diferencias entre grados en no será mayor al 20% entre uno y otro.

## **CAPÍTULO II**

### **DE LOS DEBERES**

#### **Artículo 108.- Deberes**

Son deberes de los jueces:

1. impartir justicia con prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso;
2. no dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley;
3. dedicarse exclusivamente a la función judicial, salvo los casos de docencia universitaria ejercida fuera del horario de trabajo y con un límite de 6 horas semanales;
4. mantener un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y actualización;
5. observar los plazos legales en expedición de resoluciones y sentencias, así como cumplir y vigilar por el cumplimiento de la debida celeridad procesal;
6. respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del horario de trabajo para la atención del despacho, informes orales y otras diligencias;
7. guardar en todo momento conducta intachable;
8. residir en lugar donde ejerce el cargo, o en lugar cercano de fácil comunicación, previa autorización de la Corte Superior del distrito judicial correspondiente;
9. atender el juzgado o sala a su cargo, con la debida diligencia;
10. guardar la reserva debida en aquellos casos que por naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran;
11. presentar una declaración jurada, al inicio del cargo, y con periodicidad anual, hasta el momento de dejar el cargo;
12. sancionar a las partes cuando practiquen maniobras dilatorias;
13. denegar pedidos maliciosos;

14. denunciar los casos de ejercicio ilegal de la profesión y otros comportamientos delictivos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones; y,
15. cumplir con las demás obligaciones impuestas por la Constitución y las leyes.

### **CAPÍTULO III**

#### **DE LAS PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES**

##### **Artículo 109.- Prohibiciones**

Los jueces están prohibidos de:

1. ejercer la defensa o asesoría pública y/o privada, con las excepciones de causa propia, de su cónyuge, concubina, ascendientes y descendientes;
2. aceptar de los litigantes, sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones o cualquier agasajo;
3. aceptar cargos remunerados, salvo ejercicio de docencia universitaria;
4. adquirir bienes objeto de proceso judicial;
5. ejercer el comercio, industria o actividad lucrativa, de forma personal o como gestor, asesor, socio, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa;
6. participar en política, sindicarse y declararse en huelga;
7. influir o interferir de manera directa o indirecta en resultado de procesos judiciales;
8. variar el domicilio del lugar donde ejerce el cargo o lugar cercano, salvo el caso de vacaciones, licencias o autorización del órgano competente; y,
9. ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo motivadas excepciones.

##### **Artículo 110.- Impedimentos por el cargo**

Están Impedidos para postular y/o ejercer bajo cualquier motivo, cargo judicial alguno mientras ejerzan función pública y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo:

1. el Presidente y Vicepresidentes de la República;
2. los congresistas, presidentes regionales, alcaldes, regidores y cualquier funcionario cuyo cargo provenga de elección popular, salvo los jueces de paz;



3. los ministros, viceministros, directores generales de ministerios;
4. los prefectos y cualquier otro funcionario que ejerza autoridad política;
5. los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;
6. el contralor y subcontralor; y,
7. los jefes de la ONPE y RENIEC.

#### **Artículo 111.- Incompatibilidades**

- 111.1. Las incompatibilidades son el conjunto de disposiciones limitativas del ejercicio de la labor jurisdiccional, en razón del cargo y del parentesco.
- 111.2. Hay incompatibilidad por razón de matrimonio, unión de hecho y parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad:
  - a. entre los jueces de la Corte Suprema y entre éstos y los jueces superiores y demás jueces de la República; así como personal jurisdiccional perteneciente a la propia Corte Suprema y a los Distritos Judiciales de la República; y,
  - b. en el mismo Distrito Judicial entre los vocales superiores, y entre éstos y los jueces de cualquier grado y personal auxiliar jurisdiccional de todas las instancias.
- 111.3. Las incompatibilidades por parentesco enunciadas comprenden al personal administrativo entre sí, así como en relación a los jueces y al personal que realiza actividades de apoyo a la función jurisdiccional.
- 111.4. En caso de incompatibilidad sobreviniente, cualquiera de los jueces, cualquiera de los jueces involucrados pueden solicitar el cambio de distrito judicial u optar por la renuncia.

### **TÍTULO V**

#### **RÉGIMEN DE JUECES DE SUPLENCIA Y PROVISIONALES**

#### **Artículo 112.- Suplencia**

Son jueces de suplencia aquellos que reemplazan temporalmente en sus funciones a jueces titulares que no pueden encargarse de su despacho por cualquier razón prevista legalmente.

### **Artículo 113.- Provisionalidad**

Son provisionales los jueces titulares que ocupan temporalmente el grado superior inmediato vacante, que no puede ser cubierto por un juez suplente o candidato en reserva.

### **Artículo 114.- Prioridad en la provisionalidad**

El juez llamado a cubrir provisionalmente una plaza superior será aquél que ocupe el puesto más alto en el cuadro de méritos de su nivel.

### **Artículo 115.- Plaza del juez provisional**

La plaza original del juez provisional debe ser también cubierta de manera temporal por un juez de suplencia o reserva. A falta de éstos, deberá ser ocupada por un juez provisional.

## **TÍTULO VI**

### **RÉGIMEN DISCIPLINARIO**

#### **CAPÍTULO I**

#### **FALTAS DISCIPLINARIAS**

### **Artículo 116.- Definición**

Se entiende por faltas las acciones u omisiones de los jueces, previamente establecidas en la presente ley, que afectan valores o aspectos relevantes para el servicio de justicia, tales como la imparcialidad, la honestidad y la independencia, y que por ello, deben ser sancionadas, previa verificación del órgano encargado.

### **Artículo 117.- Tipos de falta**

Las faltas según su gravedad se dividen en:

1. leves;
2. graves; y,
3. muy graves.

### **Artículo 118.- Faltas Leves**

Se considera falta leve:

1. inasistencia injustificada al despacho judicial hasta por dos días;

2. proveer escritos o resoluciones fuera de los plazos legales injustificadamente;
3. no emitir los informes solicitados dentro de los plazos fijados, siempre que ello no constituya una falta grave;
4. incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la labor jurisdiccional, o dedicar más horas de las previstas a otras funciones permitidas por disposición constitucional, legal o autorizados por órgano competente;
5. no ejercitar el control permanente sobre sus auxiliares y subalternos, o no imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique;
6. abusar de las facultades que la ley le otorga respecto a sus subalternos o sobre las personas que intervienen en cualquier forma en un proceso;
7. incurrir injustificadamente en retraso, omisión o descuido en la tramitación de procesos;
8. descuidar o incumplir los deberes propios del cargo establecidos por ley, siempre y cuando no constituya falta grave o muy grave;
9. la inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta ley;
10. la falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, de la defensoría de oficio y abogados;
11. la falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas de organismo judicial, siempre que no impliquen una falta de mayor gravedad; y,
12. la negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de sus cargos, establecidos en esta ley, cuando no constituyan falta grave o muy grave.

#### **Artículo 119.- Faltas Graves**

Se considera falta grave:

1. incurrir en reiterados e injustificados retrasos y descuidos en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones. Para determinar esta falta se tendrá en consideración los pedidos que hubiesen formulados las partes exigiendo el cumplimiento legal y razonable de las actuaciones o plazos para expedir las resoluciones, el período de tiempo que el magistrado viene conociendo el proceso, la conducta de las partes y demás intervinientes en dicho proceso, y la complejidad del asunto controvertido;

2. causar grave perjuicio al proceso o al desarrollo de sus incidencias y diligencias, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales que resultasen necesarios para su correcta formulación;
3. ausentarse injustificadamente del despacho judicial por dos días consecutivos;
4. ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera del despacho judicial;
5. incurrir en conducta manifiestamente discriminatoria en el ejercicio del cargo;
6. admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales;
7. agravar u ofender a otros jueces, o a los intervinientes en un proceso;
8. los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.
9. no seguir los cursos obligatorios de capacitación que, en atención al resultado de la evaluación periódica, han sido exigidos;
10. abandonar total o parcialmente las tareas correspondientes al cargo judicial;
11. no guardar la discreción debida en aquellos casos que por naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva;
12. la conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo;
13. el no cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional;
14. ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública;
15. asistir a su centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, o en cualquier otra condición anormal o análoga;
16. delegar a los auxiliares jurisdiccionales la realización de diligencias que por ley o por la naturaleza de las circunstancias le corresponden personalmente;
17. la tercera falta leve que se cometa durante los dos años posteriores a la comisión de la primera;
18. incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente la dignidad del cargo; y,
19. los demás casos expresamente previstos en las leyes de la materia.

### **Artículo 120.- Faltas muy graves**

Se considera falta muy grave:

1. ausentarse injustificadamente del despacho judicial por más de tres días consecutivos, y las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso;
2. desempeñar simultáneamente a sus responsabilidades jurisdiccionales, empleos o cargos públicos o privados remunerados, salvo los casos expresamente permitidos por la Constitución;
3. ejercer la defensa o asesoría pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley;
4. valerse del cargo para dar órdenes o ejercer presiones sobre otros miembros del Poder Judicial, buscando así condicionar la tramitación o la resolución de algún proceso o procedimiento;
5. actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo;
6. solicitar o aceptar de los litigantes, sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, dádivas, legados, agasajos y sucesión testamentaria a su favor o en el de su cónyuge, concubino(a), ascendientes, descendientes o hermanos(as);
7. no justificar documentariamente dentro del plazo de treinta días hábiles los signos exteriores de riqueza que evidencien los jueces, previo requerimiento del órgano de control. Los signos exteriores de riqueza se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada;
8. incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente la dignidad del cargo;
9. ausentarse injustificadamente de sus labores por más de tres días consecutivos;
10. interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional;
11. ocultar alguna prohibición que les sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobreviviente;

12. influir o intentar influir a otros jueces en causas que tramitan en el marco de sus respectivas competencias;
13. interferir en el criterio de los jueces de menor nivel en la interpretación o aplicación de la ley, salvo cuando se halle en conocimiento de la causa a través de los recursos legalmente establecidos;
14. cometer cualquier acto de coacción o acoso, especialmente aquellos de índole sexual o laboral;
15. establecer relaciones con terceros, con otros jueces o con auxiliares jurisdiccionales, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros en el desempeño de la función jurisdiccional;
16. la tercera falta grave que se cometa durante los dos años posteriores a la comisión de la primera; y,
17. los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

## **CAPÍTULO II**

### **SANCIONES DISCIPLINARIAS**

#### **Artículo 121.- Concepto y tipos de sanciones disciplinarias**

Se entiende por sanciones a las consecuencias de la comprobación de las faltas cometidas. Deben estar legalmente establecidas y ser impuestas, previo procedimiento administrativo y con las garantías del debido proceso, por el órgano encargado del control disciplinario. Las sanciones serán anotadas en el registro personal del juez.

Las sanciones son:

1. amonestación;
2. multa;
3. suspensión; y,
4. destitución.

#### **Artículo 122.- Proporcionalidad entre los tipos de falta y las sanciones imponibles**

- 122.1. Las faltas leves son sancionadas en su primera comisión con amonestación, y en su reiteración, con multa. La comisión de la tercera falta leve constituye una falta grave y como tal se sanciona.

- 122.2. Las faltas graves se sancionan con suspensión en las funciones. La suspensión tendrá una duración mínima de quince días y una duración máxima de seis meses.
- 122.3. Las faltas muy graves se sancionan con destitución. El juez destituido no podrá regresar a la carrera judicial.
- 122.4. El límite de la sanción de multa será el 10% de la remuneración total anual del juez, y el límite de la sanción de suspensión, tres meses. Las faltas serán acumulables en el periodo de dos años, contados desde que se produjo la primera.

**Artículo 123.- Apartamiento del cargo de los jueces sometidos a investigación por faltas muy graves**

Cuando existan indicios razonables que hagan prever la imposición de la sanción disciplinaria de destitución al juez y su permanencia en el cargo durante el trámite del procedimiento disciplinario afecte la credibilidad del Poder Judicial, podrá decidirse su apartamiento. Dicha medida caduca a los seis meses de consentida o ejecutoriada la decisión. La impugnación de la resolución recaída en la medida cautelar no suspende su ejecución.

Si por la complejidad de la conducta investigada el procedimiento disciplinario no hubiese concluido, se puede disponer su prórroga por periodos iguales hasta que concluya dicho procedimiento administrativo.

### **CAPÍTULO III**

#### **INVESTIGACIÓN PRELIMINAR**

**Artículo 124.- Definición**

- 124.1. La investigación preliminar es la etapa en la cual el órgano encargado realiza una indagación respecto de una presunta falta, en busca de los elementos de prueba necesarios que le permitan sustentar la respectiva denuncia.
- 124.2. En caso de que las pruebas recogidas en esta etapa se desprenda la posibilidad de comisión de una falta, se iniciará un proceso disciplinario.

## **CAPÍTULO IV**

### **PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO**

#### **Artículo 125.- Definición**

El procedimiento disciplinario es la etapa en la cual se determina o no la comisión de una falta, a través de la actuación y valoración de todas las pruebas posibles, y se aplica la sanción correspondiente, de ser el caso.

## **CAPÍTULO V**

### **PLAZOS**

#### **Artículo 126.- Plazo de prescripción**

- 126.1. El plazo para interponer la queja administrativa contra los jueces prescribe a los tres meses de ocurrido el hecho o tomado conocimiento. La facultad del órgano de control para iniciar investigaciones por faltas disciplinarias prescribe a los dos años de conocido el hecho.
- 126.2. El cómputo del plazo de prescripción se iniciará nuevamente luego de declararse en abandono el proceso, lo cual sólo procede a pedido de parte y una vez transcurridos cuatro meses de hallarse inactivo éste, por falta de impulso imputable a la parte denunciante.

## **CAPÍTULO VI**

### **ÓRGANOS COMPETENTES**

#### **Artículo 127.- Órganos competentes de la investigación y juzgamiento de las faltas**

- 127.1. El órgano encargado de la investigación preliminar, debe ser distinto de aquél competente para tramitar el procedimiento disciplinario.
- 127.2. Los ciudadanos se encuentran legitimados para interponer directamente, ante el órgano competente, una denuncia contra un juez por la presunción de la comisión de una falta disciplinaria. Asimismo, el ciudadano interesado podrá escoger entre esta vía y la de presentar la queja ante la Defensoría del Pueblo, entidad que deberá solicitar el inicio de una investigación en aquellos casos que considere más verosímiles o relevantes.



- 127.3. En caso de una denuncia formulada públicamente, y que de ésta surgieran elementos que hicieran pensar razonablemente que el juez denunciado ha incurrido en la comisión de una falta, el órgano contralor deberá iniciar de oficio una investigación preliminar. Concluida dicha investigación, se determinará si se procede o no el inicio de un proceso disciplinario.

## **TÍTULO VI**

### **TERMINACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL**

#### **Artículo 128.- Causales**

El cargo de juez termina por:

1. muerte;
2. cesantía;
3. jubilación. Los jueces de paz letrado, especializados y mixtos, ejercen el cargo hasta los 65 años de edad. Los jueces superiores y supremos, hasta los 70 años de edad;
4. renuncia, desde que es aceptada por el órgano competente;
5. separación y destitución, en los términos regulados en esta norma;
6. incompatibilidad sobreviniente;
7. causa física o mental permanente, debidamente comprobada y que impida el ejercicio de la función jurisdiccional;
8. pérdida de la nacionalidad;
9. haber sido condenado por delito doloso o tener sentencia con reserva del fallo condenatorio; y,
10. los demás casos previstos en la Constitución o la ley.

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

#### **Primera.- En relación al ingreso a la carrera judicial**

Con el fin de cubrir las plazas titulares existentes, la convocatoria para el ingreso a la carrera judicial será anual en los primeros cinco años.

#### **Segunda.- Régimen transitorio de evaluación del desempeño, en relación al criterio de la eficiencia y rendimiento**

- 2.1. En tanto se determine la carga estándar, la evaluación de este factor se realizará clasificando a los despachos en tres niveles, según el número de procesos pertenecientes a la carga procesal máxima anual:
  - a. primer nivel: juzgados con carga efectiva inferior o igual a 400 procesos; y salas con carga efectiva inferior o igual a 1 500;
  - b. segundo nivel: juzgados con carga efectiva superior a 400 procesos e inferior o igual a 700; y salas con carga efectiva superior a 1 500 o igual a 2 200; y,
  - c. tercer nivel: con carga efectiva mayor a 700 procesos; y salas con carga efectiva mayor a 2 200.
- 2.2. El puntaje de los funcionarios que se desempeñen en los despachos ubicados en el primer nivel será de la siguiente manera:
  - a. con rendimiento igual o superior al 90%: la máxima calificación;
  - b. con rendimiento igual o superior al 70% e inferior al 90%: entre 20 y 29 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado;
  - c. con rendimiento igual o superior al 50% e inferior al 70%: entre 10 y 20 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado; y,
  - d. con rendimiento inferior al 50%: hasta un máximo de 10 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
- 2.3. El puntaje de los funcionarios que se desempeñen en despachos ubicados en el segundo nivel será de la siguiente manera:
  - b. con rendimiento igual o superior al 90%: la máxima calificación;
  - c. con rendimiento igual o superior al 70% e inferior al 90%: entre 22 y 29 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado;
  - d. con rendimiento igual o superior al 50% e inferior al 70%: entre 12 y 22 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado; y,
  - e. con rendimiento inferior al 50%: hasta un máximo de 12 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
- 2.4. El puntaje de los funcionarios que se desempeñen en despachos ubicados en el tercer nivel será de la siguiente manera:
  - a. con rendimiento igual o superior al 90%: el máximo puntaje;
  - b. cuando el número de procesados a cargo del funcionario determine la imposibilidad de lograr el rendimiento antes indicado, el puntaje se establecerá con base en el rendimiento esperado. El rendimiento esperado será determinado teniendo en cuenta la información estadística sobre el movimiento de procesos. Este rendimiento esperado en ningún caso podrá ser

- inferior al límite superior de la carga correspondiente a los despachos ubicados en el segundo nivel;
- c. con rendimiento igual o superior al 70% e inferior al 90%: entre 23 y 29, proporcionalmente al rendimiento logrado;
  - d. con rendimiento igual o superior al 50% e inferior al 70%: entre 14 y 23 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado; y,
  - e. con rendimiento inferior al 50%: hasta un máximo de 14 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
- 2.5. El presente régimen transitorio tendrá la vigencia de dos años, equivalente a un período de evaluación.

### **Tercera.- Vacatio legis**

Las disposiciones previstas en esta modificatoria, entrarán en vigencia al año judicial siguiente al de su aprobación.

## **DISPOSICIONES FINALES**

### **Primera.- Modifica el artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.**

Modifíquese los artículos 42 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley N° 26397, en el siguiente término:

“Artículo 42.- El Consejo llevará un registro actualizado de los postulantes y jueces en ejercicio con los datos generales de identificación, méritos académicos, profesionales y declaración patrimonial. El registro incluirá los resultados obtenidos en los procesos de evaluación para el nombramiento, **de evaluación periódica desempeño**, ratificación, sanciones, separación y destitución de los jueces del Poder Judicial y el Ministerio Público (...).”

**Segunda.-** Derogase todas las normas del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el Decreto Supremo 017-93-JUS; de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley 26397; y de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, Ley 26335, que se oponen a lo dispuesto en la presente ley.



# Anexo I

## **La propuesta del Congreso**

Proyecto de Ley N° 12419/2004-CR  
Ley de la carrera judicial

Elaborada por la Comisión Especial de  
Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral  
de la Administración de Justicia (CERIAJUS) del Congreso



## **Proyecto de Ley N° 12419/2004-CR**

Los congresistas de la República que suscriben, integrantes de la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, en ejercicio del derecho de iniciativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, proponen el siguiente Proyecto de Ley:

### **LEY DE LA CARRERA JUDICIAL**

#### **I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La presente iniciativa legislativa que impulsamos tiene como fuente una de las propuestas elaboradas por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS – creada por Ley N° 28083, y que los Congresistas que suscriben la hacen suya en atención a su trascendencia, importancia y prioridad.

Es preciso recordar que con fecha 24 de abril del presente año la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS, cumpliendo el encargo encomendado por su Ley de creación<sup>1</sup>, concluyó con el mandato conferido e hizo entrega al Presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo, del Plan Nacional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia.

Dicho Plan es el resultado de un acuerdo político institucional, logrado entre todas las entidades que conforman el sistema de justicia, colegios de abogados, facultades de derecho y representantes de la sociedad civil. Se trata, por ello, de una experiencia inédita en nuestra historia republicana, que asegura una gran cobertura de legitimidad al conjunto de propuestas allí contenidas y que, al mismo tiempo, ha permitido construir una definición orgánica y exhaustiva de reforma judicial, sin precedentes en nuestro país.

---

<sup>1</sup> A través de la Ley N° 28083 del 4 de octubre de 2003 se crea la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia –CERIAJUS. Esta Comisión tuvo como finalidad, la elaboración de un Plan Nacional que contenga una propuesta integral y concertada de reforma del sistema de justicia. Esta comisión tuvo un plazo de 180 días calendario, contados a partir de su instalación, para cumplir con su preciso encargo.

El Plan Nacional presenta un diseño sistémico y se organiza a partir de un conjunto de directrices que orientan los cambios propuestos y buscan instituir el punto de referencia para la formulación de futuras reformas<sup>2</sup>. En la base de este esfuerzo se identifican con claridad los principios constitucionales que informan el sentido de lo judicial en una democracia. Se entiende, por ello, el auspicio – desde el Plan Nacional- de un sistema judicial transparente; accesible en términos de igualdad social; dispuesto a responder a las demandas de justicia para brindar decisiones justas, desde un punto de vista individual y también social; institucionalmente idóneo, es decir, con los recursos humanos más calificados y necesarios para satisfacer la demanda de justicia, y; premunido de un sistema penal eficaz para garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Sin embargo, la propuesta presentada por la CERIAJUS constituye la primera fase de un proceso de largo aliento. Los distintos esfuerzos sectoriales que han permitido la concreción del Plan Nacional deben su origen a la necesidad del cambio, como condición para mejorar el sistema de justicia en su conjunto. Crear las condiciones para que las propuestas de reforma se pongan en marcha, constituye entonces el paso siguiente, pero ello requiere de un esfuerzo mayor que el requerido para la formulación del Plan.

La CERIAJUS llegó a establecer una agenda de cambios que en gran medida ha coincidido con los esfuerzos desarrollados, en forma simultánea, en otras entidades del sistema de justicia. Es el caso del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario elaborado por el Ministerio de Justicia, el proceso de reestructuración anunciado por el Poder Judicial, el Programa de Modernización llevado a cabo en el Ministerio Público. Precisamente, en esta misma línea de trabajo por la reforma del sistema de justicia, se identifican con nitidez, el importante trabajo desarrollado para la promulgación del Código Procesal Constitucional y del Código Procesal Penal, dos instrumentos normativos de enorme relevancia, cuya incidencia será crucial en el proceso de cambio emprendido. Es por esa razón que la CERIAJUS tuvo como parte de su agenda la necesidad de apoyar ambas iniciativas, hecho que, sin duda, contribuyó a impulsar el proceso de su aprobación y promulgación.

---

<sup>2</sup> En el proceso de elaboración del Plan Nacional, jugó un papel importante el Diagnóstico Interinstitucional que con el propósito de identificar los problemas del sistema de justicia desde una perspectiva sistémica. Al respecto véase: Secretaría Técnica. Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia CERIAJUS. *Los problemas de la justicia en el Perú: hacia un enfoque sistémico. Diagnóstico interinstitucional*. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2004.



En la actualidad, pese a todas las dificultades de tipo institucional que las entidades del sistema de justicia vienen enfrentando, el PLAN NACIONAL DE REFORMA ha comenzado a ejecutarse. Si bien no con la celeridad esperada y la coordinación necesaria para que el esfuerzo resulte óptimo, el proceso ya está en marcha. Prueba de ello, son las distintas iniciativas que tuvieron como fuente de origen la CERIAJUS, algunas de las cuales son ya disposiciones vigentes y otras forman parte de la agenda pendiente de discusión y aprobación en el Congreso de la República.

En el primer caso, puede mencionarse la ampliación de competencias de la jurisdicción anticorrupción, la creación de 90 unidades jurisdiccionales en todo el país (84 juzgados y 6 salas), el nombramiento de jueces para superar el grave problema de provisionalidad y suplencia que aún se mantiene, la creación de nuevas especialidades como la comercial. En el segundo caso, se tienen dieciseis (16) propuestas legislativas de reforma constitucional referidas a la Administración de Justicia, presentadas por diversos Congresistas de la República, que han obtenido dictamen favorable por la Comisión de Constitución y Reglamento<sup>3</sup>.

A su vez el Poder Ejecutivo también ha mostrado voluntad política para llevar adelante las propuestas del PLAN NACIONAL DE REFORMA. En esa línea se ha creado y constituido en el Ministerio de Justicia la “Comisión Especial Encargada de Impulsar la Implementación del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia”, mediante el Decreto Supremo N° 009-2004-JUS<sup>4</sup>. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo viene impulsando el proceso a través de la creación del Grupo de Trabajo denominado Iniciativa por la Justicia. En todo caso, el trabajo de estas Comisiones tendrá que coordinar sus líneas de acción con la Comisión de Estudio del Congreso de la República, pues toda propuesta de reforma sólo podrá materializarse a través de su deliberación y aprobación en el Parlamento Nacional.

---

<sup>3</sup> Se trata del Dictamen emitido respecto de los Proyectos de Ley N° 10676/2003-CR, 11539/2004-CR, 11455/2004-CR, 11315/2004-CR, 11299/2004-CR, 11295/2004-CR, 11030/2004-CR, 10604/2004-CR, 10023/2004-CR, 09994/2003-CR, 10906/2003-CR, 10742/2003-CR, 8511/2003-CR, 8507/2003-CR y 7814/2004-CR, que proponen la modificación de diversos artículos de la Constitución Política del Perú relativos a la Administración de Justicia. Cabe indicar que este Dictamen propone, sobre la base de la aprobación de los diversos proyectos de ley antes citados, modificar los artículos 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 201, 202, 204 y 205 de la Constitución. Fecha: 29 de octubre de 2004.

<sup>4</sup> Tuvo como antecedente la Resolución Ministerial N° 319-2004-JUS.

Todas estas consideraciones apreciadas en conjunto, revelan que la reforma del sistema de justicia está en marcha. Sin embargo, la agenda instaurada por el PLAN NACIONAL es aún más vasta y exige, por ello, un compromiso institucional aún más fuerte. A esta necesidad responde la creación de la *Comisión de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS*. Éste es el ámbito en el que corresponde definir el sentido de las propuestas legislativas como expresión de un gran acuerdo entre las fuerzas políticas del país que tienen sede en el Congreso de la República. Este acuerdo político deberá expresarse a través del proyecto integral de reforma que la Comisión de Estudio deberá elaborar como, instrumento rector de las políticas públicas en materia de justicia, por vez primera en la historia republicana. En definitiva, la propuesta de reforma integral del sistema de justicia que el Congreso apruebe, deberá responder al reto que las demandas de justicia de la ciudadanía y la democracia exigen en el Perú del siglo XXI.

#### **1. LA COMISIÓN DE ESTUDIO DEL PLAN NACIONAL DE REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELABORADO POR LA CERIAJUS**

En sesión de fecha 6 de octubre de 2004, el Pleno del Congreso de la República acordó constituir la *Comisión de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS*<sup>5</sup>. Esta Comisión está constituida como un órgano en el que confluyen las distintas fuerzas políticas del Parlamento y su encargo fundamental es continuar, desde el papel que toca desempeñar al Parlamento, el trabajo iniciado por la CERIAJUS.

##### **1.1. Misión de la Comisión de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia**

De acuerdo a lo expresado en el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Estudio, es posible asumir que la Comisión tiene como misión: “Impulsar, coordinar y orientar el proceso legislativo de reforma del Sistema de Justicia para que las propuestas y recomendaciones de la CERIAJUS se hagan viables y se concreten

---

<sup>5</sup> La propuesta, como Moción de Orden del día N° 6044, fue presentada con fecha 04 de agosto del 2004, por el señor congresista Fausto Alvarado Dodero de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República. En la sesión del 9 de septiembre se inició la fundamentación del texto sustitutorio, pero la sesión quedó suspendida. Posteriormente, una vez admitido a debate el texto sustitutorio de dicha moción, se produjo la aprobación del mismo el 6 de octubre de 2004.

como normas, creando las condiciones, para que ello se produzca en el marco del más amplio consenso político-institucional”

Esta misión involucra un doble esfuerzo: por un lado, coadyuvar al logro de consensos partidarios que desde el parlamento nacional otorgue legitimidad al proceso de reforma del sistema de justicia. De otro lado, se buscará generar los mecanismos más idóneos para consolidar el trabajo de la CERIAJUS, a través de la formación de una verdadera coalición nacional por el cambio, dentro del más absoluto respeto por la autonomía e independencia de las instituciones que conforman el sistema de justicia, a través de un esquema de legitimación social, en pos de constituir un escenario ciudadano, consciente y comprometido con la reforma del sistema de justicia, como correlato indispensable de la misma.

## **1.2. Conformación de la Comisión de Estudio**

En razón de lo expuesto, la Comisión de Estudio tiene un carácter multipartidario. Su conformación, como expresión de lo dicho, ha quedado integrada por los señores congresistas: Fausto Alvarado Dodero (Presidente); Eduardo Salhuana Cavides; José Luis Delgado Núñez del Arco; Jonhy Lescano Ancieta; Rosa Florián Cedrón; Michael Martínez González; y Jorge Samuel Chávez Sibina.

La *Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS*, cuenta con un plazo de 180 días útiles, contados a partir de su instalación, para concluir con su encargo.

Es en el marco de las funciones atribuidas a la Comisión de Estudio que se ha procedido a desarrollar el presente proyecto que recoge en forma precisa la propuesta de la CERIAJUS.

Debe tenerse presente que se trata de una propuesta que ha transitado por un amplio proceso de discusión y deliberación a través de las distintas instancias previstas por la propia CERIAJUS: primero como resultado del trabajo realizado en el Grupo de Trabajo Temático de Recursos Humanos y luego como producto de su aprobación en el pleno de la misma Comisión. Las líneas generales de esta propuesta, recogen entonces, el aporte de un conjunto de expertos, operadores y responsables de las distintas entidades del sistema de justicia.

## **II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA**

El punto de partida de esta propuesta se define precisamente por la ausencia de un sistema de carrera judicial. Si bien “se identifican lineamientos vinculados

a los tópicos generales del estatuto del Juez, estos se presentan en forma aislada, inconexa e inefectiva. De este modo, la ausencia de criterios generales y orgánicos como derivación del principio de independencia, que regulen el acceso, el ascenso y que establezcan pautas claras para la terminación en el cargo de los jueces, parece ser la regla general de este tema fundamental”<sup>6</sup>.

Se parte, igualmente, de considerar “la ausencia de políticas coherentes de capacitación. Los programas de capacitación de jueces, han estado orientados la mayoría de las veces por las necesidades coyunturales del sistema político, antes que a criterios técnicos y pedagógicos. Ha incidido en este punto, la falta de políticas de coordinación interinstitucional claras entre el CNM y la AMAG, respecto de aspectos cruciales en el cumplimiento de sus competencias: perfil del Juez en función de las especialidades y los requerimientos regionales, desarrollo de estrategias de selección adecuadas a los requerimientos precisos de cada tipo de función, desarrollo de programas de capacitación a las necesidades del ejercicio de la función”<sup>7</sup>.

La finalidad esencial de la propuesta normativa, es proponer un modelo de carrera judicial que permita atraer al personal profesional más idóneo para garantizar su capacitación y desarrollo personal en el marco de un eficiente sistema de control sobre el desempeño profesional y ético. Esta es una condición esencial para lograr que el proceso de reforma del sistema de justicia se materialice. No será posible llevar adelante ningún cambio en la justicia sin una política de recursos humanos que se refleje en el sistema de carrera judicial.

Esta propuesta asume que la carrera judicial es la organización sistemática de los diferentes aspectos que determinan el ingreso a la función judicial, la permanencia, el ascenso y su conclusión, por lo que sus componentes deben estar estructurados en función de los mismos principios y tener como fines: i) Contribuir a garantizar la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional. ii) Atribuir a la magistratura de los derechos y garantías inherentes a su función de Poder del Estado.

La carrera judicial debe orientarse a:

- Definición del perfil del Juez que se requiere para responder a la enorme demanda social insatisfecha en el país, respecto de la función de impartir justicia.

---

<sup>6</sup> SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CERIAJUS. *Los problemas de la Justicia en el Perú: hacia un enfoque sistémico. Diagnóstico Interinstitucional*. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2004, p. 385.

<sup>7</sup> Ibid. p. 386.

- Organización de un sistema riguroso de ingreso a la carrera judicial, sustentado en criterios objetivos de evaluación, que garantice la elección del postulante más competente. En este sentido, se propone un sistema de ingreso doble: i) Ingreso cerrado para Juez del primer y segundo nivel; y, ii) Ingreso abierto para Juez del tercer y cuarto nivel.
- Sistema de selección que permita escoger a las personas más idóneas para los cargos, y posibilite: i) seleccionar candidatos aptos para cubrir el total o parte de las plazas de jueces titulares que existían a la fecha de la convocatoria del concurso de selección; ii) cubrir las plazas convocadas para jueces de suplencia; y, iii) constituir el contingente de reserva para cubrir las futuras plazas de jueces titulares que se generen posteriormente.
- Organización de un régimen de derechos que asegure al Juez el acceso a una formación adecuada, le garantice estabilidad e inamovilidad, así como reconocimiento y estímulo a su esfuerzo en el desempeño de su función.

Es de precisar que para el desarrollo de esta propuesta, además del Plan Nacional de Reforma Integral del Sistema de Justicia y del Diagnóstico Interinstitucional de la Secretaría Técnica de la CERIAJUS, se ha contado con el aporte proveniente del documento “Propuesta de modificación del reglamento de selección y nombramiento de jueces y fiscales”, elaborada por Luis Pásara, el 9 de julio del 2003 (versión mimeo).

Finalmente es del caso señalar que habiendo terminado de elaborar la presente propuesta legislativa, la Comisión de Estudio recepciono el anteproyecto de ley de carrera judicial elaborado por la comisión de carrera judicial del Poder Judicial, el cual se encuentra pendiente de ser aprobado por los miembros de dicha comisión y puesto en conocimiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, por lo que siendo este documento un importante referente sobre la materia se adjunta a la presente propuesta.

### **III.EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

El presente proyecto de Ley plantea la modificación de la Sección Cuarta y Quinta del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con respecto al Régimen de los Jueces y la Carrera Judicial.

#### **IV. ANALISIS COSTO BENEFICIO**

La propuesta legislativa no implica gasto alguno al erario nacional, por el contrario, su aplicación permitirá optimizar nuestro sistema de justicia, contando con recursos humanos más idóneos para el mismo, fortaleciendo la institucionalidad democrática del país, y con ello, la formación de un poder judicial verdaderamente autónomo, predecible y democrático.

Asimismo, la importancia que la presente propuesta representa se encuentra definida por su sistematización en un solo cuerpo normativo de todas las previsiones correspondientes a los distintos temas propios de la carrera judicial.

#### **VI. FORMULA LEGAL**

#### **EL CONGRESO DE LA REPUBLICA HA DADO LA LEY SIGUIENTE: LEY DE CARRERA JUDICIAL**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Sustitúyase las Secciones Cuarta y Quinta del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que comprenden los artículos 177° al 216° y 217 al 248° respectivamente, bajo los siguientes términos:

### **SECCIÓN CUARTA REGIMEN DE JUECES**

### **TITULO I CAPITULO UNICO REQUISITOS COMUNES**

#### **Artículo 177°.- REQUISITOS COMUNES**

Son requisitos comunes para el ingreso y permanencia en la Carrera Judicial:

1. Ser peruano de nacimiento.
2. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles.
3. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, salvo el caso de los jueces de paz.
4. No haber sido condenado, ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva del fallo condenatorio, por delito doloso.

5. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.
6. No estar inhabilitado o sancionado por falta grave por las instancias competentes para ejercer ese tipo de atribuciones.
7. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial, del Ministerio Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la Administración Pública o de empresas estatales o de la actividad privada por falta grave.
8. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por ley.

## **TITULO II**

### **CAPITULO UNICO**

### **REQUISITOS ESPECIALES**

#### **Artículo 178°.- REQUISITOS ESPECIALES PARA SER JUEZ SUPREMO<sup>8</sup>**

Para ser elegido Juez de la Corte Suprema se exige, además de los requisitos comunes:

1. Ser mayor de 45 años;
2. Ser ciudadano en ejercicio;
3. Acreditar una trayectoria democrática de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos;
4. Haber ejercido el cargo de Juez Superior Titular, Fiscal Supremo Adjunto o Fiscal Superior Titular, cuando menos 10 (diez) años; o alternativamente, haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en disciplina jurídica por 15 (quince) años;
5. Haber superado la evaluación prevista para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura.

#### **Artículo 179°.- REQUISITOS ESPECIALES PARA SER JUEZ SUPERIOR**

Para ser elegido Juez de la Corte Superior se exige, además de los requisitos comunes:

1. Ser mayor de 32 años;
2. Haber ejercido el cargo de Juez Especializado o Mixto Titular, Fiscal Superior Adjunto Titular, o Fiscal Provincial Titular durante 5 (cinco) años; o haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra universitaria en discipli-

---

<sup>8</sup> Conforme a lo previsto en la Constitución Política artículo 147° y a la propuesta de en materia constitucional de la CERIAJUS, artículo 143°.

na jurídica, por un período no menor de 07 (siete) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea; y,

3. Haber superado la evaluación prevista para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura.

**Artículo 180°.- REQUISITOS ESPECIALES PARA SER JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO<sup>9</sup>**

Para ser elegido Juez Especializado o Mixto se exige, además de los requisitos comunes:

1. Ser mayor de 27 años;
2. Haber sido Juez de Paz Letrado o Fiscal Provincial Adjunto por más de 3 (tres) años;
3. Haber superado la evaluación prevista para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura; y,
4. Haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación a cargo de la Academia de la Magistratura. Este curso es obligatorio y tendrá por finalidad habilitar para el ejercicio de la función en la especialidad respectiva, luego de haber aprobado los requisitos previos.

**Artículo 181°.- REQUISITOS ESPECIALES PARA SER JUEZ DE PAZ LETRADO**

Para ser Juez de Paz Letrado se exige además de los requisitos comunes:

1. Ser mayor de 27 años
2. Tener una experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía de 3 (tres) años desde que se obtuvo el título de abogado, o haber desempeñado el cargo de Fiscal Provincial Adjunto por más de 3 años; o desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por el mismo período. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea.
3. Haber superado la evaluación prevista para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura.

---

<sup>9</sup> Según lo previsto por el Documento de la CERIAJUS, los dos primeros niveles tienen como requisito común la edad de 27 años. El modelo propuesto en esta fase es cerrado, por lo tanto, el acceso al nivel de jueces mixtos y especializados es sólo por ascenso. Ver páginas 520 y 539 del citado documento.



4. Haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación para habilitar en el ejercicio de la función jurisdiccional, a cargo de la Academia de la Magistratura.

**Artículo 182°.- REQUISITOS ESPECIALES PARA SER JUEZ DE PAZ**

Para ser Juez de Paz se exige además de los requisitos comunes:

1. Ser mayor de 25 años;
2. Acreditar que reside por más de (3) tres años continuos en la circunscripción a la que postula;
3. Saber leer y escribir;
4. Tener ocupación conocida; y,
5. Conocer además del castellano, el idioma quechua o aymara o cualquier otro dialecto, si en el lugar donde va a actuar, predomina uno de ellos.

**SECCIÓN QUINTA  
LA CARRERA JUDICIAL**

**TÍTULO I  
CAPITULO UNICO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 183°.- CONCEPTO Y FINES DE LA CARRERA JUDICIAL**

La carrera judicial es el conjunto articulado de principios y normas que regulan el ingreso, ascenso y terminación en el cargo de Juez del Poder Judicial. La carrera judicial está compuesta, además, por los derechos y obligaciones esenciales al desarrollo de la función jurisdiccional. Los jueces se diferencian entre sí sólo por la diversidad de funciones.

La Carrera Judicial tiene por fines:

- a. Contribuir a garantizar la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional.
- b. Atribuir a la magistratura los derechos y garantías inherentes a su función de Poder del Estado.

**Artículo 184°.- INDEPENDENCIA DEL EJERCICIO DE LA FUNCION**

Todos los jueces ejercen por igual la potestad jurisdiccional que la Constitución les confiere, aunque con competencia funcional distinta, motivo por el cual, en su ejercicio no existe diferencia jerárquica ni dependencia entre ellos.

#### **Artículo 185°.- OBJETIVOS DE LA CARRERA JUDICIAL**

Para el cumplimiento de los fines indicados en el artículo precedente, el sistema de carrera judicial tiene como objetivos los siguientes:

- a. Asegurar la existencia de un proceso de ingreso a la magistratura que reconozca el mérito a través de criterios de evaluación objetivos.
- b. Garantizar la existencia de un sistema de ascensos articulado al mérito profesional, con tendencia a desvincular en forma progresiva el cargo de la jerarquía.
- c. Establecer un sistema objetivo de causales de terminación para el cargo de Juez.
- d. Auspiciar el desarrollo de programas de capacitación continua para los jueces.
- e. Asegurar la existencia de condiciones laborales, adecuadas al desarrollo de la función jurisdiccional y de un sistema remuneratorio justo, equitativo y suficiente.

#### **Artículo 186°.- PRINCIPIOS RECTORES**

La Carrera Judicial se rige por los siguientes principios:

- a. Independencia de la función jurisdiccional.
- b. Inamovilidad y permanencia en el cargo.
- c. Especialización.
- d. Capacitación permanente.
- e. Evaluación de desempeño y reconocimiento de méritos.
- f. Calidad del servicio de justicia
- g. El debido proceso, la tipicidad y la legalidad.
- h. Remuneración justa.

#### **Artículo 187°.- ESTRUCTURA**

La Carrera Judicial se configura de la siguiente manera<sup>10</sup>:

1. Jueces de Paz Letrados.
2. Jueces Especializados o Mixtos.
3. Jueces de las Cortes Superiores.
4. Jueces de la Corte Suprema de Justicia.

---

<sup>10</sup> Conforme a lo previsto en el Plan Nacional de Reforma Integral de la CERIAJUS.

Para el caso de estos dos últimos niveles el acceso es abierto.

**Artículo 188°.- ÓRGANO QUE ADMINISTRA LA CARRERA JUDICIAL**

El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado de administrar el sistema de carrera judicial, de conformidad con la Constitución y su ley orgánica.

**TITULO II  
DEL INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL**

**CAPÍTULO I  
SELECCIÓN**

**Artículo 189°.- INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL**

El ingreso a la carrera judicial de los jueces comprende las siguientes fases:

1. Convocatoria pública al concurso;
2. Selección de los postulantes para su ingreso a la Academia de la Magistratura;
3. Impartición del curso de formación previa, sólo para el caso de los jueces de los dos primeros niveles.
4. Evaluación final para efectos de aprobar el curso de formación sólo en el caso de los jueces de los primeros niveles.
5. Declaración de los candidatos aptos para ingresar a ocupar un cargo judicial en estricto orden de méritos.
6. Nombramiento en el cargo judicial; y
7. Elaboración del registro de candidatos aptos para ocupar el cargo de jueces de primer o segundo nivel, que permanecen en reserva.

**Artículo 190°.- CONVOCATORIA**

La convocatoria para el ingreso a la Carrera Judicial, deberá comprender todas las vacantes existentes y podrá prever un número adicional que permita cubrir las que se produzcan hasta la siguiente convocatoria.

La convocatoria deberá indicar el grado y, de ser el caso, la especialidad de la plaza ofrecida.

**Artículo 191°.- PERFIL DEL JUEZ**

1. Capacidad para razonar el orden jurídico a partir de casos concretos;
2. Formación jurídica sólida;

3. Capacidad para interpretar normas creativamente;
4. Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;
5. Condiciones para ejercer la función con independencia propia de una institución democrática;
6. Visión crítica del funcionamiento del sistema de justicia; y,
7. Trayectoria personal éticamente irreprochable.

#### **Artículo 192°.- FINALIDAD Y ALCANCE**

El sistema de selección responde a la evaluación de méritos y su finalidad es elegir a los postulantes más competentes, entendiendo por tales a quienes hayan demostrado contar con la capacidad y calidad que se exige, según el perfil del Juez señalado en el artículo 191°.

#### **Artículo 193°.- PROCESO DE SELECCIÓN**

El proceso de selección está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Su elaboración se verificará tomando en cuenta el perfil de Juez según lo previsto en el artículo 191° de la presente ley.

La Academia de la Magistratura será consultada respecto del contenido temático del examen escrito.

El concurso deberá seleccionar a los candidatos aptos para ocupar:

1. Las plazas vacantes para jueces titulares;
2. Las plazas vacantes para jueces de suplencia; y,
3. Como jueces titulares de reserva, las plazas que se generen a futuro. Esta condición sólo puede mantenerse por el plazo de 3 años.

#### **Artículo 194°.- COMPONENTES**

Los componentes son los diferentes ámbitos objeto de evaluación que estructuran el proceso de selección y son los siguientes:

1. Evaluación de antecedentes o desarrollo profesional del postulante (*Curriculum Vitae*);
2. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para el ejercicio de la función jurisdiccional mediante prueba escrita;
3. Evaluación psicológica por medio de la aplicación de un test;
4. Evaluación de la trayectoria social y la probidad por medio del control ciudadano;
5. Evaluación personal (entrevista); y,
6. Cuadro de méritos para los miembros de la Carrera.

#### **Artículo 195°.- PROCESO DE EVALUACIÓN**

El resultado de las dos primeras pruebas previstas en el artículo anterior tienen carácter eliminatorio, quien no las apruebe no puede continuar en el proceso de selección. Quienes las hayan aprobado se someten a la evaluación psicológica cuyo resultado también tendrá carácter eliminatorio.

Concluida esta parte del proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura elaborará un registro de postulantes aptos para acceder a la evaluación personal, el mismo que se publicará para efectos de la evaluación prevista en el inciso 4 del artículo 194°. Para esta evaluación, dentro del plazo de 15 días calendarios contado a partir de la publicación de la lista de candidatos aptos, cualquier ciudadano u organización social podrá ofrecer al Consejo Nacional de la Magistratura información sobre los antecedentes de un candidato. El Consejo Nacional de la Magistratura decidirá sobre la relevancia y verosimilitud de dicha información realizando de oficio la investigación correspondiente. El resultado de este procedimiento será incorporado a los antecedentes del candidato y deberá ser materia de análisis durante la evaluación personal.

En todos los casos la nota aprobatoria es de dos tercios sobre el máximo obtenible.

#### **Artículo 195°-A.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN**

La calificación del *Curriculum Vitae*, la evaluación psicológica y el examen escrito se realiza en estricto acto privado.

La evaluación personal o entrevista se realizará en sesión pública.

#### **Artículo 195°-B.- EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE**

1. Criterios generales para la evaluación del *Curriculum Vitae* Documentado:

La Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de Magistrados califica el *Curriculum Vitae*.

La calificación del *Curriculum* debe asignar un puntaje a cada mérito acreditado documentalmente, conforme al reglamento aprobado por el Consejo.

La evaluación debe considerar los rubros de experiencia en función de la condición del postulante o candidato, es decir, como Juez del Poder Judicial o Ministerio Público, o bien como abogado o docente universitario.

La calificación deberá constar en el acta correspondiente para cada postulante. Será firmada solamente por los consejeros participantes y puesta en conocimiento del Pleno para su aprobación.

2. Méritos a ser considerados para la evaluación del *Curriculum Vitae*:

Esta evaluación debe considerar los siguientes componentes por separado:

i) Formación académica; ii) Capacitación; iii) Publicaciones; iv) Idiomas; v) Experiencia profesional.

a. La calificación académica deberá tener como parámetros los grados académicos (maestría y/o doctorado), así como los estudios curriculares de postgrado, acreditado con certificado oficial de notas. También se valorarán los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en otras disciplinas profesionales.

b. La evaluación del rubro de capacitación debe considerar los certámenes en los que los candidatos hubiera participado durante los últimos 7 años anteriores a la convocatoria del concurso respectivo. En este caso, tratándose de eventos de carácter jurídico, deberán acreditarse la presentación de ponencias en seminarios, talleres, foros, mesas redondas, ciclos de conferencias, etc. Deberá presentarse, según corresponda, el certificado de estudios de la Academia de la Magistratura.

c. Las publicaciones deberán ser acreditadas con los originales correspondientes. Éstas podrán constar en libros o textos universitarios; investigaciones jurídicas, doctrinarias o de campo; ensayos y artículos editados en publicaciones académicas. También se podrán presentar otras publicaciones académicas en materias no jurídicas.

d. La evaluación de idiomas deberá considerar el dominio de lenguas aborígenes y extranjera.

e. La experiencia profesional del candidato debe valorar específicamente el campo de trabajo al que éste pertenece. Se considera para este efecto:

i) La magistratura, ponderando en cada caso la especialidad y el cargo; ii) la docencia universitaria; iii) el ejercicio de la abogacía.

**Artículo 195°-C.- EXAMEN ESCRITO**

El examen escrito tiene por finalidad evaluar: habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para el ejercicio del cargo. Deberán considerarse como componentes esenciales de éstas, el razonamiento jurídico, la capacidad de redacción, la cultura jurídica.

En cada caso, se buscará que la evaluación del examen pondere los requerimientos para cada cargo o especialidad.

#### **Artículo 195°-D.- LA PRUEBA PSICOLÓGICA**

Este examen tendrá por finalidad evaluar las aptitudes y condiciones psicológicas requeridas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

#### **Artículo 195°-E.- EVALUACIÓN PERSONAL**

La evaluación personal se realiza a través de la entrevista personal, la que tiene por finalidad:

- a. Revisar la experiencia profesional del postulante a la luz de su *Currículum Vitae*. En todo caso, se tomará en cuenta las diferentes condiciones en que se puede postular a un cargo de Juez, según lo señalado en el inciso e) del artículo 195;
- b. Evaluar la vocación hacia la magistratura;
- c. Conocer sus criterios sobre los principios jurídicos, valores éticos, morales y sociales; y,
- d. Conocer sus opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial o del Ministerio Público y la reforma del sistema de justicia.

## **CAPITULO II FORMACIÓN**

#### **Artículo 196°.- OBJETIVO**

La formación de los jueces, a cargo de la Academia de la Magistratura, tiene por objeto:

- a. Preparar al futuro Juez para el desempeño de la función jurisdiccional.
- b. Actualizar y perfeccionar permanentemente a los jueces para su promoción y ascenso en la carrera.
- c. Desarrollar las destrezas, habilidades y conocimiento requeridos para el ejercicio de la función jurisdiccional.

#### **Artículo 197°.- CONTENIDO**

El contenido temático de la capacitación, deberá tener en cuenta las necesidades específicas de la judicatura y los perfiles del Juez. Las áreas temáticas son:

1. Destrezas para la argumentación jurídica;
2. Conocimientos sobre los tópicos generales del derecho;
3. Conocimientos sobre materias especializadas del derecho;

4. Gestión del despacho judicial; y,
5. Elaboración de propuestas de solución a problemas de nivel legal y funcional.

#### **Artículo 198°.- CURSO HABILITANTE**

Quienes resulten seleccionados, seguirán en la Academia de la Magistratura el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) consistente en un curso teórico práctico habilitante para el nombramiento. Los candidatos que no superen la evaluación respectiva perderán la expectativa de ingreso a la Carrera Judicial.

#### **Artículo 199°.- CAPACITACIÓN**

En armonía con lo dispuesto en los artículos anteriores, la Academia de la Magistratura proveerá programas específicos dirigidos a proporcionar:

- a. Capacitación para los candidatos que hayan superado las pruebas previstas para cubrir las plazas de jueces de paz letrado, jueces especializados y mixtos, así como para los jueces superiores;
- b. Capacitación para el ascenso, dirigida a jueces que reúnen los requisitos para postular a un ascenso; y,
- c. Capacitación permanente a través de programas de actualización, especialización y perfeccionamiento.

### **CAPITULO III NOMBRAMIENTO**

#### **Artículo 200°.- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN**

El nombramiento de los jueces en todos los grados y especialidades corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. La designación en el cargo específico para el órgano jurisdiccional respectivo, compete al Poder Judicial.

#### **Artículo 201°.- EGRESADO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**

Los egresados de la Academia de la Magistratura declarados aptos para acceder a un cargo judicial, conforme a lo previsto en la presente ley, serán nombrados como tales cuando opten, en estricto orden de méritos, por la plaza vacante de Juez titular o de Juez de suplencia que deseen cubrir.

En el caso de que los candidatos aptos no opten por ninguna de las dos condiciones indicadas en el párrafo anterior, permanecerán, en calidad de candidatos aptos en reserva, por el plazo de tres años, para cubrir cualquier plaza que se genere en este periodo y, mientras tanto, no serán nombrados.



Los candidatos que opten por la condición de Juez de suplencia de primer o segundo grado adquieren los derechos de los jueces en general, sujetos al régimen especial previsto para cubrir las plazas que se generen temporalmente.

**TITULO III**  
**DEBERES Y DERECHOS DE LOS JUECES**  
**CAPITULO I**  
**DEBERES**

**Artículo 202°.- DEBERES**

Son deberes de los Jueces:

1. Observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para los informes orales y otras diligencias; su incumplimiento injustificado constituye conducta funcional;
2. Dedicarse exclusivamente a la función judicial. No obstante, puede ejercer la docencia universitaria en materias jurídicas, a tiempo parcial, hasta por ocho horas semanales de dictado de clases y en horas distintas de las que corresponden al despacho judicial. Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar labores de investigación jurídica e intervenir a título personal en Congresos y Conferencias;
3. Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de fácil e inmediata comunicación. Para este último caso se requiere autorización previa del órgano competente;
4. Seguir los cursos de capacitación programados por la AMAG y los cursos considerados requeridos como consecuencia del resultado de la evaluación periódica<sup>11</sup>;
5. Ejercer sus funciones jurisdiccionales con independencia;
6. Presentar su respectiva declaración jurada al asumir y al dejar el cargo, conforme a ley y cada vez que su patrimonio y rentas varíen en más de un 20%; y,
7. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley.

---

<sup>11</sup> Ver Plan Integral de la CERIAJUS, página 573.

## **CAPITULO II DERECHOS**

### **Artículo 203°.- DERECHOS**

Son derechos de los jueces:

1. La independencia en el desempeño de su función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante él o interferir en su actuación;
2. La permanencia en el servicio hasta los 70 años de acuerdo con la Constitución y la Ley<sup>12</sup>;
3. Ser trasladados, a su solicitud y previa evaluación, cuando por razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible continuar en el cargo;
4. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares;
5. Percibir una remuneración suficiente, acorde con su función y jerarquía;
6. Asociarse conforme a lo previsto por la Constitución Política y las leyes;
7. A que el tiempo de servicios sea reconocido y considerado para el cómputo de la antigüedad en el cargo, en igualdad de derechos;
8. Gozar de la cobertura de un seguro de vida incluido el sepelio;
9. Recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura, bajo responsabilidad; y,
10. Los demás que señalen la ley y la Constitución.

### **Artículo 204°.- DERECHO A LA EVALUACION PERIODICA**

Los jueces comprendidos en la Carrera Judicial están sujetos a evaluación periódica, a través de un sistema técnico, objetivo, imparcial y equitativo, sujeto a un Reglamento.

Los méritos alcanzados, y reconocidos a través de la evaluación, consolidan la garantía de permanencia en la carrera, otorgan ventajas comparativas para elecciones, nombramientos y ascensos, y pueden determinar el otorgamiento de estímulos económicos, anunciados con antelación.

Los resultados de las evaluaciones son publicados y deberán ser tenidos en cuenta al momento de los ascensos.

---

<sup>12</sup> Conforme a lo previsto en el Proyecto de Reforma de la Constitución (art. 145) de la CERIAJUS.

#### **Artículo 205°.- CAMPOS DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA**

Son las siguientes:

1. La organización del trabajo en su despacho;
2. La calidad de la gestión del proceso;
3. La calidad de las decisiones o resoluciones finales;
4. El desarrollo profesional; y
5. Las publicaciones jurídicas y no jurídicas realizadas.

#### **Artículo 206°.- DERECHO A LA ESPECIALIZACION**

La especialidad de los jueces se mantiene durante el ejercicio del cargo, salvo que por razones de necesidad en el servicio de la administración de justicia se requiera el cambio de especialización.

El ingreso a una función especializada no impide postular a distinta especialidad. El Juez puede recuperar su especialidad solamente cuando se produzca una vacante en su especialidad original.

En el caso de crearse nuevas especialidades, el Juez podrá solicitar su cambio de especialidad.

#### **Artículo 207°.- DETERMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD**

La especialidad se determina por:

1. La aprobación de los Programas de Especialización impartidos por la Academia de la Magistratura.
2. La antigüedad en la especialidad durante el ejercicio de la magistratura;
3. El ejercicio de cátedra universitaria en la materia;
4. La realización de investigaciones, comunicaciones y otros trabajos académicos similares, en la materia.
5. Las publicaciones sobre materia jurídica especializada;
6. Los grados académicos de la especialidad; y,
7. Los trabajos desempeñados en cargos afines.

#### **Artículo 208°.- DERECHO DE INAMOVILIDAD**

Los jueces que ejercen función jurisdiccional gozan del derecho de inamovilidad en el cargo. Los que hayan sido designados provisionalmente por plazo determinado, perteneciendo o no a la Carrera Judicial, gozarán de inamovilidad sólo por ese tiempo.

#### **Artículo 209°.- CAPACITACION**

La capacitación de los jueces, es un derecho de su función y un factor indispensable para evaluar su desempeño, está a cargo fundamentalmente de la Academia de la Magistratura.

Los cursos de la Academia de la Magistratura son esencialmente formativos, tanto para el acceso a la carrera judicial como para el ascenso, según lo previsto por esta norma. La capacitación, además, prevé el perfeccionamiento continuo y la actualización en función de las especialidades.

#### **Artículo 210°.- REMUNERACIONES**

Los jueces tienen derecho a percibir catorce remuneraciones al año, que les asegure un nivel de vida digno de su misión y función. La determinación de la forma y monto de las remuneraciones de los jueces de todos los niveles la efectúa el Poder Judicial.

La remuneración estará integrada, por lo menos, por un haber básico igual para cada nivel y la bonificación personal. Ambos son computables para goces y beneficios.

Los Jueces Supremos, conforme lo previsto por la Constitución, tienen la calidad de funcionarios de la máxima jerarquía y en tal sentido tienen derecho a la homologación salarial.

El ingreso por todo concepto será establecido con una diferencia no mayor al 20% entre uno y otro nivel de la carrera<sup>13</sup>.

#### **Artículo 211°.- CÓMPUTO DE AÑOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.**

Los Jueces comprendidos en la Carrera Judicial, que cuenten con 15 (quince) años de servicios al Estado, computan de abono cuatro años de formación profesional, aun cuando éstos hayan sido simultáneos con servicios efectivos prestados. Este beneficio se otorga de oficio, bajo responsabilidad de la Oficina de Personal o la que haga las veces de ésta.

De igual forma, los jueces comprendidos en la carrera judicial que hayan desempeñado o desempeñen judicaturas provisionalmente, tienen derecho a que su tiempo de servicios sea reconocido y considerado para el cómputo de la antigüedad en el grado.

---

<sup>13</sup> Según la propuesta de reforma constitucional de la CERIAJUS, artículo 147°.

#### **Artículo 212°.- BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS**

Los jueces, con excepción de los supremos, perciben una bonificación equivalente al 25% del haber básico por cada 10 años de servicios al Estado en el cargo.

Los jueces de la Corte Suprema que permanezcan más de cinco años en el ejercicio del cargo perciben una bonificación adicional, equivalente a un 25% de su remuneración básica, sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales. Esta bonificación es pensionable sólo después cumplirse treinta años de servicios al Estado, diez de los cuales por lo menos deben corresponder al Poder Judicial.

#### **Artículo 213- RÉGIMEN DE JUBILACIÓN**

La presente Ley no modifica el Régimen Jubilatorio de los Jueces en ejercicio, por lo que no puede ser invocada para incorporar a quienes están fuera del régimen de la Ley 20530, ni para excluir a quienes están dentro del mismo al entrar ésta en vigencia.

#### **Artículo 214°.- PENSIONES**

La pensión equivalente a la última remuneración es obligatoria por incapacidad física o mental permanente o a los 70 años de edad, y facultativa a los 30 años de servicio. En los dos últimos casos es requisito tener 10 años de ejercicio efectivo de la judicatura<sup>14</sup>.

En caso de fallecimiento, el cónyuge e hijos menores de edad, o hijos mayores que cursen estudios superiores o que sufran discapacidad que les impida trabajar, perciben la pensión que corresponda según la ley de la materia.

### **CAPITULO III PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES**

#### **Artículo 215°.- PROHIBICIONES**

Es prohibido a los Jueces:

1. Defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, de su cónyuge, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
2. Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en

---

<sup>14</sup> Conforme a lo previsto en el artículo 147 del proyecto de reforma constitucional de la CERIAJUS.

favor de su cónyuge y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

3. Aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del ejercicio de la docencia universitaria en materias jurídicas;
4. Ejercer el comercio o la industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa;
5. Variar el domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vacaciones, licencia o autorización del órgano competente;
6. Ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto judicial con las excepciones de ley;
7. Comprar o adquirir bajo cualquier título para sí, para su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por intermedio de terceros, los bienes que se litiguen en los juicios que él conozca, y aunque hayan dejado de ser litigiosos durante los cuatro años siguientes a que dejaran de serlo. Todo acto que contravenga esta prohibición es nulo, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a ley;
8. Conocer un proceso cuando él, su cónyuge o tenga o hubiera tenido interés o relación laboral con alguna de las partes. En este último caso, el impedimento se extiende hasta un año después de producido el cese de la relación laboral o la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual. Se exceptúa de la presente prohibición, los procesos en los que fuera parte el Poder Judicial;
9. Adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban conocer;
10. Revelar a terceros o a los medios de comunicación, salvo autorización expresa, cualquier información sobre los procesos que conocen; y,
11. Las demás señaladas por ley.

#### **Artículo 216°.- IMPEDIMENTOS**

Están impedidos para postular al cargo judicial mientras ejerzan función pública y hasta 6 (seis) meses después de haber cesado en el cargo:

1. El Presidente de la República y los Vicepresidentes;

2. Los Congresistas, Presidentes Regionales, Alcaldes, Regidores y demás funcionarios cuyos cargos provengan de elección popular;
3. Los Ministros de Estado, los Viceministros y Directores Generales de los ministerios;
4. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;
5. El Contralor General de la República y el Sub-Contralor;
6. Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); y,
7. También están impedidos para ejercer cargo judicial quienes padezcan de discapacidad física o mental que les imposibilite cumplir las funciones propias del Juez.

#### **Artículo 217°.- INCOMPATIBILIDADES**

Las incompatibilidades son el conjunto de disposiciones limitativas del ejercicio laboral dentro del Poder Judicial en razón del cargo y el parentesco.

Hay incompatibilidad por razón de matrimonio, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad:

1. Entre los jueces de la Corte Suprema y entre éstos y los jueces superiores y demás jueces de la república; así como personal auxiliar jurisdiccional perteneciente a la propia Corte Suprema y a los Distritos Judiciales de la república;
2. En el mismo Distrito Judicial entre vocales superiores, y entre éstos y los jueces de cualquier grado y personal auxiliar jurisdiccional de todas las instancias;

Las incompatibilidades por parentesco enunciadas comprenden al personal administrativo entre sí, así como en relación a los jueces y al personal que realiza actividades de apoyo a la función jurisdiccional.

### **CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES**

#### **Artículo 218°.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL<sup>15</sup>.**

Los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los daños y perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de la materia.

---

<sup>15</sup> Esta disposición comprende la prevista en el artículo 192° del Texto Único Ordenado de la LOPJ, conforme a la propuesta del Plan Nacional de la CERIAJUS, véase la página 578 del citado documento.

Son igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Las acciones derivadas de estas responsabilidades se rigen por las normas respectivas.

#### **Artículo 219°.- RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA**

Existe responsabilidad disciplinaria en los siguientes casos, siempre que esté relacionada con el ejercicio de sus funciones:

1. Por infracción de los deberes y prohibiciones establecidas en esta Ley;
2. Por incurrir en injuria contra sus pares o los superiores jerárquicos y contra cualquier ciudadano, sea de palabra, por escrito o por medios de comunicación social;
3. Cuando se abusa de las facultades que la ley señala respecto a sus subalternos o las personas que intervienen de cualquier manera en un proceso;
4. Por la práctica de costumbres que menoscaben la respetabilidad e imagen social del cargo;
5. Por no ejercitar control permanente sobre sus auxiliares y subalternos y por no imponer las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique; y,
6. En los demás que señalen las leyes.

#### **Artículo 220°.- ORGANOS SANCIONADORES POR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA**

Las sanciones se aplican por el órgano disciplinario que corresponda conforme a la Constitución Política y a la ley<sup>16</sup>.

#### **Artículo 221°.- QUEJAS E INVESTIGACIONES**

Las quejas e investigaciones de carácter disciplinario puede iniciarse por queja del perjudicado, su representante o de oficio, conforme a la Constitución Política<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Es bueno tener presente que de acuerdo al Plan Nacional de la CERIAJUS, las normas relativas al régimen disciplinario de los jueces, deben ser reformadas “con la finalidad de eliminar cualquier mención a los órganos encargados del control disciplinario, puesto que ésta función estará constitucionalmente encargada al CNM. En este sentido –advirtió el Plan- debe eliminarse lo dispuesto en el artículo 213° de la LOPJ que permite a los órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores revisar supuestos de responsabilidad disciplinaria” Véase página 574 del Plan Nacional.

<sup>17</sup> La propuesta de Reforma Constitucional formulada por la CERIAJUS precisa que: “Compete al CNM investigar en forma permanente la conducta funcional e idónea de los jueces y fiscales de todos los niveles y aplicarles las sanciones a que haya lugar, garantizándoles el debido proceso; y que las decisiones sean sustentadas en elementos objetivos”. Véase artículo 154 inciso 3) del proyecto.



Las quejas de carácter disciplinario formuladas contra los Jueces, se tramitan y resuelven por el órgano disciplinario que corresponda conforme a la Constitución Política y la ley. Se inician de oficio por el órgano de control o a instancia de parte, en la forma señalada por la ley.

En todos los casos debe correrse traslado de la queja y oírse al Juez quejado, antes de cualquier pronunciamiento o resolución de fondo, del órgano disciplinario competente.

Es nula toda resolución que infrinja la garantía de defensa y del debido proceso.

#### **Artículo 222°.- PLAZO PARA INTERPONER QUEJA ADMINISTRATIVA**

El plazo para interponer la queja administrativa contra los jueces caduca a los noventa días útiles de haber tomado conocimiento del hecho. Interpuesta la queja, prescribe, de oficio a los dos años.

Cumplida la sanción impuesta, el Juez sancionado queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la misma. Salvo el caso de destitución o separación.

#### **Artículo 223°.- QUEJA MALICIOSA**

En caso de declararse infundada, improcedente o inadmisibles la queja, por ser manifiestamente maliciosa, quien la formuló solidariamente con el abogado que patrocinó la queja, paga una multa no mayor al 10% del haber total del Juez quejado, sin perjuicio de las otras responsabilidades a que hubiere lugar. El hecho será puesto en conocimiento del Colegio de Abogados respectivo.

### **CAPITULO V SANCIONES DISCIPLINARIAS**

#### **Artículo 224°.- OBJETO**

Son objeto del control por la función disciplinaria aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en la Ley. Contra todas las medidas disciplinarias impuestas proceden los recursos que correspondan según las garantías del debido proceso.

#### **Artículo 225°.- TIPOS**

Los tipos de faltas son los siguientes:

1. Leves;
2. Graves; y
3. Muy graves.

**Artículo 226°.- FALTAS LEVES**

- a. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta ley;
- b. La falta de respeto debida hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, de la Defensa de Oficio y abogados;
- c. La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del organismo judicial, siempre que no impliquen una falta de mayor gravedad;
- d. No llevar los cursos impartidos por la Academia de la Magistratura dentro del programa de capacitación regular;
- e. La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de sus cargo, establecidos en esta ley, cuando no constituyan falta grave o muy grave; y,
- f. Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

**Artículo 227°.- FALTAS GRAVES**

- a. Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo judicial;
- b. Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones, por motivo no señalado en la ley procesal de la materia;
- c. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva;
- d. La conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo;
- e. La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional;
- f. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública;
- g. Ausencia injustificada a sus labores hasta 2 (dos) días consecutivos;
- h. Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes, o en cualquier otra condición anormal análoga;
- i. Delegar a los auxiliares jurisdiccionales la realización de diligencias que por ley o por la naturaleza de las circunstancias requieren su presencia;
- j. No llevar los cursos que la Academia de la Magistratura imparte y que le

- hayan sido asignados como resultado de la evaluación periódica del Juez;
- k. La tercera falta leve que se cometa durante los dos años posteriores a la comisión de la primera;
  - l. Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

**Artículo 228°.- FALTAS MUY GRAVES**

- a. Desempeñar, simultáneamente a la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados, salvo lo previsto en la Constitución Política para la docencia universitaria;
- b. Ausentarse injustificadamente de sus labores por más de 2 (dos) días.
- c. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional;
- d. Ocultar alguna prohibición que les sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobreviviente;
- e. Intentar el ejercicio de influencia ante otros jueces o jueces en causas que tramitan en el marco de sus respectivas competencia;
- f. Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior por razón de competencia en la interpretación o aplicación de la Ley, salvo cuando se halle en conocimiento de la causa, a través de los recursos legalmente establecidos;
- g. Cometer cualquier acto de coacción o acoso, especialmente aquellos de índole sexual o laboral;
- h. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especies a las partes o a los abogados que actúen en casos sujetos a su conocimiento;
- i. Establecer relaciones de carácter extra-jurídico con terceros, con otros jueces o con auxiliares jurisdiccionales, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional;
- j. La tercera falta grave que se cometa durante los dos años posteriores a la comisión de la primera;
- k. Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito comprometa gravemente la dignidad del cargo.

1. Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

#### **Artículo 229°.- SANCIONES**

Las sanciones son consecuencia de la comprobación de las faltas cometidas. Deben estar previstas legalmente y ser impuestas previo proceso administrativo, con las garantías del debido proceso, por el órgano que corresponda, según la Constitución y la ley.

Las sanciones serán anotadas en el registro personal del Juez.

#### **Artículo 230°.- SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS**

Las sanciones y medidas disciplinarias aplicables a los jueces son:

1. Amonestación;
2. Multa;
3. Suspensión;
4. Destitución.

#### **Artículo 231°.- PROPORCIONALIDAD ENTRE TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES**

1. Las faltas leves son sancionadas, en su primera comisión, con amonestación, y, en su segunda comisión, con multa; la comisión de la tercera falta leve constituye una falta grave;
2. Las faltas graves se sancionan con suspensión;
3. Las faltas muy graves se sancionan con suspensión y destitución; la tercera falta grave cometida se sanciona con destitución. El Juez destituido no podrá reingresar a la carrera judicial.

Las faltas son acumulables en el período de dos años contados desde que se produjo la primera.

### **TITULO IV TRASLADOS Y PERMUTAS**

#### **Artículo 232°.- TRASLADOS**

Los jueces podrán ser trasladados, temporal o permanentemente, dentro de un mismo Distrito Judicial u otro diferente, y a un cargo de la misma categoría o grado, sólo por las causas siguientes:

1. Por razones de servicio, previa audiencia y aceptación del Juez y compensación económica de los gastos del traslado;

2. Por enfermedad grave sobreviniente, debidamente comprobada y previa evaluación, a solicitud del propio Juez; y
3. Por causa justificada y siempre que el traslado no sea inconveniente para el servicio de impartición de justicia.

El traslado de jueces de distintos distritos judiciales requiere resolución motivada del órgano de gobierno del Poder Judicial. El traslado de jueces en un mismo distrito judicial, requiere de resolución motivada del órgano de gobierno distrital correspondiente.

#### **Artículo 233°.- PERMUTAS**

Las permutas proceden a solicitud de los jueces interesados, siempre que tengan el mismo grado o competencia, aunque pertenezcan a distritos judiciales distintos.

Corresponde al órgano de gobierno del Poder Judicial autorizar o denegar mediante resolución motivada las permutas de jueces que pertenezcan a distintos distritos judiciales. Las permutas de jueces en un mismo distrito judicial serán competencia del órgano de gobierno distrital correspondiente.

### **TITULO V PERMISOS Y LICENCIAS**

#### **Artículo 234°.- PERMISOS**

Los jueces tienen derecho a solicitar permisos para atender asuntos personales hasta por 5 (cinco) días hábiles en un año, los que podrán ser utilizados en uno o diversos momentos hasta completar el plazo máximo de días de permiso.

Corresponde a los Presidentes de Corte conceder el permiso siempre que no perjudique el servicio de justicia o se pretenda con aquel eludir una decisión o actuación importante en un proceso determinado que esté bajo conocimiento del solicitante. Si se comprueba ésta última circunstancia, se abrirá investigación disciplinaria.

Durante el lapso del permiso, el Juez percibirá el total de sus haberes, excepto los gastos operativos, los cuales serán reducidos en forma proporcional a los días efectivamente laborados.

#### **Artículo 235°.- LICENCIAS**

Los Jueces tienen derecho a licencia cuando existe justa causa para ello. El Órgano de Gobierno del Poder Judicial concede las licencias a los jueces de la Corte Suprema y los Presidentes de Corte Superior a los demás jueces, órganos

jurisdiccionales con competencia nacional u otros que abarquen más de un Distrito Judicial.

El órgano de gobierno distrital y donde no exista, la Sala Plena, de la respectiva Corte Superior debe dar aviso al Presidente del Poder Judicial de las licencias que conceda.

#### **Artículo 236.- LICENCIAS CON GOCE DE HABER**

Las licencias con goce de haber sólo pueden ser concedidas en los siguientes casos:

1. Por enfermedad comprobada, hasta por un año;
2. Por maternidad de conformidad con las normas legales vigentes;
3. Por asistencia a eventos nacionales organizados o auspiciados por algún órgano perteneciente o vinculado al Sistema de Administración de Justicia, o a eventos internacionales, a cursos de perfeccionamiento o becas de su especialidad, por el tiempo que abarcan las mismas no pudiendo exceder de dos años, previa autorización del órgano competente, con cargo a informar documentadamente al término de los mismos, quedando obligados a permanecer en el Poder Judicial por lo menos el doble del tiempo requerido con tal fin o a rembolsar el íntegro de los haberes percibidos más intereses y demás gastos irrogados; y,
4. Por duelo, en caso de fallecimiento del cónyuge, padres o hijos hasta por 5 (cinco) días.

#### **Artículo 237°.- CÓMPUTO DEL PERÍODO DE LICENCIA**

En los casos de enfermedad, duelo o accidente previstos en la presente ley, el período de licencia se computa desde que ocurre el acontecimiento que justifica la solicitud, o desde la fecha en que el solicitante toma conocimiento de lo sucedido.

En los demás casos, el cómputo de la licencia concedida empieza desde el día de la notificación de la resolución autoritativa o la fecha en que el solicitante se haya ausentado del despacho.

#### **Artículo 238°.- AUSENCIA INMEDIATA SIN LICENCIA**

El que por motivos justificados tenga que ausentarse de inmediato de la ciudad sede de su cargo, sin tiempo suficiente para obtener licencia, puede hacerlo dando cuenta por el medio más rápido a la Corte de la que depende, la cual, previa la debida comprobación, retrotraerá la licencia al día de la ausencia. Si la causa

alegada no es suficiente para justificarla, se aplica la correspondiente medida disciplinaria, sin perjuicio del correspondiente descuento.

## **TITULO VI**

### **JUECES DE SUPLENCIA Y PROVISIONALES**

#### **Artículo 239°.- JUECES DE SUPLENCIA**

Producida una plaza vacante para ser Juez titular del primer o segundo nivel, con posterioridad a la realización del concurso de selección, ésta debe ser ocupada por el Juez de suplencia o por el candidato apto en reserva que tenga la mejor ubicación en el cuadro de méritos con el que egresaron de la Academia

Para el caso de los dos últimos niveles, se tendrá en cuenta la ubicación en el cuadro de méritos conformado con los resultados del concurso de selección en el que participaron.

Cuando se genere una vacante temporal en los niveles de Juez supremo y superior, ésta será cubierta por el Juez de suplencia del mismo nivel. Sólo cuando no exista Juez de suplencia la vacante será cubierta por un Juez provisional.

#### **Artículo 240.- JUECES PROVISIONALES**

Cuando se genere una vacante definitiva y ésta no pueda ser cubierta por el candidato apto que se encuentra en reserva o por el Juez de suplencia que corresponda, según el orden de méritos en que uno y otro se encuentren, será cubierta por el Juez del nivel inferior inmediato, salvo que la plaza corresponda al segundo nivel (jueces mixtos o especializados), caso en el cual se procederá a una convocatoria a ascenso.

Las plazas vacantes que se generen por el ascenso temporal de los jueces provisionales, deben ser cubiertas, a su vez, por los jueces de suplencia del mismo nivel o, en su defecto, por un Juez de grado inferior que asumirá el encargo según las reglas previstas para el caso de la provisionalidad.

## **TITULO VII EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**

### **CAPÍTULO I DESEMPEÑO DE LOS JUECES**

#### **Artículo 241°.- FINALIDAD Y CAMPOS DE EVALUACIÓN**

La evaluación del desempeño de los jueces en el cargo, tiene por finalidad conocer su rendimiento y méritos, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la administración de justicia.

La evaluación del desempeño medirá la eficacia y eficiencia en el desempeño de la función, para lo cual se considerarán en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Eficiencia en la organización del trabajo;
- b. La calidad en la gestión del proceso;
- c. La calidad de las decisiones o resoluciones finales emitidas por el Juez;
- d. El desarrollo académico durante el ejercicio de la función; y,
- e. Publicaciones jurídicas y de temas afines.

#### **Artículo 241°-A.- ÓRGANO ADMINISTRADOR Y PERIODICIDAD**

El Consejo Nacional de la Magistratura, efectuará la evaluación de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, cada 4 (cuatro) años.

La evaluación de los Jueces de las Cortes Superiores, de los Jueces Especializados o Mixtos y Jueces de Paz Letrados, estará a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura y se realizará cada 2 (dos) años.

#### **Artículo 241°-B.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EVALUACIÓN**

La evaluación del desempeño se sustenta en los siguientes principios:

1. Igualdad de condiciones: Los jueces sin distinción deben ser evaluados bajo los mismos criterios.
2. Transparencia: Los jueces deben conocer oportunamente los períodos de evaluación.
3. Objetividad: Las evaluaciones deben efectuarse con objetividad y en estricta sujeción a los criterios de evaluación, que establezca el órgano de gobierno del Poder Judicial.
4. Medición: Las evaluaciones deben ser posibles de medir a través de variables previamente definidas.



5. Comprobación: Los resultados de las evaluaciones deben ser posibles de verificar tanto por el funcionario evaluado como por las autoridades a cargo de la evaluación.

#### **Artículo 241°-C.- ESCALA DE RENDIMIENTO**

La escala de rendimiento satisfactorio de los jueces será elaborada por el órgano de gobierno del Poder Judicial, y se publicará en el diario oficial.

La evaluación de desempeño, así como las promociones para ocupar provisionalmente un cargo superior, se efectuarán con estricta sujeción a la escala establecida.

#### **Artículo 241°-D.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN**

El resultado de la evaluación será notificado al evaluado y se registrará en el expediente personal del Juez. Servirá para las promociones, los ascensos, traslados, reconocimientos y estímulos.

El resultado no satisfactorio de la evaluación de desempeño, determina que el Consejo Nacional de la Magistratura, pueda adoptar, de manera independiente o concurrente, según el caso, las siguientes medidas:

1. La obligatoriedad para el evaluado de concurrir a los cursos de formación o actualización a cargo de la Academia de la Magistratura, que determine el Consejo de la Magistratura
2. La imposibilidad para el evaluado de ascender u ocupar provisionalmente un cargo superior.

Si persiste la evaluación negativa en un período de cuatro años, el Consejo Nacional de la Magistratura, previa audiencia al evaluado, puede determinar la destitución del Juez del cargo.

#### **Artículo 241°- E.- RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA**

Si como consecuencia de la evaluación de desempeño, se detectasen indicios de haberse cometido una falta disciplinaria, se dará cuenta al órgano de control competente para la adopción de las medidas correspondientes.

## **CAPITULO II**

### **CUADRO DE MERITOS Y ANTIGÜEDAD**

#### **Artículo 242°.- CUADRO DE MÉRITOS**

Para la formulación del Cuadro de Méritos se toman en consideración los factores siguientes:

1. Los resultados obtenidos en los procesos de Evaluación al Desempeño de la función Jurisdiccional.
2. La oportuna y correcta tramitación y resolución de los procesos a su cargo;
3. Sanciones y medidas disciplinarias;
4. Grados académicos y estudios de perfeccionamiento debidamente acreditados;
5. Publicaciones y otros trabajos e investigaciones de índole jurídica; y,
6. Distinciones y condecoraciones.

#### **Artículo 243°.- CUADRO DE ANTIGÜEDAD**

El cuadro de antigüedad contiene la relación de Jueces de cada grado, ordenados de acuerdo a la fecha de ingreso en la Carrera Judicial.

El cómputo se hace a partir de la fecha de juramento al cargo.

La precedencia de los Jueces depende de la antigüedad en el grado al que pertenecen. Si dos o más Jueces han tomado posesión del cargo en la misma fecha, precede el que haya desempeñado durante mayor tiempo el cargo judicial anterior como titular o provisional, en el mismo cargo. En su defecto, el que tenga más tiempo como Abogado.

#### **Artículo 243°-A.- CONSERVACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD**

El Juez que pase de un cargo a otro, manteniendo el mismo grado, conserva en el nuevo cargo la antigüedad que le corresponde, de acuerdo con el artículo precedente.

#### **Artículo 243°-B.- ANTIGÜEDAD DEL REINGRESANTE**

El Juez cesante que reingrese al servicio computa su antigüedad, agregando a su nuevo tiempo de servicios, el que tenía al tiempo de cesar.

### **TITULO VIII HONORES, CONDECORACIONES E INSIGNIAS**

#### **Artículo 244°.- HONORES POR FALLECIMIENTO**

En caso de fallecimiento, al Presidente de la Corte Suprema se le tributan los honores que correspondan al Presidente del Congreso de la República; a los demás jueces los que les correspondan según el reglamento.

**Artículo 245°.-MÉRITOS EXCEPCIONALES. ORDEN PERUANA DE LA JUSTICIA**

Los méritos excepcionales de los Jueces son premiados con la condecoración de la Orden Peruana de la Justicia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. Puede conferirse igual condecoración a personas que sin ser jueces hayan prestado servicios relevantes a favor de la justicia.

**Artículo 245°-A.- RECONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA FUNCIONAL**

La conducta funcional y el rendimiento de los Jueces será objeto de reconocimiento por el Poder Judicial. La resolución de reconocimiento felicita al Juez y se remite al órgano de control para los efectos de Ley.

**Artículo 245°-B.- INSIGNIAS**

Las insignia de uso exclusivo de los jueces son las siguientes:

1. Los jueces de la Corte Suprema llevan pendiente del cuello una cinta de bicolor nacional de cinco centímetros de ancho, con una medalla dorada en forma elíptica, de cinco centímetros en su diámetro mayor, con la figura a medio relieve de la Justicia;
2. Los jueces de las Cortes Superiores usan la misma insignia con una cinta de color rojo;
3. Los jueces especializados o mixtos usan la misma insignia con una cinta blanca; y,
4. Los jueces de paz letrados usan medalla igual, pendiente de una cinta de color blanca en la solapa izquierda.

**TITULO IX**  
**TERMINACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL**

**Artículo 246°.- TERMINACIÓN DEL CARGO**

Termina el cargo de Juez:

1. Por muerte;
2. Por cesantía o jubilación;
3. Por renuncia, desde que es aceptada;
4. Por destitución dictada en el correspondiente procedimiento;
5. Por desaprobación de la evaluación periódica del desempeño;
6. Por incompatibilidad sobreviniente;

7. Por causa física o mental permanente, debidamente comprobada, que impida el ejercicio de la función jurisdiccional;
8. Por haber sido condenado por delito doloso o por tener sentencia con reserva del fallo condenatorio; y,
9. Por alcanzar la edad límite establecida por ley.

## **TÍTULO XI**

### **SUSPENSION DEL DESPACHO**

**Artículo 247°.-** No hay Despacho Judicial los días sábados, domingos y feriados no laborables. Asimismo por inicio del Año Judicial y por el día del Juez.

**Artículo 248°.-** Son días de duelo judicial, sin suspensión del despacho judicial, los del sepelio de los siguientes Jueces en ejercicio:

1. Del presidente de la Corte Suprema, en toda la República;
2. De los Vocales Supremos, en la Capital de la República;
3. De los miembros de las Cortes Superiores, en la provincia sede de la Corte o Sala;
4. De los Jueces Especializados o Mixtos, en la Provincia respectiva;
5. El Órgano de gobierno del Poder Judicial, norma el duelo que corresponde a los demás Jueces y servidores del Poder Judicial; y,
6. En los casos de fallecimiento de Jueces en actividad, jubilados o cesantes se iza a media asta el Pabellón Nacional el día de las exequias, en los locales que corresponda, considerándose la fecha como duelo judicial laborable, sin perjuicio de los honores señalados por el Reglamento.

## **DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA:** Las disposiciones previstas en el artículo primero de esta Ley entrarán en vigencia al año judicial siguiente al de su aplicación.

**SEGUNDA:** Dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley de la Carrera Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura continuará realizando las evaluaciones a fin de decidir sobre la permanencia de los Jueces. Sin embargo, los procesos de ratificación deberán contemplar las siguientes consideraciones:

- a) La evaluación de los diferentes aspectos del desempeño del Juez, las decisiones del Consejo y la ejecución de las mismas deberán realizarse con absoluto respeto de los principios propios del debido proceso;
- b) La evaluación que debe realizarse para efectos de decidir sobre la ratificación, comprende únicamente los siguientes aspectos:
  - Evaluación de la eficacia del desempeño del Juez, medida a través de la producción del Juez en relación con la carga procesal que asume el tribunal;
  - Evaluación de la calidad de las decisiones o resoluciones finales que emite el Juez. Para estos efectos, se evaluarán las cinco resoluciones que el mismo Juez presente; también se considerará la resolución que cualquier ciudadano proponga para la evaluación. En todo caso, el número de resoluciones a evaluar no debe ser mayor a ocho;
  - Evaluación del desarrollo profesional y académica del Juez durante los últimos siete años. Se considerarán los estudios realizados y las publicaciones.
- c) La resolución que decide sobre la permanencia del Juez
- d) Debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican.

**TERCERA.-** En tanto no se implemente el nuevo sistema de ingreso a la carrera judicial, se aplicarán las siguientes disposiciones:

- a) Todos los Jueces que a la fecha se desempeñen como suplentes permanecerán en el cargo por un término de 2 año. Al cabo de ese término, tendrán derecho a una evaluación especial para efectos de determinar su permanencia en el cargo conforme a los requisitos previstos en la presente ley.
- b) En tanto se establezca el sistema de evaluación periódica y el cuadro de méritos respectivo de todos los jueces, la designación para ocupar un cargo judicial en calidad de provisional se realizará de acuerdo al cuadro de méritos transitorio que deberá considerar los siguientes aspectos:
  - El desarrollo profesional; es decir, el nivel de estudios, el número y la calidad de las publicaciones jurídicas y no jurídicas en materias afines;
  - La producción del Juez en relación con la carga procesal que asume;
  - Los antecedentes de sanciones disciplinarias que presente; y,
  - Los resultados de la evaluación de la calidad de las decisiones o resoluciones finales que emite el Juez con los mismos requisitos exigidos para

las ratificaciones en este régimen transitorio. La elaboración de este cuadro de méritos transitorio está a cargo de la Gerencia de Personal y Escalafón de la Gerencia General del Poder Judicial.

Lima, 22 de febrero del 2005

FAUSTO ALVARADO DODERO  
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA

YONHY LESCANO ANCIETA  
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

JOSÉ LUIS DELGADO NUÑEZ DEL ARCO  
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

JORGE SAMUEL CHÁVEZ SIBINA  
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

ROSA MADELEINE FLORIÁN CEDRÓN  
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

EDUARDO SALHUANA CAVIDES  
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

MICHAEL MARTINEZ GONZALES  
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

## Anexo II

### **La propuesta del Poder Judicial**

Proyecto de Ley N° 13230/2004-PJ  
Ley orgánica de carrera judicial

Elaborado por la Comisión de Carrera Judicial  
del Poder Judicial y aprobado por la Sala Plena de la  
Corte Suprema de la República





**PROYECTO**  
**LEY ORGÁNICA DE CARRERA JUDICIAL**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El propósito del presente Proyecto de Ley Orgánica es reunir y sistematizar en un solo cuerpo normativo un conjunto de principios y disposiciones destinadas a regular el importante tema de la Carrera Judicial. Ahora bien, la regulación normativa de la carrera judicial es un tema complejo, atendiendo a los diversos aspectos que comprende. No obstante, es posible identificar elementos comunes como son los principios rectores y ejes centrales que permiten diseñar un sistema de carrera, considerándose como tales el proceso de ingreso, ascenso y la terminación en el cargo, además de los requisitos, derechos, deberes, incompatibilidades, prohibiciones, régimen disciplinario, entre otros componentes, todos vinculados entre sí.

En ese entendimiento, la carrera judicial constituye una garantía de independencia del juzgador y de autonomía para la labor jurisdiccional de quienes se encuentran comprendidos en ella, de allí que requiera de un marco normativo apropiado que la dote de la adecuada organicidad. Entre los principales principios y derechos que orientan la carrera judicial en la legislación comparada podemos mencionar la independencia, estabilidad, imparcialidad, inamovilidad, antigüedad en el cargo, mérito, especialidad y profesionalidad.

Punto importante a ser desarrollado dentro de lo concerniente a la carrera judicial es el relativo al ingreso, el que presupone un procedimiento de captación (reclutamiento) de recursos humanos a fin de atraer a candidatos con más vocación para la judicatura, así como capaces e idóneos para el desempeño de la función jurisdiccional. Tras el reclutamiento, se inicia el proceso de evaluación y selección que busca escoger entre los candidatos captados a los más adecuados para ocupar los cargos vacantes en la organización. Este proceso, en el caso concreto de la judicatura, a fin de asegurar su autonomía, debe ser justo, riguroso e imparcial. Los jueces no pueden deber sus cargos, sea de ingreso o ascenso, a

ninguna persona ni institución. Éstos deben responder a su idoneidad ética y capacidad profesional.

Por otro lado, el ascenso se basa en un conjunto de normas que habilitan a los jueces, dentro de su categoría, a postular a cargos de superior jerarquía dentro del escalafón judicial, constituyendo a su vez un derecho de los magistrados. Este proceso se encuentra estrechamente vinculado a la concepción y estructura misma de la carrera judicial, así como a los niveles o las categorías por las que se puede ingresar a ella.

Otro aspecto esencial es consagrar una serie de derechos a favor de quienes integran la judicatura, a los cuales también se les impone los correspondientes deberes. Entre los principales derechos que la legislación comparada reconoce encontramos la estabilidad o inamovilidad en el cargo mientras observen buena conducta y un rendimiento satisfactorio, derecho que constituye garantía de independencia; el descanso vacacional; las licencias, con o sin goce de remuneración sea por enfermedad, estudios de perfeccionamiento y capacitación, matrimonio, fallecimiento de familiares directos o motivos personales; gozar de una remuneración adecuada y justa; capacitación adecuada; la promoción, traslados y ascensos; seguridad social y pensión de jubilación.

Aspecto de vital importancia en el sistema de carrera judicial es la evaluación de desempeño, proceso dinámico de apreciación sistemática del comportamiento de la persona en el cargo que ocupa y que sirve para estimular y juzgar su valor, excelencia y sus cualidades. De allí que la evaluación no se dirige a la persona, sino a su desempeño en el ejercicio de la función que ejerce, y no es por sí misma un fin, sino un instrumento, medio o herramienta para alcanzar diversos objetivos, como mejorar el desempeño futuro y la gestión de los recursos humanos permitiendo el establecimiento de políticas adecuadas de compensación, traslados y ascensos sobre criterios más objetivos, promover incentivos o premios, diseñar estrategias de capacitación y desarrollo de carrera, entre otros.

Así concebida, la evaluación no es un mero mecanismo para la imposición de sanciones u otorgamiento de premios, en función al bajo o alto rendimiento obtenido, sino que constituye un importante método para verificar la eficacia (cumplimiento de los objetivos) y la eficiencia de la organización (cumplir el objetivo al menor costo posible), conocer los obstáculos que impiden alcanzar los objetivos previstos, permitiendo la adopción oportuna de medidas correctivas, así como identificar las mejores prácticas aplicadas en la organización.

En lo concerniente al régimen disciplinario, es bueno tener presente que la garantía de independencia del juzgador y autonomía de la judicatura no se resquebraja con el control respecto del cumplimiento de sus deberes y en consecuencia, la aplicación de sanciones en caso de responsabilidad. De allí que, sin excepción, las diferentes legislaciones prevén un régimen disciplinario que se encuentra vinculado con el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los magistrados.

La responsabilidad disciplinaria nace como consecuencia de la violación de los deberes funcionales que el magistrado asume frente al Estado desde el momento de su nombramiento. Distinta es la responsabilidad civil o penal que le corresponde, en el primer caso frente a las partes, por eventuales errores cometidos en el ejercicio de sus funciones; y, en el segundo caso, por los delitos cometidos en virtud del cargo que ostenta.

Ahora bien, por ningún motivo, la facultad disciplinaria puede ser utilizada como excusa para interferir en la función jurisdiccional que debe realizarse con independencia e imparcialidad. Para tal fin, resulta necesario contar con un régimen disciplinario que además de garantizar a los magistrados un debido procedimiento, establezca previamente y con total claridad las diferentes faltas y las correspondientes sanciones a imponerse según la gravedad de la falta, situación que evitará posibles presiones internas o externas, así como la eventual discrecionalidad del órgano de control.

De otro lado, la terminación del cargo constituye uno de los elementos centrales y etapa final del sistema de carrera judicial, significa una garantía de estabilidad e independencia para quienes la integran, por cuanto conocen, de manera objetiva y previa a su ingreso, las causales que pueden poner fin a su permanencia en el cargo y, por ende, en la carrera. En ese sentido, las causales de culminación del cargo se encuentran relacionadas con la capacidad (física o mental) del magistrado o su conducta funcional (destitución), además de otras causales tales como la renuncia, muerte, jubilación o edad.

En este contexto, el presente Proyecto de Ley Orgánica está compuesto por nueve Títulos, noventa y nueve artículos y veintitrés Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales. Ahora bien, este Proyecto de Ley de Carrera Judicial tiene el carácter de ley orgánica en tanto que, en consonancia con lo que señala el artículo 106° de la Constitución actualmente vigente, regulará todo lo concerniente al estatuto jurídico del juez.

Pasando a presentar entonces de modo muy sucinto el contenido de este proyecto, en el Título I, Disposiciones Generales, se desarrollan el objeto del presen-

te proyecto de ley orgánica, la finalidad de la carrera judicial, su estructura, y los principios que la regulan, consignándose los requisitos exigidos para ser juez de los diferentes órdenes o grados.

El proyecto tiene por objeto reconocer y establecer el conjunto de principios y normas que regulan el ingreso, ejercicio, permanencia, ascenso y terminación de la función pública del juez.

En consonancia con ello, establece como finalidad de la carrera judicial la de garantizar la idoneidad, profesionalización, estabilidad e independencia de los jueces; todo ello en aras de propiciar una mejora en el servicio de impartición de justicia.

Es preocupación principal garantizar a todos los jueces la necesaria independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. De allí que en este proyecto se establezca de modo enfático que aquellos sólo se encuentran sometidos a la Constitución y a la ley, así como prescribiendo que los poderes públicos como los particulares en general tienen la obligación de respetar esta independencia.

También se consagran los principios de imparcialidad y estabilidad en el cargo, bajo las garantías de inamovilidad y permanencia. De igual forma, se prevé que los jueces deben observar la idoneidad propia de su función, y ejercer sus funciones dentro de las pautas propias de razonabilidad y no arbitrariedad.

Por último, los artículos finales de este Título I de Disposiciones Generales señalan los requisitos comunes para ser juez de cualquier orden o grado, así como también los requisitos específicos para ser juez(a) de la Corte Suprema, de la Corte Superior, Especializado o Mixto y de Paz Letrado.

El Título II, Ingreso a la Carrera Judicial, contiene las disposiciones relativas al proceso que comprende la selección, formación y nombramiento de los jueces. Ahora bien, este concepto de ingreso se ha tomado en un sentido muy estricto y restringido, y excluye, en función de las exigencias constitucionales, las nociones de promoción y ascenso.

De acuerdo con lo previsto por la Constitución de 1993, le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, con excepción de aquellos provenientes de elección popular.

En virtud de lo expuesto, el presente proyecto de ley orgánica especifica que el proceso de ingreso a la carrera judicial se inicia con una selección a través de un concurso de méritos y oposición bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura; organismo al que también le corresponde la elaboración del examen de selección y el nombramiento respectivo. Para ello, se tendrá en cuenta los

perfiles de juez previstos por el Poder Judicial y consultará a la Academia de la Magistratura acerca del contenido temático del referido examen de selección.

A la Academia de la Magistratura se le encarga –acorde con nuestro texto constitucional vigente- que los seleccionados, tras el examen de selección, deben seguir el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA), consistente en un curso teórico práctico habilitante para su nombramiento, programa que tendrá una duración mínima de cuatro meses. El Consejo Nacional de la Magistratura podrá exonerar de éste al seleccionado en atención de su reconocida experiencia y trayectoria profesional.

En lo correspondiente a la designación de los jueces, se establece que el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a nombrar a los seleccionados que hayan aprobado el Programa de Formación de Aspirantes. Respecto de aquellos que hayan aprobado el referido programa, pero que no hayan sido nombrados, serán inscritos en el Registro de Suplentes, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, y serán llamados en orden de prelación para cubrir un reemplazo o plaza vacante en calidad de jueces suplentes, pero sin formar parte de la carrera judicial.

Los Derechos, Deberes y Facultades, Prohibiciones, Impedimentos e Incompatibilidades se encuentran contemplados en el Título III.

El proyecto consagra un conjunto de derechos a favor de los jueces, entre ellos, destacan la independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional, estabilidad en el cargo, el traslado o permuta, permisos y licencias, percibir una remuneración equitativa y justa, gozar de la cobertura de un seguro de vida, protección y seguridad de su integridad física, asociación, derechos provisionales, y su permanencia en el cargo mientras observen conducta e idoneidad propias de su función.

Se determinan también las causales por las que los jueces podrían ser trasladados, temporal o permanentemente, dentro de un mismo distrito judicial u otro diferente, y se indican las condiciones para la procedencia de las permutas a solicitud de los jueces interesados. Las resoluciones de traslado así como las que autorizan o deniegan la permuta deben estar motivadas.

En lo referente a los permisos y licencias, se señalan los casos en los cuales los jueces tienen derecho a solicitarlas, el plazo de otorgamiento y el órgano competente para concederlas, incorporándose la perspectiva de género.

Respecto de los deberes de los jueces, el proyecto enuncia el impartir justicia en forma pronta, imparcial, con respeto al debido proceso y observando los plazos

razonables para expedir las resoluciones correspondientes; aplicar la norma jurídica pertinente; guardar reserva sobre los asuntos que por su naturaleza así lo requieran; observar el horario de trabajo establecido; entre otros.

En cuanto se refiere a las facultades, resaltan entre ellas el poner a disposición del Ministerio Público a quienes en su despacho o en el desarrollo de una diligencia judicial los agraven, injurien, coaccionen o amenacen de palabra o promuevan desórdenes; así como solicitar a cualquier persona, autoridad o entidad pública o privada los informes y/o documentos que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los asuntos sometidos a su competencia.

Se consignan igualmente prohibiciones a los jueces, tales como el defender o asesorar, salvo en causa propia, a su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes y hermanos; admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales o procedimientos administrativos; ausentarse injustificadamente de sus despacho, entre otras.

El Título IV prevé la creación de una Comisión de Carrera Judicial como instancia encargada de la administración de la carrera judicial, estableciéndose su composición, funciones y atribuciones.

Dentro de un Estado Constitucional que se precie de serlo, no sería coherente establecer un sistema de carrera judicial que no contemplara el control de idoneidad de la función del juez. Ahora bien, este control de idoneidad puede ser llevado a cabo a través de un órgano externo al Poder Judicial (como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura) o de uno interno (como va a ser el caso de la Comisión de Carrera Judicial descrita en el Título IV). Por otro lado, el hecho de que la Comisión de Carrera Judicial sea una instancia al interior del Poder Judicial no significa que se vea limitada o condicionada en el desarrollo de sus funciones con independencia e imparcialidad.

En virtud de lo inmediatamente expuesto, la Evaluación de Desempeño está contemplada en el Título V, y tiene por finalidad conocer el rendimiento y méritos de los jueces, detectar las necesidades de capacitación y recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia. Se establece el órgano administrador y la periodicidad de esta evaluación, regulándose los criterios que deben regirla y precisando las consecuencias de su resultado.

El Título VI desarrolla lo concerniente al Régimen Disciplinario, cuya finalidad es garantizar que los jueces desempeñen sus deberes y responsabilidades en forma honesta y eficiente. Así mismo, se determinan las faltas, estableciéndose las sanciones y el procedimiento a seguir. Las faltas se clasifican en leves, graves

y muy graves, en tanto que las sanciones a aplicar en función de ellas son las de amonestación, multa, suspensión o destitución.

Lo relativo a los jueces provisionales y suplentes está regulado en el Título VII, estableciendo su carácter temporal, remuneración y requisitos para su designación.

Las causales de Terminación de la Carrera Judicial están consignadas en el Título VIII; y entre ellas se prevén el fallecimiento, cesantía o jubilación, renuncia, destitución por medida disciplinaria, separación del cargo, incapacidad física o mental permanente, incompatibilidad sobreviviente, pérdida de la nacionalidad peruana, al cumplir los setenta y cinco años de edad. Asimismo, se detallan las causales para el caso de la separación del cargo.

Finalmente, el Título IX contiene las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, que proponen los plazos para elaborar y aprobar los distintos reglamentos del presente proyecto de ley, la conformación e instalación de la Comisión de Carrera Judicial, así como las diferentes modificaciones legales a las normas actualmente vigentes.

#### **EFFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

El presente proyecto de ley orgánica implica la regulación y sistematización en un texto integral de todos los aspectos concernientes a la carrera judicial, tales como los principios y normas que regulan el ingreso, ejercicio, permanencia, ascenso y terminación de la función del juez.

En tal virtud, este proyecto de Ley Orgánica de Carrera Judicial deroga normas específicas del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en especial, sus Secciones Cuarta y Quinta, correspondientes al régimen de los magistrados y a la carrera judicial, respectivamente. En igual sentido, deroga las disposiciones de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, concernientes a la selección y nombramiento de los jueces.

#### **ANÁLISIS COSTO BENEFICIO**

El presente proyecto de Ley Orgánica de Carrera Judicial no irroga mayores gastos al tesoro público que los ya existentes, a excepción de los pagos de remuneraciones de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial, pues no reconoce derechos y beneficios de carácter económico distintos de aquellos actualmente previstos por la normatividad vigente.

Por otro lado, es conveniente resaltar la gran importancia que reportará este proyecto de ley orgánica, en el sentido de que contiene y sistematiza en un solo cuerpo normativo todas las previsiones correspondientes a los distintos temas propios de la carrera judicial.

## **PROYECTO LEY ORGÁNICA DE CARRERA JUDICIAL**

### **TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Artículo 1°.- Objeto de la ley**

La presente ley tiene por objeto reconocer y establecer el conjunto de principios y las normas que regulan el ingreso, ejercicio, permanencia, ascenso y terminación de la función pública de juez.

#### **Artículo 2°.- Finalidad de la Carrera Judicial**

La Carrera Judicial tiene por finalidad garantizar la idoneidad, profesionalización, estabilidad e independencia de los jueces, contribuyendo al mejoramiento del servicio de impartición de justicia.

#### **Artículo 3°.- Principio de independencia**

- 3.1. Los jueces son independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional. Sólo se encuentran sometidos a la Constitución y la ley. Los poderes públicos y todos los ciudadanos sin excepción, están obligados a respetar la independencia de los jueces.
- 3.2. Los jueces desempeñan por igual la potestad jurisdiccional que la Constitución les confiere, aunque con competencia funcional distinta, quedando sus superiores únicamente habilitados a revisar sus decisiones en los casos que procedan los medios impugnatorios o los supuestos de consulta previstos por ley.

#### **Artículo 4°.- Principio de imparcialidad**

Los jueces deberán resolver los asuntos que conozcan en ejercicio de sus funciones con absoluta imparcialidad. La imparcialidad ha de ser real, efectiva y evidente para los justiciables vinculados al proceso particular como para la ciudadanía en general.



#### **Artículo 5°.- Principio de estabilidad**

Los jueces gozan de estabilidad en el desempeño de sus cargos bajo las garantías de inamovilidad y permanencia. En consecuencia, sólo podrán ser trasladados, suspendidos, separados o destituidos en el ejercicio de sus funciones por razones administrativas y/o disciplinarias y mediante el procedimiento que determine la ley.

#### **Artículo 6°.- Idoneidad en el ejercicio de la función**

Los jueces deben observar la idoneidad propia de la función, procurando un rendimiento satisfactorio en el ejercicio de sus labores, contribuyendo a una pronta y eficaz impartición de justicia.

#### **Artículo 7°.- Responsabilidad de los jueces**

El juez en el ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra sometido a la responsabilidad penal, civil y administrativa, de acuerdo a las normas correspondientes. Por lo tanto, dicha función no puede ser desempeñada con arbitrariedad o irrazonabilidad.

#### **Artículo 8°.- Estructura**

- 8.1. Forman parte de la carrera judicial los jueces que acceden a ella conforme lo previsto por la Constitución y la presente ley.
- 8.2. La carrera judicial comprende:
  - a. Jueces de la Corte Suprema de Justicia;
  - b. Jueces de las Cortes Superiores;
  - c. Jueces Especializados y Mixtos; y,
  - d. Jueces de Paz Letrados.
- 8.3. Los órganos jurisdiccionales que se establezcan por razones de competencia funcional no generan una nueva estructura en la carrera judicial.
- 8.4. La Justicia de Paz se rige por sus normas especiales.

#### **Artículo 9°.- Requisitos comunes para ser juez(a)**

Son requisitos generales para ser juez(a) en cualquiera de los órdenes o grados los siguientes:

- a. Ser peruano(a) de nacimiento;
- b. Ser ciudadano(a) en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;

- c. Tener título de abogado expedido conforme a ley y reconocido por la Asamblea Nacional de Rectores, o revalidado de acuerdo a ley y a los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano;
- d. No estar inhabilitado(a) o sancionado(a) por falta grave por las instancias constitucional o legalmente competentes para ejercer ese tipo de atribuciones;
- e. No poseer discapacidad física o mental debidamente acreditada que haga imposible el normal ejercicio de la función a su cargo;
- f. No haber sido condenado(a), ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva del fallo condenatorio, por delito doloso.
- g. No haber sido declarado(a) en quiebra conforme a la ley de la materia;
- h. No haber sido destituido(a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni despedido(a) de cualquier otra dependencia de la Administración Pública o de empresas estatales o de la actividad privada por falta grave;
- i. No incurrir en alguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley.

**Artículo 10°.- Requisitos específicos para ser juez(a) de la Corte Suprema**

Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 9° de la presente ley, para ser juez(a) de la Corte Suprema de Justicia se exigirá al aspirante no ser menor de 45 (cuarenta y cinco) años y haberse desempeñado como Juez Superior Titular, Fiscal Adjunto Supremo Titular o Fiscal Superior Titular durante diez años, o haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

**Artículo 11°.- Requisitos para ser juez(a) de la Corte Superior**

Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 9° de la presente ley, para ser juez(a) de la Corte Superior de Justicia, se exigirá al aspirante no ser menor de 32 (treinta y dos) años y haberse desempeñado como Juez Especializado o Mixto Titular, Fiscal Superior Adjunto Titular o Fiscal Provincial Titular durante cinco años o haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria en materia jurídica durante diez años.

**Artículo 12°.- Requisitos para ser juez(a) especializado o mixto**

Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 9° de la presente ley, para ser juez(a) especializado o mixto, se exigirá al aspirante no ser menor de 28 (veintiocho) años y haberse desempeñado como Juez de Paz Letrado Titular o Fiscal Adjunto Provincial Titular durante dos años, haber sido Secretario o Re-

lador Titular de Sala durante tres años, o haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria en materia jurídica durante siete años.

**Artículo 13°.- Requisitos para ser juez (a) de Paz Letrado**

Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 9° de la presente ley, para ser juez(a) de Paz Letrado, se exigirá al aspirante no ser menor de 25 (veinticinco) años y haberse desempeñado como Secretario o Relator Titular de Sala por dos años, haber sido Secretario de Juzgado por tres años, o haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria durante cinco años.

**TÍTULO II**  
**INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL**

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSICIÓN GENERAL**

**Artículo 14°.- Ingreso a la carrera judicial**

- 14.1 El ingreso a la carrera judicial es consecuencia de un proceso de selección y formación que culmina con la juramentación como Juez de Paz Letrado, o Juez Especializado, o Juez Mixto, ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
- 14.2 Los cargos de Juez Especializado o Mixto, Juez de Corte Superior o Juez de la Corte Suprema de Justicia serán cubiertos previo concurso público de méritos y oposición convocado y efectuado por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo deberá tener en cuenta el cuadro de méritos y antigüedad elaborado por el Poder Judicial como un criterio relevante de evaluación para efectos del nombramiento.
- 14.3 En todo caso, hasta un 50% (cincuenta por ciento) de las plazas vacantes de la Corte Superior o de la Corte Suprema podrán ser cubiertas por quienes ya se encuentran en la carrera judicial directamente por concurso público de oposición y méritos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura.

## **CAPÍTULO II**

### **SELECCIÓN**

#### **Artículo 15°.- Examen de selección**

- 15.1 El proceso de ingreso a la carrera judicial se inicia con una selección mediante concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura.
- 15.2 Es obligación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República comunicar al Consejo Nacional de la Magistratura la existencia de plaza vacante, la que deberá ser cubierta mediante el concurso respectivo. La comunicación debe efectuarse en un plazo no mayor de 30 (treinta) días de producida la vacante.

#### **Artículo 16°.- Elaboración del examen**

- 16.1. La elaboración del examen de selección será responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura, tomando en cuenta los perfiles generales de juez elaborados y aprobados por el Poder Judicial.
- 16.2. La Academia de la Magistratura será consultada respecto de las áreas temáticas a ser incorporadas en el examen.

#### **Artículo 17°.- Entrevista personal**

Quienes aprueben el proceso de selección sostendrán una entrevista para su evaluación personal por el Consejo Nacional de la Magistratura.

## **CAPÍTULO III**

### **FORMACIÓN**

#### **Artículo 18°.- Programa de Formación de Aspirantes (PROFA)**

- 18.1 Realizado el examen de selección, quienes resulten seleccionados, seguirán en la Academia de la Magistratura el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) consistente en un curso teórico práctico habilitante para el nombramiento cuya finalidad es generar en los seleccionados las habilidades y destrezas requeridas para el ejercicio de la función jurisdiccional.
- 18.2 La administración, desarrollo y gestión del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) será estructurado por la Academia de la Magistratura, en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura, tomando en cuenta las necesidades específicas de la judicatura y los perfiles del juez.

- 18.3 El Programa de Formación de Aspirantes tendrá una duración mínima de 4 (cuatro) meses.
- 18.4 En virtud de la reconocida experiencia y trayectoria profesional del seleccionado, el Consejo Nacional de la Magistratura podrá reducir el plazo o exonerar del Programa de Formación de Aspirantes a que se refiere el presente artículo.

**Artículo 19°.- Lista de méritos**

- 19.1 Concluido el Programa de Formación de Aspirantes a que se refiere el artículo anterior, la Academia de la Magistratura elaborará una lista de méritos de todos los que hayan aprobado el curso, en estricto orden de prelación, y según la calificación final obtenida producto de las evaluaciones practicadas.
- 19.2 La Academia de la Magistratura remitirá, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del Programa de Formación de Aspirantes, la lista de méritos al Consejo Nacional de la Magistratura.

**CAPÍTULO IV**  
**NOMBRAMIENTO**

**Artículo 20°.- Nombramiento**

El Consejo Nacional de la Magistratura, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes de recibida la lista de méritos elaborada por la Academia de la Magistratura, procederá a nombrar a los seleccionados entre los que hayan aprobado el Programa de Formación de Aspirantes. La evaluación realizada por la Academia de la Magistratura será un factor a tomar en cuenta en el nombramiento a efectuar por el Consejo Nacional de la Magistratura.

**Artículo 21°.- Registro de Suplentes**

- 21.1 Los seleccionados, que no están en la carrera judicial, que hayan aprobado el curso teórico práctico a que se refiere el artículo 17° de la presente ley, que no sean nombrados porque no hay plaza vacante, previo consentimiento, serán inscritos en el Registro de Suplentes que tendrá a su cargo la Comisión de Carrera Judicial.
- 21.2 Los inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior, serán llamados para cubrir un reemplazo o plaza vacante, en calidad de jueces suplentes.

- 21.3 La prelación consignada en el registro tendrá una validez de 1 (un) año computado a partir de la inscripción.
- 21.4 La Comisión de Carrera Judicial remitirá anualmente la relación de habilitados inscritos en el Registro de Suplentes a la Presidencia del Poder Judicial para los fines pertinentes.

**TÍTULO III**  
**DERECHOS, DEBERES Y FACULTADES,**  
**PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES**

**CAPÍTULO I**  
**DERECHOS DE LOS JUECES**

**Artículo 22°.- Derechos del Juez**

Son derechos del juez:

- a. La independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional;
- b. La estabilidad en el cargo, de acuerdo a la Constitución y las leyes;
- c. Solicitar su traslado u otorgar su consentimiento para ser trasladado por razones de servicio;
- d. Solicitar su permuta con otro juez conforme a lo dispuesto en la presente ley;
- e. Percibir una remuneración equitativa y justa que en ningún caso será disminuida.

La remuneración de los jueces de la Corte Suprema no será menor que los ingresos totales que perciben los congresistas de la República.

La remuneración de los jueces de la Corte Superior de Justicia no será inferior al 90% de la remuneración total que perciben los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al 80% para los jueces especializados o mixtos y al 70% para los jueces de paz letrados.

- f. Percibir y gozar de las prestaciones, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico y social que les corresponde conforme a la ley;
- g. Percibir 16 remuneraciones al año, siendo una por fiestas patrias, una por Navidad, una por vacaciones y otra por escolaridad;
- h. Gozar de la cobertura de un seguro de vida;
- i. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares, cuando la actividad o el caso lo requiera;

- j. Asociarse de conformidad con la Constitución y las leyes;
- k. Disfrutar de licencias con goce de remuneración al haber obtenido becas de estudios en el país y en el extranjero, o por asistencia a cursos de perfeccionamiento, estancias de investigación o entrenamiento en el exterior sobre temas de su especialidad, previa la acreditación del caso;
- l. Solicitar permisos y licencias conforme lo establece la presente ley;
- m. Manejar una carga procesal racional; y
- n. Los demás que la Constitución, los tratados y las leyes les reconocen.

**Artículo 23°.- Derechos de los jueces inhabilitados para el trabajo con ocasión del servicio**

Los jueces que queden inhabilitados física o mentalmente para el trabajo con ocasión del servicio judicial perciben como pensión el íntegro de la remuneración que corresponde a un juez en servicio activo. En caso de fallecimiento con ocasión del servicio judicial, el cónyuge e hijos menores de edad, o hijos mayores que cursen estudios superiores o que sufran discapacidad que les impida trabajar, perciben como pensión el haber que corresponde al grado inmediato superior.

**Artículo 24°.- Compensación por tiempo de servicio**

La compensación por tiempo de servicios es equivalente a una remuneración total por cada año de servicio, la que deberá ser abonada dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la fecha de cese.

**Artículo 25°.- Capacitación judicial**

- 25.1. Los jueces tienen derecho a acceder a cursos de capacitación y perfeccionamiento en igualdad de condiciones y oportunidades.
- 25.2. La capacitación está a cargo de la Academia de la Magistratura sin perjuicio de la formación complementaria que pueda impartirse por medio de la Unidad de Capacitación del Poder Judicial en cada distrito judicial.
- 25.3. Los cursos a cargo de la Academia de la Magistratura son esencialmente formativos, tanto para el ingreso a la carrera judicial como para el ascenso, además de los de perfeccionamiento continuo y los de actualización en función de las especialidades.
- 25.4. Los cursos de la Unidad de Capacitación, donde ella exista, se brindan a todos los jueces sin excepción y adoptan las modalidades de talleres, cursos y seminarios orientados a la mejora del servicio de justicia, gestión judicial, atención al usuario, informática y cambio de cultura.

**Artículo 26°.- Mantenimiento y determinación de la especialidad**

- 26.1. La especialidad de los jueces se mantiene durante el ejercicio del cargo. El ingreso a una función especializada no impide postular a otra distinta, apartándose de su especialidad de origen. En todo caso, podrá recuperarla solamente cuando se produzca una vacante en su especialidad original.
- 26.2. La especialidad se determina por:
- a. Los grados académicos de la disciplina;
  - b. El ejercicio de cátedra universitaria en materia jurídica;
  - c. Las publicaciones sobre materia jurídica especializada;
  - d. Los trabajos desempeñados en cargos afines o comisiones;
  - e. Los cursos de especialización no menores a un semestre académico; y
  - f. Los años de antigüedad en el ejercicio de la judicatura en la disciplina.
- 26.3. En caso que se creen nuevas especialidades, el juez podrá solicitar su cambio de especialidad según el reglamento que al efecto apruebe la Comisión de Carrera Judicial.

**Artículo 27°.- Vacaciones**

Por cada año de servicio, los jueces tienen derecho a 30 (treinta) días naturales de vacaciones. Se gozan de acuerdo al cronograma establecido por el Consejo Distrital correspondiente, el Presidente de la Corte Suprema, el Jefe del Órgano de Control de la Magistratura o el Presidente de la Corte Superior, según corresponda.

**Artículo 28°.- Detención de jueces**

Los jueces comprendidos en la carrera judicial sólo pueden ser detenidos por orden del Juez competente o en caso de flagrante delito si la ley lo determina. En este último supuesto debe ser conducido de inmediato a la Fiscalía competente, con conocimiento del Presidente de la Corte respectiva, por la vía más rápida y bajo responsabilidad.

**Artículo 29°.- Permanencia en el servicio**

Los jueces tienen derecho a permanecer en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. La conducta se regula y controla por el Código de Ética Judicial y la presente ley, y la idoneidad mediante la evaluación del desempeño, en los términos que determina esta norma.



#### **Artículo 30°.- Sepelio**

El sepelio de los jueces en actividad, cesantes o jubilados, corre por cuenta del Poder Judicial. El pago se efectúa con la sola presentación de los documentos respectivos.

#### **Artículo 31°.- Bonificación por tiempo de servicios**

Los jueces, con excepción de los Vocales de la Corte Suprema, perciben una bonificación equivalente al 25% de su remuneración, al cumplir diez años en el cargo sin haber sido promovidos. Esta bonificación no es computable al ascender, requiriéndose nuevamente diez años en el nuevo grado para percibirla.

Los jueces de la Corte Suprema que permanezcan más de cinco años en el ejercicio del cargo, perciben una bonificación adicional, equivalente a un 25% de su remuneración, sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales. Esta bonificación es pensionable sólo después que cumpla treinta años de servicios al Estado, diez de los cuales deben corresponder al Poder Judicial.

#### **Artículo 32°.-Cómputo de años de formación profesional**

Los jueces comprendidos en la carrera judicial, que cuenten con 10 (diez) años de servicios al Estado, computan de abono cuatro años de formación profesional, aun cuando éstos hayan sido simultáneos con servicios efectivos prestados. Este beneficio se otorga de oficio.

#### **Artículo 33°.- Derechos de los jueces titulares que ejercen cargos provisionales**

Los jueces comprendidos en la carrera judicial que hayan desempeñado o desempeñen judicaturas provisionalmente tienen derecho a que su tiempo de servicios sea reconocido y considerado para el cómputo de la antigüedad en el cargo.

## **CAPÍTULO II**

### **TRASLADOS Y PERMUTAS**

#### **Artículo 34°.- Traslados**

- 34.1. Los jueces podrán ser trasladados, temporal o permanentemente, dentro de un mismo Distrito Judicial u otro diferente, y a un cargo de la misma categoría, especialidad o grado, por las causas siguientes:
  - a. Razones de servicio, calificadas por la Comisión de Carrera Judicial, previa audiencia y aceptación del juez y compensación económica de los gastos del traslado.

- b. Enfermedad sobrevenida, debidamente comprobada y previa evaluación, a solicitud del propio juez;
  - c. Solicitud del juez interesado, y si a juicio de la Comisión de la Carrera Judicial haya acumulado méritos en el ejercicio del cargo, tenga una causa justificada y el traslado no sea inconveniente para el servicio de impartición de justicia.
- 34.2. El traslado de jueces de distintos distritos judiciales requiere resolución motivada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El traslado de jueces en un mismo distrito judicial, requiere de resolución motivada del órgano de gobierno distrital correspondiente.

**Artículo 35°.- Permutas**

- 35.1. Las permutas proceden a solicitud de los jueces interesados, siempre que tengan el mismo grado o competencia, aunque pertenezcan a distritos judiciales distintos.
- 35.2. Las permutas tienen carácter temporal y para su otorgamiento se seguirán los criterios previstos en el párrafo 1 del artículo 34.
- 35.3. Corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizar o denegar mediante resolución motivada las permutas de jueces que pertenezcan a distintos distritos judiciales. Las permutas de jueces en un mismo distrito judicial serán competencia del órgano de gobierno distrital correspondiente.

**CAPÍTULO III**  
**PERMISOS Y LICENCIAS**

**Artículo 36°.- Permisos**

- 36.1 Los jueces tienen derecho a solicitar permisos para atender asuntos personales hasta por 10 (diez) días hábiles en un año judicial, los que podrán ser utilizados en uno o diversos momentos hasta completar el plazo máximo contemplado en el presente artículo.
- 36.2. Corresponde a los Presidentes de Corte conceder el permiso siempre que no perjudique el servicio de justicia o se pretenda con aquel eludir una decisión o actuación importante en un proceso determinado que esta bajo conocimiento del solicitante. Si se comprueba ésta última circunstancia, se abrirá al juez investigación disciplinaria.

- 36.3. El juez, durante el permiso, percibirá el total de sus haberes, excepto los gastos operativos, los cuales serán reducidos en forma proporcional a los días efectivamente laborados.

**Artículo 37°.- Permiso por lactancia**

Las juezas tendrán permiso para lactancia, conforme a las normas legales vigentes.

**Artículo 38°.- Licencias**

Las licencias con goce de haber sólo serán concedidas en los siguientes casos:

- a. Accidente o enfermedad comprobada del juez que lo inhabilite hasta por 2 (dos) años;
- b. Maternidad, de conformidad con las normas legales vigentes;
- c. Paternidad, hasta por 5 (cinco) días naturales;
- d. Duelo, en caso de fallecimiento del cónyuge, padres o hijos hasta por 15 (quince) días naturales en cada caso; y por fallecimiento de hermanos hasta por 5 (cinco) días naturales;
- e. Accidente o enfermedad grave comprobada de su cónyuge, padres o hijos hasta por 15 (quince) días naturales;
- f. Matrimonio, hasta por 8 (ocho) días naturales;
- g. Asistencia a seminarios y congresos, nacionales o internacionales, por una vez o hasta por 30 (treinta) días naturales por cada año;
- h. Asistencia a cursos de perfeccionamiento, estancias de investigación o entrenamiento en el exterior sobre temas de su especialidad. La licencia se concederá solo a los jueces titulares, por el tiempo de duración del curso y hasta un máximo de dos años, previa autorización del Presidente del Poder Judicial.  
El beneficiario está obligado a concluir su estancia y a permanecer en el Poder Judicial por lo menos el doble del tiempo empleado en el curso, bajo responsabilidad de resarcir el íntegro de las remuneraciones percibidas durante el tiempo de licencia.
- i. Por causas graves debidamente justificadas y hasta por no más de 30 (treinta) días naturales.

**Artículo 39°.- Órgano que concede la licencia**

El Presidente del Poder Judicial concede las licencias a los jueces de la Corte Suprema y a los órganos jurisdiccionales con competencia nacional u otros que

abarquen más de un Distrito Judicial; los Presidentes de Corte Superior, a los demás jueces. El Consejo Ejecutivo Distrital y donde no exista, la Sala Plena, de la respectiva Corte Superior debe dar aviso al Presidente del Poder Judicial de las licencias que conceda.

**Artículo 40°.- Cómputo del período de licencia**

- 40.1. En los casos de enfermedad, duelo o accidente previstos en el artículo 37° de la presente ley, el período de licencia se computa desde que ocurre el acontecimiento que justifica la solicitud, o desde la fecha en que el solicitante toma conocimiento de lo sucedido.
- 40.2. En los demás casos, el cómputo de la licencia concedida empieza desde el día de la notificación de la resolución autoritativa o la fecha en que el solicitante se haya ausentado del Despacho, o la que se indica en la resolución referida.

**Artículo 41°.- Ausencia imprevista**

El juez que por motivos justificados tenga que ausentarse de inmediato de la ciudad sede de su cargo, sin tiempo suficiente para obtener licencia, puede hacerlo dando cuenta por el medio más rápido a la Corte Suprema, o en su caso a la Corte Superior a la que pertenece, la cual previa comprobación, retrotrae la licencia al día de la ausencia. Si la causa alegada no es suficiente para justificarla, se aplica la correspondiente medida disciplinaria, sin perjuicio del descuento de haberes.

## **CAPÍTULO IV**

### **HONORES, CONDECORACIONES E INSIGNIAS**

**Artículo 42°.-Honores**

Corresponde a los jueces comprendidos en la presente ley los honores previstos en el artículo 39 de la Constitución.

**Artículo 43°.-Honores por fallecimiento**

En caso de fallecimiento de jueces en actividad, jubilados o cesantes, se tributarán honores:

- a. Al Presidente del Poder Judicial o ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República, los que corresponden al Presidente de la República;
- b. A los jueces o ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, los que corresponden a los Ministros de Estado;

- c. A los jueces o ex jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los correspondientes a los Prefectos; y
- d. A los jueces o ex jueces especializados o mixtos y de paz letrados, los que corresponden a los Subprefectos.

**Artículo 44°.- Condecoración Orden Peruana de la Justicia**

- 44.1. Los méritos de los jueces por sus importantes aportes o excepcionales servicios prestados al Poder Judicial o al país, son premiados con la condecoración de la Orden Peruana de la Justicia, cuyos diversos grados, procedimiento y condiciones serán determinadas por reglamento aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- 44.2. Puede conferirse igual condecoración a personas que sin ser magistrados hayan prestado servicios relevantes a favor de la justicia o en defensa de los Derechos Humanos.

**Artículo 45°.-Insignias**

- 45.1. Las insignias de los jueces del Poder Judicial son las siguientes:
  - a. Los jueces de la Corte Suprema llevan pendiente del cuello una cinta de bicolor nacional de cinco centímetros de ancho, con una medalla dorada en forma elíptica, de cinco centímetros en su diámetro mayor, con la figura a medio relieve de la Justicia;
  - b. Los jueces de las Cortes Superiores usan la misma insignia con una cinta de color rojo;
  - c. Los jueces especializados o mixtos usan la misma insignia con una cinta blanca; y,
  - d. Los jueces de paz letrados usan medalla igual, pendiente de una cinta de color blanca en la solapa izquierda.
- 45.1. Las insignias de los jueces del Poder Judicial son de uso exclusivo y están obligados a usarlas en el ejercicio público de sus funciones y en ceremonias oficiales.

**CAPÍTULO V**  
**DEBERES DE LOS JUECES**

**Artículo 46°.- Deberes de los Jueces**

Son deberes de los jueces:

- a. Impartir justicia en forma pronta, imparcial, con respeto al debido proceso y observando plazos razonables para expedir las resoluciones correspondientes;
- b. Aplicar en los procesos que conozcan la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente. A falta de norma jurídica aplicable, deberán resolver de acuerdo a la materia, los principios y según el sistema de fuentes;
- c. Guardar reserva sobre los asuntos que por su naturaleza así lo requieran;
- d. Observar el horario de trabajo establecido, así como el fijado para los informes orales y otras diligencias. Su incumplimiento injustificado constituye infracción disciplinaria;
- e. Atender el juzgado o sala a su cargo con la diligencia debida;
- f. Dedicarse exclusivamente a la función judicial. No obstante, puede ejercer la docencia universitaria hasta por un total de ocho horas semanales de dictado de clases, y en horario distinto del de despacho judicial;
- g. Atender con la debida diligencia y respeto a los funcionarios judiciales y fiscales, personal subalterno, compañeros de trabajo, abogados, litigantes, personas interesadas en los procesos a su cargo y al público en general;
- h. Denunciar cualquier hecho o acto que implique riesgo o amenaza para la independencia del ejercicio de su cargo;
- i. Presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas conforme a ley y cada vez que su patrimonio y rentas varíe en más de un 30% (treinta por ciento);
- j. Poner en conocimiento del Ministerio Público y del Colegio de Abogados correspondiente los casos de ejercicio ilegal de la profesión de abogado y otros comportamientos que considere delictivos o indebidos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones;
- k. Sancionar en el marco de sus facultades a todos aquellos que practiquen maniobras dilatorias o actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, en los procesos judiciales que tenga en su conocimiento;
- l. Observar una conducta intachable;
- m. Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de fácil e inmediata comunicación.
- n. Requerir a las partes precisar sus pretensiones, cuando de la demanda, contestación o reconvención, en su caso, se advierten deficiencias o confusiones;

- o. Denegar de plano los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las personas, haciendo testar las frases inconvenientes, sin perjuicio de la respectiva sanción;
- p. Cumplir con los demás deberes que ésta y otras leyes y reglamentos señalen.
- q. Comunicar al órgano de control la iniciación de proceso penal contra cualquier juez, así como de su resultado final.

## **CAPÍTULO VI**

### **FACULTADES DE LOS JUECES**

#### **Artículo 47º.- Facultades**

Son facultades de los jueces:

- a. Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes como medio de prueba, o de oficio para mejor resolver. Excepcionalmente, los expedientes en trámite sólo pueden ser pedidos de oficio, por resolución debidamente fundamentada. En caso de existir diligencia pendiente con día señalado, ésta se actúa antes de remitir el expediente. En cualquier otro caso, la remisión del expediente se efectúa al día siguiente de recibido el oficio que lo solicita y su devolución se hace en el plazo perentorio de cinco días después de recibido;
- b. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, poniendo a disposición del Ministerio Público, a quienes en su despacho o en el desarrollo de una diligencia judicial los agraven, injurien, coaccionen o amenacen de palabra o promuevan desórdenes;
- c. Solicitar a cualquier persona, autoridad o entidad pública o privada los informes y/o documentos que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los asuntos sometidos a su competencia dentro del plazo de ley, o en su defecto en el expresamente señalado en la resolución. El incumplimiento al requerimiento de un juez conlleva responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda;
- d. Imponer las medidas disciplinarias que establecen las leyes y reglamentos;
- e. Sancionar a los abogados en los casos previstos por ley;
- f. Solicitar a los medios de comunicación social rectifiquen la información que consideren ofensiva a su honorabilidad, cuando ésta haya sido cuestionada, dando cuenta del pedido a su superior jerárquico, sin perjuicio de formular la denuncia que corresponda; y,
- g. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

## **CAPÍTULO VII**

### **PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES**

#### **Artículo 48°.- Prohibiciones**

Los jueces están prohibidos de:

- a. Defender o asesorar, salvo en causa propia, a su cónyuge, concubino(a), ascendientes o descendientes y hermanos(as);
- b. Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o a favor de su cónyuge, concubino(a), ascendientes, descendientes o hermanos(as);
- c. Ejercer el comercio o la industria, personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios de cualquier persona jurídica con fines lucrativos, salvo la regular administración de sus bienes propios o de la sociedad conyugal declarados con arreglo a ley;
- d. Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales o procedimientos administrativos;
- e. Ausentarse injustificadamente de su despacho;
- f. Ejercer actividades relacionadas con su función fuera de su despacho, con las excepciones de ley;
- g. Ejercer actividades o propaganda de índole político partidaria o propiciar que otros lo hagan;
- h. Comprar o adquirir bajo cualquier título para sí, su cónyuge, concubino(a), o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por intermedio de terceros, bienes y derechos materia de un proceso judicial que haya sido o sea de su conocimiento. La prohibición se extiende hasta 5 (cinco) años después de haber conocido el proceso. El acto que contravenga esta prohibición es nulo, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a ley;
- i. Conocer un proceso cuando él, su cónyuge o concubino(a), tenga o hubiera tenido interés o relación laboral con alguna de las partes. En este último caso, el impedimento se extiende hasta un año después de producido el cese de la relación laboral o la culminación de los servicios prestados bajo



cualquier modalidad contractual. Se exceptúa de la presente prohibición, los procesos en los que fuera parte el Poder Judicial;

- j. Adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban conocer;
- k. Difundir a terceros o a los medios de comunicación, salvo autorización expresa, cualquier información sobre los procesos que conocen; y,
- l. Las demás establecidas por ley.

#### **Artículo 49°.- Impedimentos**

- 49.1. Están impedidos para desempeñar cargo judicial mientras ejerzan función pública y hasta 6 (seis) meses después de haber cesado en el cargo:
  - a. El Presidente de la República y los Vicepresidentes;
  - b. Los Congresistas, Presidentes Regionales, Alcaldes, Regidores y demás funcionarios cuyos cargos provengan de elección popular;
  - c. Los Ministros de Estado, los Viceministros y Directores Generales de los ministerios;
  - d. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;
  - e. El Contralor General de la República y el Subcontralor;
  - f. Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); y
  - g. Los demás funcionarios que ejerzan autoridad política.
- 49.2. Este impedimento no rige para el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

#### **Artículo 50°.- Incompatibilidades**

- 50.1. Hay incompatibilidad para laborar en el Poder Judicial por razón de matrimonio, concubinato y parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad:
  - a. Entre jueces de la Corte Suprema, y entre éstos y los jueces superiores y demás jueces de la República, y Secretarios y Relatores de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como con el personal auxiliar que labora en la Corte Suprema de Justicia de la República;
  - b. En el mismo Distrito Judicial entre jueces de cualquier grado y auxiliares jurisdiccionales de todas las instancias.
- 50.2. Estas incompatibilidades también comprenden al personal administrativo entre sí, así como con relación a los Jueces y al personal que realiza actividades de apoyo a la función jurisdiccional.

- 50.3. En caso de incompatibilidad sobreviniente, cualquiera de los jueces involucrados pueden solicitar el cambio de distrito judicial u optar por la renuncia. Si ninguno de ellos optase por el cambio de distrito judicial o la renuncia, queda destituido el último en ingresar a la carrera judicial.

#### **TÍTULO IV**

##### **COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL**

#### **Artículo 51°.- Administración de la Carrera**

- 51.1. La administración de la carrera judicial está orientada a convocar y conservar a los jueces más idóneos, procurándoles una justa remuneración y capacitación continua con el fin de asegurar la calidad del servicio, requiriéndoles, al mismo tiempo, un nivel satisfactorio de rendimiento.
- 51.2. La administración de la carrera corresponde a la Comisión de Carrera Judicial.

#### **Artículo 52°.- Composición de la Comisión**

- 52.1. La Comisión de Carrera Judicial está integrada por:
- a. El Presidente del Poder Judicial o el juez de la Corte Suprema que lo represente, quien la presidirá;
  - b. El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial;
  - c. Un juez de Corte Superior designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial entre un representante propuesto por la Sala Plena de cada Distrito Judicial;
  - d. Un juez especializado o mixto, designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial entre un representante propuesto por la Junta de Jueces Decanos de cada distrito judicial;
  - e. Un representante docente ordinario de las Universidades Públicas que cuenten con una facultad de derecho con más de treinta años de antigüedad, elegido por sus rectores; y
  - f. Un representante docente ordinario de las Universidades Privadas que cuenten con una facultad de derecho con más de treinta años de antigüedad, elegido por sus rectores.
- 52.2. Conjuntamente con la elección de los miembros titulares se elegirán a los suplentes.
- 52.3. Los integrantes de la Comisión a que se refieren los literales c), d), e) y f) del presente artículo, ejercerán su función a dedicación exclusiva, salvo la

docencia universitaria que no sea a dedicación exclusiva o a tiempo completo.

- 52.4. El funcionamiento y organización de la Comisión de Carrera Judicial, estará regulado por un reglamento interno que, a propuesta de la Comisión, será aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

**Artículo 53°.- Funciones y atribuciones de la Comisión**

La Comisión de Carrera Judicial tiene las funciones y atribuciones siguientes:

- a. Evaluar el desempeño de los jueces de la República, con excepción de los jueces de la Corte Suprema que son evaluados por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, con informe de la Comisión de Carrera Judicial;
- b. Diseñar políticas de fortalecimiento y desarrollo de la carrera judicial;
- c. Elaborar y actualizar el cuadro de méritos y de antigüedad;
- d. Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la separación de los jueces con bajo rendimiento;
- e. Proponer la escala de rendimiento;
- f. Comunicar al Presidente de la Corte Suprema la generación de plazas vacantes para su convocatoria a concurso público por el Consejo Nacional de la Magistratura;
- g. Velar por el cumplimiento de la presente ley y reglamentos;
- h. Las demás funciones y atribuciones que le confiere la ley.

**Artículo 54°.- Plazo de la Comisión**

Los miembros de la Comisión de Carrera Judicial ejercerán los cargos por el plazo de 3 (tres) años. Podrán ser reelegidos por un período consecutivo de 2 (dos) años.

**TÍTULO V**  
**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**  
**CAPÍTULO ÚNICO**  
**DESEMPEÑO DE LOS JUECES**

**Artículo 55°.- Finalidad**

La evaluación del desempeño de los jueces en el cargo, tiene por finalidad conocer su rendimiento y méritos, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar las labores de impartición de justicia.

**Artículo 56°.- Órgano administrador y periodicidad**

- 56.1. La Sala Plena de la Corte Suprema de la República efectuará la evaluación de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia cada 6 (seis) años.
- 56.2. La evaluación de los Jueces de las Cortes Superiores, de los Especializados o Mixtos y de Paz Letrados estará a cargo de la Comisión de la Carrera Judicial y se realizará cada 3 (tres) años.

**Artículo 57°.- Principios que rigen la evaluación**

La evaluación del desempeño se sustenta en los siguientes principios:

- a. Igualdad de condiciones:  
Los jueces sin distinción deben ser evaluados bajo los mismos criterios.
- b. Transparencia:  
Los jueces deben conocer oportunamente los períodos de evaluación.
- c. Objetividad:  
Las evaluaciones deben efectuarse con estricta sujeción a los criterios de evaluación previamente establecidos.
- d. Medición:  
Las evaluaciones deben ser posibles de medir a través de variables previamente definidas.
- e. Comprobación:  
Los resultados de las evaluaciones deben ser posibles de verificar tanto por el funcionario evaluado como por las autoridades a cargo de la evaluación.

**Artículo 58°.- Criterios para evaluar el desempeño**

- 58.1. La evaluación del desempeño, se realizará con base a los siguientes criterios:
  - a. Asistencia y puntualidad;
  - b. Número de autos definitivos y sentencias dictadas mensualmente;
  - c. Estructura y contenido de sus resoluciones judiciales;
  - d. Número de audiencias o diligencias realizadas cada mes, y la naturaleza y complejidad de las mismas;
  - e. Número de casos resueltos mediante conclusión o terminación anticipada, conciliación u otras alternativas a las formas especiales de concluir un proceso.
  - f. Observancia de los plazos o términos legales;
  - g. Diferimientos de las sentencias, autos y audiencias, por causas injustificadas imputables al juez;

- h. Las recusaciones formuladas contra el juez no admitidas y luego declaradas fundadas;
  - i. Abstenciones, excusas o inhibiciones desestimadas;
  - j. Sanciones disciplinarias impuestas;
  - k. Movimiento general del trabajo del juzgado o sala, representado por el número de asuntos ingresados mensualmente, el número de casos resueltos y en tramitación, los procesos paralizados y sus causas, el número de autos definitivos y sentencias dictadas; los recursos humanos y materiales con que cuenta la unidad judicial;
  - l. Estudios y cursos de perfeccionamiento que realice el juez, medidos en horas lectivas, y las notas obtenidas;
  - m. Grados académicos y diplomas obtenidos;
  - n. Actividad docente, las publicaciones, ponencias y la participación en comisiones de estudio o trabajo, intra o extra institucionales.
- 58.2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobará a propuesta de la Comisión de Carrera Judicial los criterios de evaluación a ser aplicados a los jueces que desempeñen cargos administrativos y de gobierno.

**Artículo 59°.- Escala de rendimiento**

- 59.1. La escala de rendimiento satisfactorio de los jueces será aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión de Carrera Judicial, y se publicará en el Diario Oficial.
- 59.2. La evaluación de desempeño, así como las promociones para ocupar provisionalmente un cargo superior, se efectuarán con estricta sujeción la escala establecida.

**Artículo 60°.- Resultado de la evaluación**

- 60.1. El resultado de la evaluación será notificado al evaluado y se registrará en el expediente personal del juez. Servirá para las promociones, los ascensos, traslados, reconocimientos y estímulos.
- 60.2. El resultado no satisfactorio de la evaluación de desempeño determina que la Comisión de Carrera Judicial pueda adoptar, de manera independiente o concurrente, según el caso, las siguientes medidas:
  - a. La obligatoriedad para el evaluado de concurrir a los cursos de formación o actualización a cargo de la Academia de la Magistratura, que determine la Comisión de la Carrera Judicial.

- b. La imposibilidad para el evaluado de ascender u ocupar provisionalmente un cargo superior.
- 60.1. Si persiste la evaluación negativa en un período de 6 (seis) años, la Comisión de la Carrera Judicial, previa audiencia al evaluado, puede recomendar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la separación del juez del cargo.
- 60.2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, previa audiencia del juez, resolverá el pedido de separación, pudiendo eximirlo si existen causas que justifiquen objetivamente el bajo rendimiento. Contra la decisión de separación procede recurso de apelación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, que deberá resolverlo en un plazo máximo de 30 (treinta) días. La Sala Plena de la Corte Suprema de la República está obligado a conceder una audiencia al juez recurrente si éste lo solicita. La interposición del recurso de apelación suspende la ejecución de la medida.
- 60.3. En caso que el juez, en el plazo de ley, no interponga recurso de apelación contra la resolución que dispone su separación del cargo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, comunicará la medida al Consejo Nacional de la Magistratura para la cancelación del título respectivo.
- 60.4. En el supuesto a que se refiere el artículo 56.1, si persiste la evaluación negativa en un período de 12 (doce) años, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, previa audiencia del evaluado, resolverá la separación del cargo.

#### **Artículo 61°.- Responsabilidad disciplinaria**

Si como consecuencia de la evaluación de desempeño se detectase la comisión de una falta disciplinaria, se dará cuenta al órgano de control competente para la adopción de las medidas correspondientes.

#### **Artículo 62°.- Cuadro de Méritos**

- 62.1. El cuadro de méritos de los jueces en todos los grados se elabora con base a los resultados de la evaluación del desempeño.
- 62.2. El orden establecido en el cuadro de méritos se tomará en cuenta para efectos del ascenso y para ocupar provisionalmente un cargo superior.

#### **Artículo 63°.- Cuadro de Antigüedad**

- 63.1. El cuadro de antigüedad contiene la relación de los jueces de la República, por orden de fecha de ingreso a la carrera judicial y grado. Tiene por función establecer el orden de precedencia entre los jueces de un mismo gra-

do. Si dos o más jueces han juramentado el mismo día, precede el que haya desempeñado función judicial como titular durante mayor tiempo. En su defecto, el que tenga más tiempo como juez provisional, suplente o abogado, en ese orden.

- 63.2. El juez cesante que reingrese al servicio agregará en el cómputo para su ubicación en el cuadro de antigüedad, el tiempo de servicios que tenía acumulado al tiempo de cesar.

#### **Artículo 64°.- Cuadro de méritos y antigüedad**

Para el ascenso y para ocupar provisionalmente un cargo superior, se tomará en cuenta el cuadro de méritos y el de antigüedad con un peso de 60% (sesenta por ciento) y 40% (cuarenta por ciento), respectivamente.

## **TÍTULO VI RÉGIMEN DISCIPLINARIO**

### **CAPÍTULO I GENERALIDADES**

#### **Artículo 65°.- Finalidad del régimen**

El régimen disciplinario tiene por fin garantizar que los jueces desempeñen sus deberes y responsabilidades en forma honesta y eficiente con el objeto de promover y mantener el mejor rendimiento en el servicio de justicia, y que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas según su gravedad y con observancia del debido proceso.

#### **Artículo 66°.- Responsabilidad disciplinaria**

- 66.1. Los jueces son responsables disciplinariamente por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, en los casos previstos y con las garantías establecidas en esta ley.
- 66.2. La responsabilidad disciplinaria es independiente de la penal y civil que corresponda.

#### **Artículo 67°.- Principios que rigen la responsabilidad disciplinaria**

El régimen de responsabilidad disciplinaria y sanciones en el Poder Judicial se rige por los siguientes principios:

- a) Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un juez, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
- b) Debido procedimiento.- El órgano competente aplicará sanciones sujetándose al procedimiento establecido y respetando el debido proceso.
- c) Razonabilidad.- El órgano competente debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como que la determinación de la sanción considere como criterios a tomar en cuenta la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y su eventual repetición.
- d) Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a precisar conductas o determinar sanciones, sin desnaturalizar sus alcances o constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.
- e) Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento en que el juez haya incurrido en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
- f) Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
- g) Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por infracciones en las que el juez incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al juez que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.
- h) Presunción de licitud.- Los órganos competentes deben presumir que los jueces han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.



- i) Imparcialidad.- Las labores de control deben efectuarse sobre la base de una evaluación que evite la subjetividad.
- j) Gratuidad.-El procedimiento disciplinario está exonerado de cualquier pago de tasa judicial, sin perjuicio de las sanciones económicas que se imponga al quejoso por la interposición de denuncias maliciosas.
- k) Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
- l) Reserva.- Los instrumentos, diligencias y pruebas actuadas en el procedimiento tienen el carácter de documentación reservada. Su acceso se encuentra restringido a las autoridades competentes, los quejados, los quejosos y sus abogados. Este principio no impide informar a la opinión pública la existencia de un procedimiento disciplinario.
- m) No reformatio in peius.- Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

## **CAPÍTULO II**

### **FALTAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES**

#### **Artículo 68°.- Faltas disciplinarias**

Constituyen faltas disciplinarias las acciones y/u omisiones en que deliberada o negligentemente incurra un juez, previstas en la presente ley.

#### **Artículo 69°.- Rehabilitación**

Cumplida la sanción, el juez queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la misma. Esta disposición no es aplicable a los casos de destitución.

#### **Artículo 70°.- Tipos de faltas disciplinarias**

Las faltas disciplinarias cometidas por los jueces en el ejercicio de sus funciones pueden ser:

- a) Leves;
- b) Graves; y
- c) Muy graves.

#### **Artículo 71°.- Faltas disciplinarias leves**

Constituyen faltas disciplinarias leves:

- a) No observar el horario de despacho, salvo causa justificada.
- b) Inasistencia injustificada al despacho judicial hasta por dos días.
- c) Proveer escritos o resoluciones fuera de los plazos legales injustificadamente.
- d) No emitir los informes solicitados dentro de los plazos fijados, siempre que ello no constituya una falta grave.
- e) Incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la labor jurisdiccional, o dedicar más horas de las previstas a otras funciones permitidas por disposición constitucional, legal o autorizados por órgano competente.
- f) No ejercitar el control permanente sobre sus auxiliares y subalternos, o no imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique.
- g) Abusar de las facultades que la ley le otorga respecto a sus subalternos o sobre las personas que intervienen de cualquier forma en un proceso.
- h) No guardar consideración y respeto a los abogados, siempre y cuando ello no constituya ilícito penal.
- i) Incurrir injustificadamente en retraso, omisión o descuido en la tramitación de los procesos.
- j) Descuidar o incumplir los deberes propios del cargo establecidos por ley, siempre y cuando no constituya falta grave o muy grave.
- k) Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

#### **Artículo 72°.- Faltas disciplinarias graves**

Constituyen faltas disciplinarias graves:

- a) Incurrir en reiterados e injustificados retrasos y descuidos en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones. Para determinar esta falta se tendrá en consideración los pedidos que hubiesen formulado las partes exigiendo el cumplimiento legal y razonable de las actuaciones o plazos para expedir las resoluciones, el periodo de tiempo que el magistrado viene conociendo el proceso, la conducta de las partes y demás intervinientes en dicho proceso, y la complejidad del asunto controvertido.
- b) Violar la confidencialidad de los asuntos reservados sometidos a su conocimiento, o emitir opinión sobre los mismos, ya sea a través de los medios de comunicación o de cualquier otro modo que los publicite. Se incurre en la misma falta si fuera de las actuaciones judiciales y lo que establecen las

leyes procesales se exponen públicamente el contenido de las diligencias, evidencias y pruebas reservadas dentro del proceso.

- c) Causar grave perjuicio al proceso o al desarrollo de sus incidencias y diligencias, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales que resultasen necesarios para su correcta formulación.
- d) Ausentarse injustificadamente del despacho judicial por más de dos días y hasta un máximo de cinco.
- e) Ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera del despacho judicial.
- f) Incurrir en conducta manifiestamente discriminatoria en el ejercicio del cargo.
- g) Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales.
- h) Agraviar u ofender a otros jueces, o a los intervinientes en un proceso.
- i) No realizar la función de control que le es propia, o que comprobada la falta y sometida a su conocimiento no aplica la sanción establecida.
- j) Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

**Artículo 73°.- Faltas disciplinarias muy graves**

Constituyen faltas disciplinarias muy graves:

- a) Instigar o alentar reacciones públicas en contra del Poder Judicial, fuera de la actuación jurisdiccional.
- b) Ausentarse injustificadamente del despacho judicial por más de cinco días.
- c) Permitir la interferencia de cualquier autoridad, funcionario público o persona que atente contra la autonomía del Poder Judicial o la independencia de los jueces.
- d) Desempeñar, simultáneamente a sus responsabilidades jurisdiccionales, empleos o cargos públicos o privados remunerados, salvo en los casos expresamente permitidos por la Constitución.
- e) Ejercer la defensa o asesoría pública o privada, salvo en los casos exceptuados en la ley.
- f) Valerse del cargo para dar órdenes o ejercer presiones sobre otros miembros del Poder Judicial, buscando así condicionar la tramitación o la resolución de algún proceso o procedimiento.
- g) Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo.

- h) Solicitar o aceptar de los litigantes, sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, dádivas, legados, agasajos y sucesión testamentaria a su favor o en el de su cónyuge, concubino(a), ascendientes, descendientes o hermanos(as).
- i) No justificar documentalmente dentro del plazo de treinta días los signos exteriores de riqueza que evidencien los jueces, previo requerimiento del órgano de control.
- j) Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente la dignidad del cargo.
- k) Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia.

#### **Artículo 74°.- Sanciones**

74.1 Las sanciones susceptibles de imponerse a un juez son:

- a) Amonestación.
- b) Multa.
- c) Suspensión.
- d) Destitución.

74.2 La amonestación y la multa son aplicables como sanciones ante faltas leves; la suspensión para las graves, y la destitución para las muy graves.

74.3 No existen más sanciones que las antes señaladas. Es nula de pleno derecho la imposición de sanciones que no estén previstas en la presente ley.

#### **Artículo 75°.- Amonestación**

La amonestación se materializa a través de una llamada de atención escrita que se hace al Juez, dejándose constancia en su registro y legajo personal respectivos.

#### **Artículo 76°.- Multa**

La multa consiste en el pago que debe hacer un Juez, mediante descuento por planilla, de un porcentaje no mayor del 20% (veinte por ciento) de su haber mensual.

#### **Artículo 77°.- Suspensión**

La suspensión sin goce de haber consiste en la separación temporal del Juez del ejercicio del cargo. Puede imponerse hasta por un máximo de seis meses.

#### **Artículo 78°.- Destitución**

La destitución consiste en la pérdida definitiva del cargo desempeñado ante una falta disciplinaria muy grave, o en su caso, haber sido condenado(a), ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva del fallo condenatorio, por delito doloso.

#### **Artículo 79°.- Recursos**

- 79.1. Contra las resoluciones que impongan alguna sanción, proceden el recurso de apelación.
- 79.2. Los requisitos y trámite de los recursos se rigen por la Ley del Procedimiento Administrativo General. El plazo para la interposición de recursos contra resolución definitiva es de 5 (cinco) días, y contra autos, que no ponen fin al procedimiento, de 3 (tres) días.

#### **Artículo 80°.- Caducidad y prescripción de las faltas disciplinarias**

- 80.1. El procedimiento disciplinario puede iniciarse por queja del perjudicado, su representante, su abogado o de oficio.
- 80.2. El plazo para interponer la queja administrativa contra los jueces caduca a los tres meses de conocido el hecho.
- 80.3. Iniciado el procedimiento, su trámite en el Poder Judicial prescribe a los dos años, contados a partir de la resolución que le dio inicio, sea cual fuere el estado del procedimiento o recurso. Ello se declara de oficio o a petición de parte.

### **CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO**

#### **Artículo 81°.- Finalidad del procedimiento disciplinario**

El procedimiento disciplinario tiene por fin investigar, verificar y sancionar las conductas funcionales irregulares en las que incurran los jueces considerados en la presente ley, así como realizar recomendaciones y propuestas para desincentivar las conductas irregulares logrando la mejora del servicio.

#### **Artículo 82°.- Modalidades del procedimiento disciplinario**

- 82.1. El procedimiento disciplinario puede iniciarse por queja del perjudicado, su representante o su abogado, o de oficio, como resultado de una visita o por una investigación dispuesta por el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura o de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura. El Órgano de Control dará prioridad a las intervenciones de oficio.

- 82.2. El quejoso responde por los agravios que genere con sus actos, en perjuicio del quejado, en caso de resultar malicioso su reclamo.
- 82.3. La finalidad de las visitas es realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de carácter periódica, verificando la conducta y desempeño funcional de los jueces, detectando así las deficiencias en el servicio que prestan.
- 82.4. Las investigaciones son dispuestas cuando se toma conocimiento, por cualquier medio, de la existencia de presuntas faltas disciplinarias en la conducta y/o desempeño funcional de los jueces que ameriten ser verificadas con reserva.

**Artículo 83°.- Obligatoriedad del procedimiento disciplinario**

Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley se impondrán por la autoridad competente, previo procedimiento disciplinario, siendo nulas de pleno derecho las sanciones impuestas sin seguir ese procedimiento.

**Artículo 84°.- Principios del procedimiento disciplinario**

Los procedimientos disciplinarios se sustanciarán bajo los principios de legalidad, debido proceso, razonabilidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igualdad de las partes, oficiosidad y economía procesal.

**Artículo 85°.- Legalidad y competencia de las sanciones**

Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley serán impuestas por los órganos establecidos en ella y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

**Artículo 86°.- Comunicación de las sanciones disciplinarias**

Las sanciones que impongan los órganos de control se ejecutarán y comunicarán a otras entidades sólo cuando hayan quedado consentidas o ejecutoriadas.

**Artículo 87°.- Medida cautelar de abstención en el cargo de los sometidos a investigación por faltas muy graves**

- 87.1. Cuando existan indicios razonables que hagan prever la imposición de la sanción disciplinaria de destitución al juez y su permanencia en el cargo durante el trámite del procedimiento disciplinario afecte la credibilidad del Poder Judicial, podrá decidirse su abstención. Dicha medida caduca a los 6 (seis) meses de consentida o ejecutoriada la decisión. La impugnación de la resolución de la medida cautelar no suspende su ejecución.

- 87.2. Si por la complejidad de la conducta investigada el procedimiento disciplinario no hubiere concluido, se puede disponer su prórroga por un máximo de 6 (seis) meses adicionales.

**Artículo 88°.- Medida cautelar de abstención en el cargo de los procesados por delitos dolosos**

- 88.1. El Juez contra quien se dicta orden de detención o se formula acusación con pedido de pena privativa de libertad, en procesos por delito doloso, mientras dure el proceso penal, podrá ser apartado de las labores jurisdiccionales propias de su cargo.
- 88.2. Los presidentes de Corte se encargan de hacer cumplir estas decisiones, ejecutándolas dentro de los parámetros establecidos por el Órgano de Control de la Magistratura.

**Artículo 89°.- Reglamento de Procedimiento Disciplinario**

Corresponderá al Órgano de Control de la Magistratura expedir el reglamento de Procedimiento Disciplinario y de Organización y Funciones.

**Artículo 90°.- Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo General**

En lo no previsto en la presente ley y el Reglamento de Procedimiento Disciplinario a que se refiere el artículo precedente se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

## **TÍTULO VII**

### **PROVISIONALIDAD Y SUPLENCIA EN EL CARGO**

**Artículo 91°.- Jueces Provisionales**

- 91.1. Los jueces provisionales son aquellos que siendo titulares en la carrera judicial son promovidos para ocupar un cargo inmediato superior.
- 91.2. La promoción al cargo provisional inmediato superior se efectúa conforme al cuadro de méritos y al resultado satisfactorio de la evaluación en el desempeño, a que se refiere el parágrafo 1 del artículo 62° de la presente ley.

**Artículo 92°.- Jueces Suplentes**

- 92.1. Los jueces suplentes son abogados titulados y hábiles, designados temporalmente por el Presidente de la Corte Superior para cubrir un reemplazo o plaza vacante. No están comprendidos en la carrera judicial.

- 92.2. Sólo pueden ser designados como jueces suplentes los que se encuentran inscritos en el Registro de Suplentes a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
- 92.3. No pueden designarse jueces suplentes cuando existan jueces de carrera que reúnen los requisitos para ser promovidos como provisionales, conforme a la presente ley.
- 92.4. Los jueces suplentes deberán presentar:
- a. Declaración jurada de bienes y rentas.
  - b. Declaración jurada de no encontrarse incurso en causal de incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo.
  - c. Declaración jurada de no tener antecedentes penales, judiciales o policiales.
  - d. Declaración jurada de no haber sido separado de cualquier cargo y bajo cualquier modalidad laboral dentro del Poder Judicial, Ministerio Público.
  - e. Certificado o constancia de estar hábil en alguno de los Colegios de Abogados del país.
- 92.5. La presente ley es aplicable a los jueces suplentes durante el tiempo en que desempeñen el cargo, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que acuerde la Comisión de Carrera Judicial.

**Artículo 93°.- Evaluación de desempeño del juez suplente**

- 93.1. El desempeño de los jueces suplentes será evaluado por la Comisión de Carrera Judicial.
- 93.2. El juez suplente que obtenga un resultado no satisfactorio en la evaluación de desempeño será removido en forma inmediata y no podrá ser designado como suplente en lo sucesivo. El resultado de la evaluación será puesto en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura.

**Artículo 94°.- Temporalidad en el cargo**

- 94.1. La designación como juez provisional o suplente tiene carácter temporal. En la respectiva resolución de designación se señalará el plazo de la provisión o suplencia. La prórroga requiere resolución expresa.
- 94.2. La provisionalidad en el cargo no puede exceder de 2 (dos) años. La suplencia, no puede exceder de 3 (tres) años, consecutivos o no. En ambos casos, bajo responsabilidad del órgano que designa.



**Artículo 95°.- Remuneración de los jueces provisionales y suplentes**

- 95.1. La remuneración total de un juez provisional no puede ser inferior al 75% de la remuneración que percibe un juez titular del mismo grado.
- 95.2. La remuneración total de un juez suplente no puede ser inferior al 60% de la remuneración que percibe un juez titular del mismo grado.

**Artículo 96°.- Requisitos para ser designado juez provisional o suplente**

Los jueces provisionales y suplentes deben reunir los requisitos generales para ser juez, y los específicos que la especialidad y el grado exigen en cada caso, bajo sanción de nulidad de la designación.

**Artículo 97°.- Padrón de jueces suplentes**

La Comisión de Carrera Judicial elaborará el padrón de jueces suplentes a nivel nacional. Dicho registro contendrá:

- a. Los jueces suplentes en funciones, según su especialidad y grado.
- b. El plazo de designación de los jueces suplentes.
- c. Los jueces suplentes suspendidos o removidos de sus cargos.
- d. Las sanciones impuestas a los jueces suplentes.
- e. El expediente personal de cada juez suplente.
- f. Lo que el reglamento de la Comisión de Carrera Judicial establezca.

## **TÍTULO VIII**

### **TERMINACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL**

**Artículo 98°.- Causales de terminación del cargo**

- 98.1. El cargo de juez termina por:
  - a. Fallecimiento;
  - b. Cesantía o jubilación;
  - c. Renuncia, desde su aceptación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En todo caso, opera automáticamente transcurridos 60 (sesenta) días de su presentación;
  - d. Destitución por medida disciplinaria, conforme al procedimiento establecido por ley;
  - e. Separación del cargo, en los casos previstos por ley;
  - f. Incapacidad física o mental permanente, debidamente comprobada, que le impida desempeñar sus funciones;

- g. Pérdida de la nacionalidad peruana;
  - h. Al cumplir los 75 (setenta y cinco) años de edad;
  - i. Haber sido condenado(a), ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva del fallo condenatorio, por delito doloso; y
  - j. Los demás casos previstos en la Constitución y las leyes.
- 98.2. Producida la causal, el Presidente del Poder Judicial deberá comunicarlo al Consejo Nacional de la Magistratura para la cancelación del título respectivo.

#### **Artículo 99.- Separación del cargo**

La separación del cargo de juez a que se refiere el literal e) del artículo precedente procede cuando ha quedado demostrada su falta de idoneidad por bajo rendimiento y ser desfavorable la evaluación de su desempeño judicial.

### **TÍTULO IX**

#### **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES**

##### **Primera.- Reglamento de la presente ley**

El Poder Judicial, en el plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la vigencia de esta norma, elaborará y aprobará el reglamento de la presente ley, así como el reglamento de la elección de miembros de la Comisión de Carrera Judicial.

##### **Segunda.- Plazo de designación de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial**

La designación de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial se efectuará en el plazo de los 30 (treinta) días siguientes de la publicación del reglamento de elección de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial.

##### **Tercera.- Instalación de la Comisión de Carrera Judicial**

La Comisión de Carrera Judicial se instalará dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la designación de sus miembros.

##### **Cuarta.- Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Carrera Judicial**

La Comisión de Carrera Judicial elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a su instalación.

#### **Quinta.- Escala de rendimiento, criterios de evaluación**

En el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de su instalación, la Comisión de Carrera Judicial elaborará y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobará los criterios para la evaluación de los jueces que ejercen cargos administrativos y de gobierno que indica el artículo 58.2, así como la escala de rendimiento a que se refiere el artículo 59.

#### **Sexta.- Reglamento de cambio de especialidad**

En el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de su instalación, la Comisión de Carrera Judicial elaborará y aprobará el reglamento de cambio de especialidad que señala el artículo 26.3.

#### **Sétima.- Reglamento de procedimiento disciplinario**

El Órgano de Control de la Magistratura elaborará y aprobará, en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la publicación de la presente ley, el reglamento a que se refiere el artículo 89.

#### **Octava.- Primera evaluación de desempeño**

La primera evaluación de desempeño se realizará a los 2 (dos) años de la entrada en vigencia del reglamento y la escala de rendimiento de la Comisión de Carrera Judicial.

#### **Novena.- Remuneración de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial**

En el presupuesto del Poder Judicial se preverán los montos requeridos para el pago de la remuneración de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial a que se refieren los literales e) y f) del artículo 52.1, que será no menor de la remuneración total de la de juez superior.

#### **Décima.- Modificación del inciso 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Modifícase el inciso 1) del artículo 6 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en los siguientes términos:

“Artículo 6.- No pueden ser elegidos como Consejeros:

1. El Presidente de la República, los Vicepresidentes, los Representantes al Congreso, el Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, los Ministros de Estado, los Viceministros y Directores Generales de los Ministerios, los miembros activos del Ministerio Público, los funcionarios

que ejercen autoridad política, los Alcaldes y los demás impedidos por ley, mientras están en el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo.”

**Décimo Primera.- Modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Modifícase el literal a) del artículo 21 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en los siguientes términos:

“Artículo 21.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura las atribuciones siguientes:

*a) Nombrar, previo concurso de méritos y oposición, a los jueces y fiscales de todos los niveles.”*

**Décimo Segunda.- Modificación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Modifícanse los literales b) y e) del artículo 22 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en los siguientes términos:

“Artículo 22.- El nombramiento de Jueces y Fiscales se sujeta a las siguientes normas:

(...)

b) Los postulantes deben solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura ser considerados candidatos y someterse al respectivo concurso de méritos y oposición, presentando los documentos que señale el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura.

(...)

e) Cumplido lo previsto por el inciso anterior, se procede a llevar a cabo el concurso de méritos y oposición de los postulantes.”

**Décimo Tercera.- Modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Modifícase el artículo 23 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en los siguientes términos:

“Artículo 23.- Las etapas del concurso de méritos y oposición son:

- a) Calificación de los méritos acreditados en el currículum vital.
- b) Examen escrito.
- c) Evaluación personal.
- d) Selección.

e) Aprobación del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) de la Academia de la Magistratura.

f) Nombramiento.”

**Décimo Cuarta.- Modificación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Modifícase el artículo 26 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en los siguientes términos:

“Artículo 26.- Quienes hayan aprobado el examen escrito serán sometidos a una entrevista para su evaluación personal por el Consejo.”

**Décimo Quinta.- Modificación del artículo 27 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Modifícase el artículo 27 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en los siguientes términos:

“Artículo 27.- *Con los resultados obtenidos en el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA), a que se refiere el artículo anterior, el Consejo Nacional de la Magistratura reunido en Pleno procede al nombramiento con arreglo al inciso a) del artículo 21 de la presente ley.*”

**Décimo Sexta.- Incorporación de artículo 26A de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Incorpórase a la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, el artículo 26A en los siguientes términos:

“Artículo 26A.- Los postulantes que hubieran alcanzado puntaje aprobatorio en las etapas anteriores tendrán la calidad de seleccionados y seguirán el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) de la Academia de la Magistratura.”

**Décimo Séptima.- Exoneración del pago de aranceles, tasas u otros**

Las solicitudes formuladas por los jueces en el ejercicio de su cargo a las entidades públicas estarán exoneradas del pago de aranceles, tasas u otros.

**Décimo Octava.- Tramitación de los procedimientos administrativos pendientes**

Los procedimientos disciplinarios iniciados antes de la vigencia de la presente ley continuarán su trámite según las normas procedimentales con las cuales se iniciaron.

#### **Décimo Novena.- Archivo de las quejas**

Los órganos de control archivarán de plano las quejas en trámite a la fecha de vigencia de esta norma que se sustenten en causales no previstas en los artículos 71º, 72º y 73º de la presente ley.

#### **Vigésima.- Auxiliares jurisdiccionales**

Hasta que no se encuentre vigente la Ley de Carrera de los Auxiliares Jurisdiccionales, su régimen disciplinario seguirá lo previsto por la actual Ley Orgánica del Poder Judicial.

#### **Vigésima Primera.- Derogación de los literales b) del artículo 21 y c) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura**

Deróganse los literales b) del artículo 21 y c) del artículo 22 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

#### **Vigésima Segunda.- Derogación de las Secciones Cuarta y Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial**

Deróganse las Secciones Cuarta y Quinta del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

#### **Vigésima Tercera.- Derogación genérica**

Derógase todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se opongan o contradigan a la presente ley.

### **GLOSARIO**

#### **Carrera judicial**

Conjunto de elementos sistemáticamente articulados entre sí, destinados a regular el ingreso, ascenso, régimen disciplinario, régimen laboral, prerrogativas, incompatibilidades, especialidad y retiro de quien ejerce función jurisdiccional. Se busca así asegurar la independencia de estos magistrados y la autonomía de la institución a la que pertenecen.

#### **Independencia**

Autodeterminación. Capacidad de poder decidir por uno mismo. Tiene dos dimensiones: la denominada independencia externa, frente a otras instituciones, y la interna, respecto de la misma institución.

La noción de independencia suele confundirse con la de autonomía, sin embargo, esta última, en sentido estricto, tiene que ver con la facultad de autorregularse, es decir, de darse sus propias normas, por lo que está vinculada no con las personas sino con las instituciones.

### **Selección**

Conjunto de etapas destinadas a captar al candidato más apto para desempeñar una función jurisdiccional. Para tal fin, se recurre a distintos tipos de exámenes, oposiciones, pruebas, consultas, entrevistas, y otros mecanismos.

### **Formación**

Procedimiento mediante el cual se ofrecen cursos especiales a los candidatos seleccionados, con el propósito de brindarles un conjunto de conocimientos y destrezas indispensables en el futuro ejercicio de la función que asumirán.

### **Nombramiento**

Acto por el cual, según lo establece el ordenamiento jurídico específico, se provee oficialmente del título de juez para desempeñar la función jurisdiccional.

### **Derecho**

Potestad de hacer aquello que se quiera realizar, o negarse a efectuarlo, cuyo ejercicio es exigible a instancias estatales e incluso a particulares, siempre y cuando esa decisión no vaya en contra de lo prescrito en el ordenamiento jurídico de un Estado en particular.

### **Deber**

Obligación impuesta por una norma jurídica de observar una cierta conducta. El contenido del deber jurídico, según la distinción tradicional, se traduce en la exigencia de hacer o no hacer algo.

### **Facultad**

Potencia o virtud, libertad que uno tiene para hacer alguna cosa.

### **Traslado**

Cambio temporal o permanente, a pedido de parte o de oficio, de un juez dentro de un mismo distrito judicial o a otro diferente, a un cargo de la misma categoría o grado.

**Permuta**

Cambio, a pedido de parte, de un juez por otro del mismo grado y competencia, aunque pertenezcan a distritos judiciales distintos.

**Permiso**

Autorizaciones otorgadas a los jueces para ausentarse en forma temporal de los puestos que desempeñan para así poder asumir diferentes comisiones o atender asuntos personales o particulares.

**Licencia**

Acto por el cual el superior jerárquico permite a los inferiores la suspensión temporal de la obligación de desempeñar sus funciones o cargo encomendado, con o sin goce de sueldo.

**Prohibición**

Conducta o acción que no puede realizarse en el ejercicio de un cargo.

**Impedimento**

Imposibilidad jurídica inherente al cargo que uno desempeña de, según sea el caso, acumular determinadas funciones públicas o ciertos mandatos electivos, o una función pública o mandato electivo con ciertas ocupaciones privadas.

**Incompatibilidad**

Imposibilidad jurídica inherente a la persona que ejerce un cargo de, según sea el caso, acumular determinadas funciones públicas o ciertos mandatos electivos, o una función pública o mandato electivo con ciertas ocupaciones privadas.

**Concubinato**

Relación de convivencia entre dos personas, sin importar su estado civil o género.

**Evaluación de desempeño**

Conjunto de acciones articuladas entre sí que tienen por finalidad la apreciación sistemática del comportamiento de la persona en el cargo que ocupa. La evaluación no se dirige a la persona sino a su desempeño en el ejercicio de la función que ejerce, y por ello, no es por sí misma un fin, sino solamente un instrumento, medio o herramienta para alcanzar diversos objetivos, como son los de



mejorar el desempeño en el futuro y utilizar mejor la gestión de los recursos humanos y materiales puestos bajo su responsabilidad, permitiendo el establecimiento de políticas adecuadas de compensación, traslados y ascensos sobre criterios más objetivos, promover incentivos o premios, diseñar estrategias de capacitación y desarrollo de carrera, entre otros.

IMPRESIÓN  
ALI ARTE GRÁFICO PUBLICACIONES S.R.L.  
AMÉRICO VESPUCIO 110 COVIMA, LA MOLINA  
TELÉFONOS: 349 6636 / 9938 1031  
*E- mail: [aliarte@speedy.com.pe](mailto:aliarte@speedy.com.pe)*  
TIRADA: 1000 EJEMPLARES  
JULIO2005  
LIMA - PERÚ